

511



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

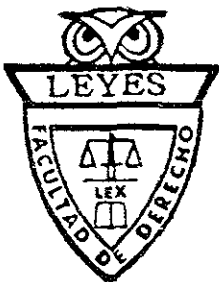
FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE DERECHO INTERNACIONAL

ANALISIS JURIDICO DEL DERECHO A LA EDUCACION BILINGUE PARA LOS INMIGRANTES MEXICANOS EN CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: LICENCIADO EN DERECHO PRESENTA MARGARITA JUDITH LOPEZ PEÑALOZA



ASESOR: DR. CARLOS ARELLANO GARCIA

2009

MEXICO, D.F.

2009



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

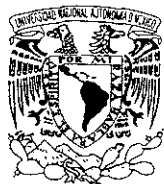


UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.



FACULTAD DE DERECHO
SEMINARIO DE DERECHO INTERNACIONAL

ING. LEOPOLDO SILVA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
U. N. A. M.
P R E S E N T E.

Distinguido Señor Director:

La pasante de Derecho, señorita MARGARITA JUDITH LÓPEZ PEÑALOZA, inscrita en el Seminario de Derecho Internacional bajo mi dirección, elaboró su tesis profesional titulada "ANÁLISIS JURÍDICO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN BILINGÜE PARA LOS INMIGRANTES MEXICANOS EN CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA", bajo la asesoría del Doctor Carlos Arellano García, investigación que después de su revisión por quien suscribe, fue aprobada.

De acuerdo a lo anterior y con fundamento en los artículos 18, 19, 20, 26 y 28 del vigente Reglamento de Exámenes Profesionales, solicito de usted, ordene la realización de los trámites tendientes a la celebración del Examen Profesional de Licenciada en Derecho de la señorita López Peñaloza

ATENTAMENTE.

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"
CD. UNIVERSITARIA, D. F., ABRIL 5, 2006



FACULTAD DE DERECHO
SEMINARIO
DE
DERECHO INTERNACIONAL
DRA. MARÍA ELENA MANSILLA Y MEJÍA
DIRECTORA DEL SEMINARIO

Nota: "El interesado deberá iniciar el trámite para su titulación dentro de los seis meses siguientes (contados de día a día) a aquél en que le sea entregado el presente oficio, en el entendido de que transcurrido dicho lapso sin haberlo hecho, caducará la autorización que ahora se le concede para someter su tesis a examen profesional, misma autorización que no podrá otorgarse nuevamente, sino en el caso de que el trabajo recepcional conserve su actualidad y siempre que la oportuna iniciación del trámite para la celebración del examen, haya sido impedida por circunstancia grave, todo lo cual calificará la Secretaría General de la Facultad".

México, D.F., a 11 de octubre del 2000

Dra. María Elena Mansilla y Mejía,
Directora del Seminario de Derecho Internacional.
Facultad de Derecho,
Universidad Nacional Autónoma de México.
P r e s e n t e

Distinguida Doctora y Maestra:

Me permito hacer de su conocimiento que la alumna Margarita Judith López Peñaloza ha concluido, bajo la dirección del suscrito, la tesis profesional denominada "Análisis jurídico del Derecho a la Educación Bilingüe para los Inmigrantes Mexicanos en California, Estados Unidos de América"

Lo anterior se lo comunico para todos los efectos académicos y escolares a que haya lugar.

Reitero a Usted las seguridades de mi atenta consideración


DR. CARLOS ARELLANO GARCÍA

**ANÁLISIS JURÍDICO DEL DERECHO A
LA EDUCACIÓN BILINGÜE PARA LOS
INMIGRANTES MEXICANOS EN
CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA.**

Gracias a Dios.

A mi madre y padre,
por haberme dado la vida y ayudarme a cumplir mis sueños.

A mi hermano César y a mi hermana Mara,
por su cariño y comprensión.

A Isabel, Isela, Cynthia, Paola, Virna, Yayoi, Erika y Alma,
por recorrer el camino de la vida junto a mí

A mi abuelo (+), David Peñaloza, ejemplo de lucha y superación.

A Sofía Orozco Aguirre,
por sus consejos, su colaboración y motivación.

A mi maestro y asesor de Tesis, Dr. Carlos Arellano García,
por su invaluable ayuda durante el transcurso de mi formación profesional
y su distinguida carrera como abogado.

A la Dra. María Trejo y al Dr. Fred Dobb,
porque sin su ayuda, no habría localizado la información para esta
investigación.

A Socorro Lara,
por haberme brindado orientación e información en mi propio idioma.

A María Teresa Gómez López,
por haber creído en mi trabajo y haber sido la primera persona en ayudarme.

A TODOS, GRACIAS.

ÍNDICE.	Pág.
INTRODUCCIÓN.	1
GLOSARIO.	4
CAPÍTULO I ANTECEDENTES.	
1.- ANTECEDENTES DE LA EDUCACIÓN EN MÉXICO.	10
1.1. La educación básica en México.	10
2.- ANTECEDENTES DE LA EDUCACIÓN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.	21
2.1. La educación elemental en los Estados Unidos de América.	21
CAPÍTULO II LEYES FEDERALES CONTRA LEYES LOCALES.	
1.- LA EDUCACIÓN BILINGÜE EN MÉXICO.	30
1.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.	30
1.1.1. Artículo 3º.	30
1.1.2. Artículo 4º.	32
1.2. Ley General de Educación.	36
1.3. Organización Internacional del Trabajo, Convenio 107 y 169.	37
2.- LA EDUCACIÓN BILINGÜE PARA LOS MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS.	39
2.1. Constitución de los Estados Unidos de América.	41
2.2. Ley de los Derechos Civiles.	43
2.3. Ley de Educación Bilingüe	45
2.4. Ley de Igualdad de Oportunidades Educativas	48

**CAPITULO III LA IMPORTANCIA DEL IDIOMA EN LA EDUCACIÓN
EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**

1.- BENEFICIOS Y ELEMENTOS A FAVOR DE LA EDUCACIÓN BILINGÜE.	
1.1. Beneficios sociales.	50
1.2. Beneficios culturales.	53
1.3. Beneficios económicos.	55
1.4. Beneficios políticos.	57
2. – OBSTÁCULOS Y ELEMENTOS EN CONTRA DE LA EDUCACIÓN BILINGÜE.	
2.1. Obstáculos sociales.	61
2.2. Obstáculos culturales.	63
2.3. Obstáculos económicos.	65
2.4. Obstáculos políticos.	66

**CAPÍTULO IV LA EDUCACIÓN EN EL AMBITO FEDERAL Y EN EL
ÁMBITO LOCAL**

1.- REGULACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO PARA LOS INMIGRANTES.	69
2.- DICTÁMENES FAVORABLES PARA LA EDUCACIÓN BILINGÜE.	74
2.1. Casos en la Suprema Corte.	74
2.2. Casos en las Cortes Federales.	79
3.- LA OFICINA DE LOS DERECHOS CIVILES DEL DEPARTAMENTO DE FEDERAL DE ENSEÑANZA.	
3.1. Infracciones contra estudiantes con conocimiento limitado de inglés.	82

CAPÍTULO V	LA EDUCACIÓN: UN DERECHO FUNDAMENTAL.	
1.-	PROPUESTA 187.	87
1.1.	Supresión de derechos elementales.	87
1.2.	¿Para inmigrantes o para mexicanos?	90
1.3.	En contra de la Constitución de los Estados Unidos de América.	92
CAPÍTULO VI	LA EDUCACIÓN BILINGÜE EN CALIFORNIA	
1.	PROPUESTA 227.	96
1.1.	¿Quién es Ron Unz?	96
1.2.	English Only en California.	100
1.3.	Consecuencias de la aprobación de la Propuesta 227.	104
CONCLUSIONES.		117
ANEXOS.		
Anexo 1.-	Ley de los Derechos Civiles de 1964.	120
Anexo 2.-	Ley de Educación Bilingüe de 1968.	124
Anexo 3.-	Caso Lau vs. Nichols.	145
Anexo 4.-	Ley Chacón-Mascone.	147
Anexo 5.-	Proposición 63.	159
Anexo 6.-	Propuestas de oficialidad del inglés.	160
Anexo 7.-	Iniciativa 227.	165
Anexo 8.-	Demanda contra la Iniciativa 227.	168
BIBLIOGRAFÍA.		184

INTRODUCCION

En el ámbito nacional y mundial, la educación y todo lo relacionado con el derecho a recibirla son tema de indiscutible actualidad.

Por ello, fue satisfactorio realizar el estudio que hoy se somete a la consideración del Honorable Jurado con el sincero deseo de que constituya una modesta orientación para quienes, interesados en la educación que reciben los mexicanos en Estados Unidos de América, requieran información sobre su derecho a recibir instrucción en español.

Dos fueron las razones fundamentales por las cuales decidí realizar esta investigación: dar coherencia al conocimiento previo que tenía de la educación para las comunidades mexicanas en el exterior; y saber si recibir educación en español en Estados Unidos de América constituye un derecho para los mexicanos "del otro lado".

En Estados Unidos de América, un país capitalista que asume el rol del país ideal a imitar por naciones en vías de desarrollo y con creciente papel de líder de asuntos tecnológicos, económicos y políticos; se duda que la panacea para ganar la guerra a la pobreza sea la educación.

Sin embargo, el éxito o fracaso de un individuo en la sociedad norteamericana empieza en la escuela, porque con la educación cualquier persona es capaz de cambiar su determinación social de origen. Pero al tener un origen diferente, es decir, un origen no anglosajón, la lucha por el acceso a la educación es doble, como individuo y como extraño al sistema.

Desde los años sesenta, los movimientos pro derechos civiles y las reivindicaciones de las minorías hicieron llegar al escenario político, con particular intensidad, la problemática de recibir iguales oportunidades educativas, es decir, recibir educación bilingüe.

La educación bilingüe la conocí inicialmente, a través de la lectura de diversos autores e investigadores que habían abordado el tema con anterioridad. Este ejercicio se completó con información de expertos en el tema del Departamento de Educación de California y de la Oficina de Educación Bilingüe y Asuntos Lingüísticos Minoritarios

De igual forma, viví más de un año en ese país, inmersa en su sociedad y en su sistema educativo, lo que me ha permitido acceder a una perspectiva amplia de la educación bilingüe y del estilo de vida de los mexicanos en los Estados fronterizos, básicamente en California y en Arizona.

Lo anterior, me permitió conocer las condiciones actuales de la problemática educativa en que viven los mexicanos. Y al mismo tiempo, fui parte de esa forma de vida al enfrentar abusos de poder, privilegios, e incluso, desconocimiento como ser humano.

Mi investigación se centra en presentar los elementos jurídicos que permiten acceder a nuestros connacionales a recibir educación en español mientras aprenden el idioma que les permita acceder a clases regulares del sistema educativo de los Estados Unidos de América.

Esta investigación inicia con un resumen de los antecedentes de la educación que reciben los mexicanos en nuestro país, así como un panorama general de la educación básica en Estados Unidos de América, ya que para entender el sistema educativo norteamericano es imprescindible conocer el sistema educativo de los mexicanos en su propio país.

En el siguiente capítulo, se enumeran las leyes que han servido, y servirán como fundamento jurídico para demandar los derechos para acceder a iguales oportunidades educativas por parte de todas las minorías que residen en los Estados Unidos de América, incluyendo a los mexicanos.

Los capítulos subsecuentes describen la participación de los ámbitos de gobierno de los Estados Unidos de América, así como la participación de la sociedad norteamericana en el desarrollo de la educación bilingüe. Asimismo, se enuncia la participación de la Suprema Corte y de las Cortes Federales, ejemplificando su valiosa participación en el reconocimiento de derechos educativos para los inmigrantes.

Por último, se describe la condición educativa de los mexicanos en el Estado de California, donde vive la mayor cantidad de mexicanos en Estados Unidos

El presente documento fue elaborado librando barreras económicas, de idioma, de miedo, de nostalgia y añoranza. Sin embargo, me di cuenta de algo: el privilegio de ser una estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México significa ser reconocido como un sobreviviente en cualquier circunstancia y país

Es así como este proyecto pretende contribuir, de manera modesta pero comprometida al reencuentro del ejercicio de los derechos educativos de los mexicanos que residen en Estados Unidos de América.

Margarita Judith López Peñaloza.

GLOSARIO.

Acción afirmativa o tratamiento preferencial.¹

Es la "discriminación al revés", consistente en lo esencial en acuerdos, con base los cuales la ley autoriza medidas especiales o diferencias en trato hacia diferentes personas, cuando existen ciertas condiciones, apartándose en tales casos del principio de la igualdad formal entre todos. Por lo general, tales medidas tienden a proteger o promover el bienestar de los miembros de un grupo de la sociedad anteriormente objeto de discriminación, siempre y cuando el grupo en cuestión desee que tales medidas se adopten.

Aculturación.²

Proceso que ocurre cuando se establecen contactos culturales entre grupos diferentes que influye en los patrones de una o ambas culturas. Es un "camino de dos direcciones", y desde un punto de vista individual significa la aceptación y la adopción de parte de los comportamientos de la cultura en la que se interacciona.

Asimilación.

Proceso por el cual un grupo minoritario adopta gradualmente la cultura del grupo mayoritario, abandona su cultura de origen y acepta los comportamientos y valores de su nueva sociedad por la que, en definitiva, es absorbido.

Cultura.³

Sistema de conocimientos y valores compartidos por un grupo humano concreto que genera percepciones y comportamientos sociales similares. Se transmite de generación en generación y se aprende para poder subsistir en el seno del grupo.

Chicanos.

Hijos de padres mexicanos que no sólo son agudamente conscientes de su identidad y ascendencia mexicana, sino que también, representan todo un movimiento, que tiene su renacer después de la Segunda Guerra Mundial, durante el decenio de 1960.

Discriminación.⁴

Toda distinción, exclusión, limitación o preferencia fundada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica o el nacimiento, que tenga por finalidad o por efecto destruir o alterar la igualdad de trato en la esfera de la enseñanza.

¹ Natán Learner, *Minorías y Grupos de Derecho Internacional, Derecho y Discriminación*, Comisión Nacional de Derechos Humanos, México, 1991, p. 221.

² Marina Lovela, *Educación Multicultural, Lengua y cultura en la escuela plural*, Editorial Escuela Española. España, 1995, p. 29

³ Op. cit., p. 29.

⁴ UNESCO, art. 1, *Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Enseñanza*, 1992.

Educación Bilingüe.⁵

Instrucción utilizada como medio de transición del español al inglés basada en la enseñanza del idioma inglés por medio de la lengua nativa de los estudiantes minoritarios. La participación en un programa de educación bilingüe es temporal.

La enseñanza bilingüe tiene a su vez otros programas:

- a) **Inmersión o dos caminos.**- Los estudiantes se hacen expertos en los dos idiomas por recibir la instrucción en inglés y su idioma natal en el salón de clases. El salón de clases está formado por estudiantes de habla inglesa y por estudiantes de otras lenguas. Los dos tipos de estudiantes aprenden juntos, ayudándose unos a otros. El tiempo dedicado a cada una de las diferentes lenguas depende del programa. Algunos dedican para cada lengua la mitad del día escolar.
- b) **Salida tarde.**- Es un programa que usa el idioma natal así como el inglés para aprender las materias generales. La instrucción en las dos lenguas se prolonga hasta los últimos años de la educación primaria, usualmente hasta el quinto o sexto grado. Cuando los estudiantes alcanzan una fluidez académica en el idioma inglés, son extraídos del programa y pasan a ser parte de las clases sólo en inglés.
- c) **Inglés como segunda lengua (contenido).**- Enseña únicamente gramática y el lenguaje por sí mismo, éste incluye la enseñanza en inglés de materias tales como matemáticas, ciencia y ciencias sociales.
- d) **Inglés como segunda lengua (tradicional)**- Usualmente el estudiante toma clases especiales en inglés. Estas clases pueden ser de 30 minutos, hasta medio día. A no ser que esté combinado con algún tipo de educación bilingüe, este tipo de programas de inglés como segunda lengua no usa lenguas natales.

Educación Bilingüe-Bicultural.

Es un proceso que usa la lengua y la cultura nativa para la enseñanza de los cursos académicos elementales o secundarios, hasta que las habilidades con el segundo idioma, el inglés, se han desarrollado suficientemente para tomar clases únicamente en inglés.

Educación multicultural.⁶

Método de enseñanza y aprendizaje que se basa en un conjunto de valores y creencias democráticas, y se busca fomentar el pluralismo cultural dentro de las sociedades culturalmente diversas y en un mundo cada vez más interdependiente.

⁵Media Alliance, *Educación Bilingüe. Mitos y hechos sobre la Propuesta 227*, www.media-alliance.org/voices/bilingual/espanolfags.html

⁶Marina Loveira, *Educación Multicultural*, op. cit., p. 29

English Only.

Movimiento fundado por Emmy Shafer, en Florida, en 1978. Pretende eliminar los idiomas diferentes al inglés dentro de los Estados Unidos, buscando su oficialidad, por medio de una enmienda constitucional que establezca que el inglés es el idioma oficial dentro de los Estados Unidos, extinguiendo básicamente la prestación de servicios públicos en cualquier idioma diferente a éste.

English Plus.

Movimiento creado por la Liga Hispano Americana Contra la Discriminación en contra del término *english only*, con el que se pretende señalar que se quiere aprender más inglés, sin la desaparición de su propio idioma.

Estereotipo.⁷

Idea preconcebida o simplificación socialmente compartida, de los rasgos culturales de un determinado grupo. Los estereotipos son la base de prejuicios e impiden considerar a las personas como individuos, pues sólo se percibe al grupo al que pertenecen y se les considera dentro de una categoría concreta preestablecida.

Estudiantes con conocimiento limitado de inglés (LEP).⁸

Son individuos que no nacieron en los Estados Unidos de América, o que no tienen como lengua nativa el inglés; quienes se encuentran en un ambiente en el que la lengua que se domina es una lengua distinta al inglés, y por muchas razones tienen dificultad para hablar y entender este.

Étnia o grupo étnico.⁹

Grupo social con una historia común en el que sus miembros comparten una serie de valores y un sistema de comunicación que les permite establecer un sentido de identidad y pertenencia; normalmente se suelen diferenciar de otros grupos y definirse por contraste con ellos. Los grupos étnicos se pueden establecer con base en rasgos físicos, culturales o por ambos. Cuando un grupo étnico se encuentra dentro de una sociedad en la que la cultura predominante no coincide con la del grupo, y siendo a menudo éste numéricamente inferior, se le denomina grupo étnico minoritario o minoría étnica.

Hispano-latino.

Se agrupan en una sola categoría individuos que son descendientes de hispanohablantes, sumando de este modo a los españoles, mexicanos, puertorriqueños, cubanos, salvadoreños, dominicanos y demás individuos que tienen sus orígenes en el centro y sur del continente americano.

⁷ *Ibidem*, p. 30.

⁸ Rudiee A. Inzarni, *Bilingual Education State and Federal Legislative Mandates, Implications for Program Design and Evaluation*. Center for the Study of Evaluation, UCLA, Los Angeles, 1978.

⁹ Marina Lovela, *Educación Multicultural*, op. cit., p. 30.

Hispanofobia.

Odio a las personas que pertenecen al mundo hispano, es decir, a todos aquellos que son descendientes de hispanoparlantes, ya sea por sus características físicas o por expresarse en su idioma, el español.

Identidad.

Proceso mediante el cual un individuo, un grupo o una sociedad expresa su sentido de pertenencia a un mismo pasado, presente y futuro que representa la identificación con sus rasgos, su idioma, su cultura, su nación, su religión, su étnia, sus antepasados y todo aquello que simbolice igualdad entre los miembros y diferencia para aquellos que no comparten las mismas características.

Indígenas.¹⁰

Individuos considerados tales por el hecho de descender de comunidades que habitan en un país que fue conquistado o colonizado, o en una región geográfica de ese país y que, cualquiera que sea su situación jurídica, viven más en conformidad con las instituciones sociales, económicas y culturales de esa época que con las instituciones de la nación a la que pertenecen.

Integración.¹¹

Término utilizado en oposición al de segregación o discriminación y se refiere al proceso por el que todos los individuos o grupos sociales que forman parte de una sociedad tienen igualdad de oportunidades y acceden a los mismos bienes y servicios sociales establecidos.

K-12.

Es la educación obligatoria en los Estados Unidos de América, es decir, doce grados de educación: jardín de niños o preescolar (2 años), educación elemental (6 años) y educación secundaria o *junior high school* (4 años).

Lengua materna, nativa o primaria.

Es el idioma que sabe el alumno por motivo de su origen nacional, por su ascendencia, por práctica en la comunidad y/o por ser el primer idioma que aprendió.

Mexicoamericanos/americanos de ascendencia mexicana.¹²

Términos para identificar a la población de origen mexicano nacido en Estados Unidos, hijos de padres mexicanos.

¹⁰ OIT, art. 1, *Convenio 107*, 1957.

¹¹ Marina Lovela, *Educación Multicultural*, op cit , p. 30.

¹² El concepto mexicoamericano lo usaré sin guión, ya que la separación la lleva intrínseca.

Minorías.¹³

Son aquellos grupos no dominantes dentro de una población, que poseen y desean preservar tradiciones o características étnicas, religiosas o lingüísticas marcadamente diferentes al resto de la población.

Migrantes.¹⁴

Existen cuatro tipos de inmigración mexicana a los Estados Unidos:

- a) **Inmigrantes legales**, mexicanos que fueron admitidos por las autoridades norteamericanas previo otorgamiento de permiso otorgado por el gobierno de los Estados Unidos.
- b) **Transmigrantes**, mexicanos que han recibido permiso de las autoridades norteamericanas mediante la cual se les autoriza a trabajar en los Estados Unidos aunque tengan su residencia en México.
- c) **Braceros**, son los mexicanos admitidos por las autoridades norteamericanas para desempeñar trabajos bajo contrato.
- d) **Inmigrantes no documentados**, mexicanos que residen y trabajan en los Estados Unidos sin permiso alguno, también llamados "espaldas mojadas" o "alambristas".

Niños migrantes.

Hijos de trabajadores agrícolas, que peregrinan por las distintas regiones de Estados Unidos en busca de trabajo de temporada:

Sus características son:

- a) Son niños que nacieron en México, o bien sus padres son oriundos de México;
- b) Su lengua materna, es el español;
- c) Cuando estos niños llegan en edad escolar a los Estados Unidos, saben leer y escribir en español, además de tener conocimientos inherentes al grado alcanzado en México en las áreas que marca el programa escolar vigente;
- d) En ocasiones no poseen una estructura formal académica propia y en casos extremos, desconoce incluso su lengua nacional.

Pluralismo cultural.¹⁵

Corriente que propone el derecho de la existencia de otras lenguas y de otras culturas en el salón de clases, su fundamento esencial es el poder enriquecer la educación de los alumnos, ofreciendo varios caminos tanto para las minorías como para la mayoría.

¹³ Natán Lerner, *Minorías y Grupos de Derecho Internacional*, ONU, Subcomisión para la Prevención de la Discriminación y Protección de Minorías, 1954, op. cit., p. 23.

¹⁴ Jorge A. Bustamante, *Espaldas Mojadas: Materia prima para la expansión del capital norteamericano*, Colegio de México, 1976, p.

¹⁵ Joshua A. Fishman and Gary D. Keller, *Bilingual Education for Hispanic Student in United States*, Columbia University, New York, 1982, p. 57

Prejuicio.¹⁶

Conjunto de actitudes, normalmente rígidas y desfavorables, que se muestran hacia algo o alguien y que se dan como preconcebidas; ayuda a generar juicios de valor sobre personas sin tener un conocimiento previo de las mismas; crea estereotipos sobre grupos sociales y provocan actitudes discriminatorias. Los prejuicios suelen estar socialmente generalizados y eso explica la facilidad con que se asumen.

U.S. English.

Movimiento fundado en 1983, por el Senador Hayakawa, de ascendencia japonesa e inmigrante canadiense y el Dr. John Tanton, oftalmólogo de Michigan, con el objetivo principal de promover enmiendas constitucionales para que cada Estado de los Estados de la Unión convirtieran el inglés en su lengua oficial.

Xenofobia.

Es un prejuicio que se manifiesta en forma de odio u hostilidad hacia los extranjeros, en particular hacia los de raza negra, hispana y asiática.

¹⁶ Manna Lovela, *Educación Multicultural*, op. cit., p 30

1.- ANTECEDENTES DE LA EDUCACIÓN EN MÉXICO.

1.1. La educación básica en México.

Para analizar la educación que los mexicanos reciben en los Estados Unidos de América, es imprescindible revisar la educación que reciben en su propio país.

La educación en México ha sido y será una prioridad para el gobierno y la sociedad en general. Constituye uno de los pilares de nuestra Constitución Política, emblema y bandera de las mejores luchas a lo largo de nuestra historia. Como resultado, se ha consolidado la educación como una garantía individual y como un deber social del Estado, al tiempo que se ha afianzado la concepción de la educación como instrumento idóneo para promover mejoras constantes en los niveles de bienestar de los mexicanos y desarrollo del país.

Por razones históricas, se hará un resumen de la evolución de la educación obligatoria en México:

En 1812 Don Miguel Ramos Arizpe señaló en las Cortes de Cádiz que "la educación pública es uno de los primeros deberes de todo gobierno". Esta convicción fue recogida en 1814 por la Constitución de Apatzingán, al establecer el compromiso de la sociedad con la instrucción de los mexicanos.¹

Con la Constitución de 1824 se estableció la concurrencia de la Federación y de los Estados en la promoción y establecimiento de los planteles educativos. Sin embargo, fue hasta la Constitución de 1857 que se incluyó por primera vez la regulación de la educación como derecho individual, expidiéndose en 1857 el primer ordenamiento en materia de instrucción

¹José Ángel Pescador Osuna, *Ensayos sobre la Modernidad Nacional* Editorial Diana, México, 1989, pgs 317-331

primaria gratuita, aunque limitada a las personas de escasos recursos y con carácter de obligatoria.²

En el Constituyente de Querétaro de 1917, se ratifican los conceptos fundamentales de la evolución constitucional de la materia educativa, en su artículo tercero, al reiterarse la enseñanza libre, laica y gratuita.³

Fue hasta la reforma del artículo tercero Constitucional del 4 de diciembre de 1934 que establece que la educación primaria se vuelve obligatoria.

Por último, en febrero de 1993 se decretó a la educación secundaria como parte de la educación obligatoria.

Si bien esta es una relación sucinta de la evolución de las disposiciones jurídicas que atañen a la educación en México, es conveniente recordar que paralela a ellas se ha dado una gran obra educativa, de los resultados de ésta, baste citar los datos que el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el C. Ernesto Zedillo Ponce de León en los informes de gobierno de 1999 y 2000 presentó a la Nación: la escolaridad llega hoy a los siete grados y medio, lo cual significa un grado más que en el censo de 1990 y cerca de tres veces más que en 1960, en tanto que el índice de analfabetismo está por debajo de 10 por ciento, mientras que en 1990 era de 12.4 por ciento y en 1960 de 44.5 por ciento.

Los avances han sido significativos, pero también resultan evidentes los rezagos manifestados en los altos niveles de deserción y baja eficiencia. Como consecuencia se ha hecho necesario fomentar una mayor participación del Estado, rector de la educación, como lo establece el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria.

² José Ángel Pescador Osuna, Ensayos sobre la Modernidad Nacional, p. 317-333.

³ *Ibidem*.

Considerando a la educación como una materia fundamental, resulta relevante analizar brevemente el marco jurídico correspondiente:

-El sistema educativo se integra básicamente por los servicios de educación que ofrece el Estado, a través de la Federación, Entidades federativas y Municipios, ya que en México la educación primaria y secundaria es obligatoria por mandato constitucional.

-En el artículo 3º Constitucional se definen las características de la educación, los fines que le asigna el Estado, así como los principios básicos que la sustentan. Además, señala las obligaciones y derechos que competen al gobierno y a los particulares en materia educativa, afirmando ante todo, que la educación es un derecho.⁴

-De igual forma, la Constitución de cada Entidad Federativa establece las atribuciones que en materia educativa tiene cada uno, siempre subordinados a los preceptos de carácter federal.

-En el artículo 31 de la Carta Magna se establecen las obligaciones de los mexicanos. En su fracción I, especifica como una de ellas hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación primaria y secundaria.

-En México, la facultad para establecer, organizar y sostener en toda la República las escuelas de todos los niveles y modalidades, así como otros servicios educativos, es facultad del Congreso de la Unión, según el artículo 73 fracción XXV de nuestra Constitución. Además, al mismo Poder se le confiere la responsabilidad de dictar leyes para distribuir la función educativa entre la Federación, Estados y Municipios.

⁴ El artículo 3º, constitucional es materia de un análisis completo en el siguiente capítulo

-La educación impartida por el Estado y los particulares es regulada por la Ley General de Educación del 13 de junio de 1993, ley reglamentaria del artículo tercero constitucional.

-El gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, detenta la autoridad normativa, técnica y pedagógica para el funcionamiento de la educación. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 38, determina la competencia de la Secretaría de Educación Pública como dependencia del Poder Ejecutivo Federal encargada de la función educativa. Dicha Secretaría tiene para su mejor funcionamiento su Reglamento Interior publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 1994. En este reglamento se enumera con mayor amplitud la función y organización de tal dependencia para un mejor desempeño de sus atribuciones.

Actualmente, se suman a este marco jurídico básico dos documentos con el objeto de elevar la escolaridad y fortalecer el cumplimiento del pacto federal en materia educativa:

-El primero de ellos es el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, de mayo de 1992. Firmado por las autoridades educativas federales, los gobiernos de las entidades federativas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

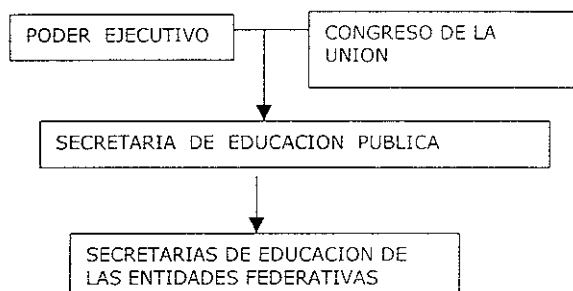
-El Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000, el segundo de ellos, recoge los lineamientos de política, las estrategias y acciones que orientan la gestión educativa de la actual administración.

El concretar los anteriores documentos significó la transferencia del control de los servicios federales de educación básica al ámbito estatal; a partir de entonces, los gobiernos de las entidades son responsables de la operación de las escuelas de su jurisdicción.

En las actuales condiciones mundiales, un país que no es capaz de dar a sus habitantes el acceso a niveles adecuados de educación, está irremisiblemente condenado a la marginación. Para la obtención de buenos resultados es necesaria una estructura adecuada y bien organizada. La educación, en México, abarca los ámbitos federal, estatal y municipal, tanto institucional como particular.

La Federación proporciona la mayor parte de los servicios educativos, sobre todo la educación preescolar, primaria y secundaria; por tal motivo, es la que participa con mayor cantidad de recursos financieros, humanos y materiales en esta tarea. A manera de ejemplo, en el primer semestre de 1998, el gasto programable pagado correspondiente a la función de desarrollo social ascendió a 148,980.2 millones de pesos, destinándose a educación el 47.1 por ciento del total.

Sin embargo, a quien le corresponde organizar la educación en el ámbito nacional es a la Secretaría de Educación Pública.



La Secretaría de Educación Pública se encarga, por lo tanto, de diseñar y programar el avance y desarrollo de toda la educación básica en nuestro país. Como rector de la educación, el gobierno federal ha creado diferentes dependencias que colaboran al cumplimiento de todos y cada uno de sus objetivos.

Cabe destacar que dentro de la Secretaría de Educación Pública, sus órganos desconcentrados y descentralizados juegan un papel muy importante en el cumplimiento de funciones específicas, entre los primeros tenemos a la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y Radio Educación. Dentro de los órganos descentralizados se encuentran la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG)⁵, el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), el Instituto Nacional Indigenista (INI) y el Instituto Nacional para la Educación de Adultos (INEA).

En el sector educativo, también se cuenta con la participación de empresas privadas: tal es el caso de Educal, S.A.; Centro de Investigación y Docencia Económica, A.C. (CIDE); el Colegio de México, A.C. (COLMEX) y el Fondo de Cultura Económica, S.A. de C.V. (FCE).

Revisar la estructura de la educación pública en México no es el objetivo de esta investigación, sin embargo es importante remarcar que muchos de los problemas en México están ligados al reto educativo. Tener una educación básica, amplia, de calidad, apropiada y diversificada, es lo que se debe proponer. Una población mejor educada producirá y demandará más bienes y servicios, mejorará su situación económica, política, social y cultural.

Los contenidos educativos se han tratado de resolver con las últimas reformas al artículo tercero constitucional y a sus leyes derivadas, en donde se establece la opción de cursar la educación preescolar y la obligatoriedad de cursar la educación primaria y secundaria.

En el ciclo escolar 1997-1998, correspondió al sistema escolarizado el 81.6 por ciento de la matrícula total de alumnos que cursan la educación básica lo que significa que se brindó atención a cerca de 22.9 millones de educandos, de los cuales 14.5 por

⁵ Durante el ciclo escolar 1998-1999, se distribuyó un total aproximado de 147 millones de libros de texto gratuitos, cifra que supera las metas originalmente establecidas y representa con mucho, el mayor número de ejemplares entregados en los 39 años de operación del programa.

ciento estaban inscritos en preescolar; 64 por ciento en primaria, y el 21.5 por ciento restante en secundaria. Cabe señalar que el Estado atendió a 93 de cada 100 alumnos y los particulares a 7 de cada 100.

Educación básica, 1997-98/1998-99. (Ciclos escolares)

Concepto	1997-98	1998-99 ^{6/}	Variación absoluta		Variación %	
			97-98/96-97	98-99/97-98	97/96	98/97
Matrícula (Miles)	22,889.3	23,102.7	191.2	213.4	0.8	0.9
Preescolar	3,312.2	3,378.4	73.9	66.2	2.3	2.0
Primaria	14,647.8	14,640.0	-2.7	-7.8	-0.02	-0.05
Secundaria	4,929.3	5,084.3	120.0	155.0	2.5	3.1
Maestros	959,013	974,426	12,508	15,413	1.3	1.6
Preescolar	145,029	147,928	-1,218	2,899	-0.8	2.0
Primaria	531,389	532,087	6,462	698	1.2	0.1
Secundaria	282,595	294,411	7,264	11,816	2.6	4.2
Escuelas	190,098	194,506	6,522	4,408.0	3.6	2.3
Preescolar	66,801	68,136	3,482	1,335	5.5	2.0
Primaria	97,627	99,627	1,772	2,000.0	1.8	2.0
Secundaria	25,670	26,743	1,268	1,073	5.2	4.2

^{6/} Cifras estimadas

Fuente: SEP

A continuación se hará referencia a los puntos más importantes que constituyen la educación básica en México: la educación preescolar, educación primaria y la educación secundaria.

La educación preescolar atiende a niños de tres, cuatro y cinco años de edad. Este nivel de educación se ofrece en tres modalidades: general, indígena y cursos comunitarios. Se imparte generalmente en tres grados, los cuales no son obligatorios, y para inscribirse en el segundo o tercer grado no es condición haber cursado los anteriores; tampoco es requisito formal, aún cuando en ocasiones materialmente lo es, para ingresar a la educación primaria.

La política educativa del gobierno busca que la mayor parte de los niños que se incorporan a la primaria hayan cursado por lo menos un grado de preescolar, puesto que ello generalmente se traduce en un mejor desempeño.⁶

⁶Durante el periodo 1997-1998, se proporcionaron servicios de preescolar a 3.3 millones de niños, casi 74 mil más que en el ciclo anterior, para lo cual se instalaron 3,482 escuelas adicionales. Mientras que la población en edad de cursar estos estudios ha empezado a disminuir ligeramente, la matrícula aumenta a una tasa de cerca del 2 por ciento anual. Se estima que en la actualidad, alrededor de 90 por ciento de los niños de cinco años de edad reciben servicios educativos.

La educación primaria es obligatoria y se imparte a partir de los 6 años de edad, en seis grados. La primaria se integra por diversas modalidades:

- a) *Primaria general.* Es la educación ofrecida por la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional, constituida por seis ciclos escolares, de un año cada uno; se estudian materias básicas: matemáticas, español, historia, ciencias naturales, deportes y actividades artísticas.
- b) *Primaria indígena.* Destinada a este sector de la población; se organiza a través de diversas modalidades: Escuelas Primarias Bilingües, Centros de Integración Social, Círculos de Estudio y Radio Bilingüe.
- c) *Primaria abierta.* Destinada preferentemente a los adultos, se puede cursar según el tiempo y necesidades del estudiante. Algunas modalidades son los Centros Regionales de Educación, Círculos de Estudio, Albergues Escolares, Cursos Comunitarios y Centros de Educación Básica para Adultos.

En cualquiera de sus modalidades, la educación primaria es previa e indispensable para cursar la educación secundaria.

La eficiencia terminal en la primaria continúa incrementándose. En julio de 1998, los alumnos egresados en este nivel constituían un número equivalente a 84.8 por ciento de los alumnos de nuevo ingreso que se incorporaron a la primaria seis años atrás. Esto representa un aumento de más de 10 puntos porcentuales respecto a 1994.

La educación secundaria es obligatoria desde 1993 y en este nivel se consideran los siguientes servicios:

- a) *Secundaria general.* Con carácter propedéutico, para preparar al alumno a fin de ingresar al nivel superior.

b) *Secundaria técnica* Aparte de funcionar como propedéutico, da oportunidad al estudiante de incorporarse al mercado de trabajo con una formación de carácter terminal

c) *Telesecundaria* Utiliza la televisión como principal medio para la enseñanza.

d) *Secundaria para trabajadores*. Destinada a trabajadores de edad variable, se da en turnos nocturnos.

e) *Secundaria abierta*. Se otorga a la población adulta.

La secundaria se proporciona en tres años a la población que haya concluido la primaria. Este nivel es necesario para iniciar estudios medios superiores.

El incremento en el número de egresados de primaria hace posible ampliar la cobertura de la secundaria. De esta forma, en el ciclo 1997-1998 se incorporó a este nivel educativo una cifra superior a 1.8 millones de estudiantes, lo que representa 87.8 por ciento de los egresados de primaria del ciclo escolar anterior. Así, la matrícula total de secundaria en este ciclo, 1998-1999, alcanzó poco más de 4.9 millones de educandos, es decir, 120 mil más que en el periodo anterior, que equivalen a un aumento de 2.5 por ciento. La proporción de estudiantes registrados en secundaria respecto de la población de 13 a 15 años, ha aumentado de 71 por ciento del año escolar 1994-1995 a casi 78 por ciento en el ciclo que terminó en julio del 2000. ⁷

En el ciclo lectivo 2000-2001 el gobierno federal espera que la matrícula de nuevo ingreso a la secundaria se incremente en aproximadamente 100 mil personas. Este crecimiento duplica el promedio de los últimos cinco años desde que la secundaria se hizo obligatoria, y es atribuible al aumento en el número de becas financiadas por el Programa de Educación, Salud y Alimentación

⁷Fuente: informe de gobierno del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos del 1º de septiembre de 1998, 1999 y 2000.

(PROGRESA); así como a una inversión adicional de 200 millones de pesos en secundarias, en el marco del nuevo Programa para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica (PAREIB).⁸

En el ciclo escolar 1997-1998 la Secretaría de Educación Pública inició la distribución de libros de texto gratuitos para secundaria, con lo cual se benefició a 244 mil alumnos de primer grado, en los municipios que observan los mayores rezagos educativos. Durante el presente ciclo, el Programa federal se amplió a un millón de estudiantes de primero y segundo grados, y a 900 mil alumnos de los tres grados de la telesecundaria; adicionalmente, las entidades federativas distribuyeron gratuitamente libros de texto beneficiando a un millón 200 mil estudiantes. Con la concurrencia de las entidades federativas, se entregaron 22.3 millones de ejemplares para secundarias en sus diversas modalidades en todo el territorio nacional, en beneficio de alrededor de 3.1 millones de estudiantes.⁹

Mientras que en 1997 el índice de analfabetismo era de 10.1 por ciento, al inicio de 1998 se estima que se haya reducido a 9.8 por ciento. Durante el periodo 1997-1998, se atendió a cerca de 2.5 millones de adultos en los cursos de alfabetización, primaria, secundaria y capacitación no formal para el trabajo, según datos de la Secretaría de Educación Pública.

Bajo los principios del nuevo federalismo establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, durante el ciclo 1997-1998 se brindó atención educativa a poco más de 28 millones de niños y jóvenes en los diversos tipos y modalidades que conforman el Sistema Educativo Nacional. Participaron 1 millón 354 mil maestros en más de 207 mil planteles educativos. Para el presente ciclo escolar se estimó un incremento de 462 mil alumnos. En este mismo ciclo escolar hay 1.4 millones de profesores, quienes imparten la educación en más de 212 mil planteles.¹⁰

⁸ Información basada en los informes de gobierno del presente sexenio.

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ Perfil Educativo: informe de la Secretaría de Educación Pública del ciclo escolar 1999-2000.

Matrícula del Sistema Educativo Nacional por tipo de control, 1997-98/1998-99
(Miles de alumnos)

Concepto	Ciclos escolares		Variación absoluta		Variación %	
	1997-98	1998-99 ^{6/}	97-98/96-97	98-99/97-98	97-98/96-97	98-99/97-98
Total	28,056.8	28,518.6	641.4	461.8	2.3	1.6
Básica	22,889.3	23,102.7	191.2	213.4	0.8	0.9
Federal	1,755.2	1,750.2	-3.7	-5.0	0.2	-0.3
Estatal y autónomo	19,529.3	19,704.7	102.7	175.4	0.5	0.9
Particular	1,604.8	1,647.8	92.2	43.0	6.1	2.7

^{6/}A partir del ciclo 1997-98, considera la matrícula atendida a lo largo del ciclo escolar, es decir, la existencia de alumnos al fin de cursos

^{6/}Cifras estimadas

Fuente: SEP.

Esta evolución es atribuible a factores demográficos, combinados con el mejoramiento en la eficiencia de la educación básica en el sistema escolarizado y con los esfuerzos nacionales en el campo de la alfabetización. Cabe señalar que el analfabetismo se limita cada vez más a la población de mayor edad que habita en comunidades lejanas y dispersas.

Ante este panorama, es indudable que la educación constituye una de las más altas prioridades nacionales. De no actualizarse la educación y alcanzar una cobertura óptima en términos de grados de estudio, los mexicanos buscarán oportunidades de progreso, no con la educación en su país, sino con su trabajo más allá de la frontera.

2.- ANTECEDENTES DE LA EDUCACIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

2.1. La educación elemental en los Estados Unidos de América.

Sin lugar a duda, la educación es materia fundamental para el desarrollo de todo individuo y sociedad. Sin embargo, al no existir dos sociedades iguales tampoco existen dos sistemas educativos iguales: ya sea por su historia, por su grado de desarrollo o por su sistema jurídico.

A continuación, se analizará brevemente el sistema educativo del país vecino del norte por ser el que atiende al mayor número de mexicanos más allá de nuestra frontera, después del sistema educativo mexicano. Según información de *Estrategy Research Corp.*, existen 19.2 millones de mexicanos en Estados Unidos, es decir, 63% de la población hispana.

Con el nacimiento de la democracia norteamericana, nació también la organización escolar pública. Los ciudadanos de las primeras colonias, *absorbieron el control y la responsabilidad educativa.*¹¹

Por lo tanto, la Junta Directiva, primer órgano encargado de la administración educativa, fue la expresión de un grupo de ciudadanos que vivían y sentían las necesidades comunes de sus vecinos.

De esta manera, la educación adquirió un sentido local, puesto que respondía a las necesidades y conducta social de su entorno. La posible intervención de la autoridad estatal, y aún federal, se limitaba a determinar los "mínimos a satisfacer".

¹¹La primera escuela pública en lo que sería Estados Unidos fue establecida en Massachusetts en 1645. También fue esa entidad la primera en promulgar una ley de asistencia obligatoria a la escuela en 1852.

Para los norteamericanos de aquella época, el control federal sobre la educación significaba una violación al ejercicio de su democracia ya que no era posible educar bajo las mismas ideas y metodología a quienes de origen se concebían diferentes. Recuérdese los orígenes tan diversos de la población de las primeras colonias y el celo por preservar sus diferencias.

Si bien, Jefferson y los otros autores de la Constitución de los Estados Unidos pensaban que la educación era importante, también creían que la educación era una responsabilidad local, ejercida y dirigida apropiadamente por la comunidad. La educación no iba a ser impartida por una autoridad central

La Constitución de los Estados Unidos crea un sistema federal de gobierno que abarca tres capas: nacional, estatal y local. La teoría general en esta complicada red y algunas veces traslapada, es que el control de todas las funciones del gobierno debería estar tan cerca como sea posible del ciudadano individual.

Como resultado, en la educación como en otras áreas, el control es ejercido por el gobierno local, porque cada nivel de gobierno hace lo que puede hacer mejor. Por ejemplo, el gobierno nacional se ocupa de cuestiones de defensa nacional, circulación monetaria y de las relaciones internacionales entre otras. Los gobiernos de los Estados se ocupan de mejorar carreteras y puentes estatales, prisiones estatales, universidades estatales, y otras actividades. A su vez, el gobierno local se ocupa de aquellos departamentos y actividades que son únicamente locales por su carácter y alcance, como los tribunales locales, los departamentos de policía y los servicios sanitarios. Por tanto, las escuelas en Estados Unidos de América han sido mantenidas históricamente por los gobiernos locales.

Sin embargo, la Constitución de los Estados Unidos de América, como principal fundamento jurídico, es deliberadamente silenciosa sobre la cuestión de cómo educar a sus habitantes. Según el desarrollo histórico de cada Estado,

se ha establecido el sistema educativo en el contexto legal de sus constituciones, garantizando para sus habitantes la educación gratuita y obligatoria.

Las constituciones estatales delinean cómo será establecido y mantenido un sistema uniforme de escuelas públicas. Algunas constituciones describen detalladamente provisiones esenciales para un sistema formal de educación pública y estipulan con cierto detalle las responsabilidades financieras, de organización y pedagógicas de los Estados. En otras, la responsabilidad es delegada a la legislatura o a una asamblea general.

La Constitución, al no hacer mención específica de la educación, según la Décima Enmienda: "los poderes no delegados a los Estados Unidos (*sic.*) por la Constitución o por los Estados, están reservados a los Estados respectivamente". Tal es el caso de la materia educativa.

Como resultado, los responsables de la educación son los Estados, no el gobierno federal de Estados Unidos.

Mientras los Estados pueden forzar a los distritos escolares locales a responder a sus autoridades directivas, el gobierno nacional no tiene una relación semejante con los Estados o con los distritos escolares, por lo menos en cuestión de enseñanza, pedagogía, libros de textos escolares o normas para los maestros y estudiantes. Sólo en áreas en que se plantean cuestiones federales –como en el caso de los derechos civiles de los ciudadanos– hay alguna jurisdicción del gobierno nacional.

Pese a todo lo anteriormente expuesto, el gobierno federal carece de un ministerio central de educación. En su ausencia, existen más de 50 oficinas estatales de educación con jurisdicción absoluta en asuntos educativos dentro de cada Estado. Dentro de la administración federal, existe la Secretaría de Educación con fines meramente de supervisión.

Si bien no se tiene una jurisdicción federal en la educación, el Poder Judicial, representado por la Suprema Corte y las Cortes federales, han tenido una gran participación en cuestiones educativas.

En la Ley de los Derechos Civiles de 1964 se afirmó que. "al ser la educación una obligación de los Estados, desarrollada en cooperación con la Unión y realizada por los distritos escolares, le compete a la Suprema Corte Federal el cumplimiento de los preceptos que garanticen la igualdad de oportunidades educativas para todos los niños, jóvenes y ciudadanos, sin motivo alguno para la discriminación por motivos económicos, de raza, sexo, religión o posición política".¹²

Por lo anterior, las decisiones de la Suprema Corte y de las Cortes federales han influido en la definición de los siguientes términos:¹³

1. La educación es un servicio público;
2. La educación es obligatoria para la población comprendida entre los 7 y 16 años de edad;¹⁴
3. Las escuelas públicas serán gratuitas, al menos hasta terminar la educación secundaria;
4. Los Estados tienen la jurisdicción legal para organizar distritos escolares y establecer programas educativos;
5. Los Estados regularán las cuestiones educativas por medio de un Código de Educación;
6. En cuestión de violación a derechos educativos por motivos económicos, de raza, de sexo, religión o posición política, el gobierno federal tiene la posibilidad de intervenir.

¹² Véase la Ley de los Derechos Civiles de 1964 en los anexos.

¹³ Miguel Antonio Meza Estrada, *La Enseñanza en la Torre de Babel. La Educación Pública en Estados Unidos*, 2ª Edición, Editorial, Más Actual Mexicana de Ediciones, S.A. de C.V., México, 1995, p.235.

¹⁴ Generalmente, la educación obligatoria es de 12 años, mejor conocida como K-12.6 años de elemental, 2 años de secundaria y 4 de bachillerato

Así como estas normas básicas en materia de educación, el sistema educativo en cualquier Estado implica cumplir con un organigrama elemental:

Departamento de Educación, constituido por el Estado, encargado de instrumentar la prestación del servicio educativo.¹⁵

Los departamentos estatales de educación son los órganos responsables de aplicar la política contenida en la Constitución estatal, canalizar los recursos económicos estatales y federales, y coordinar todas las funciones administrativas.

Están integrados por tres partes básicas:

A. Junta Estatal de Educación.

En cada Estado el número de integrantes así como sus funciones y propósitos son notablemente diferentes. Sin embargo, las funciones generales son:

- Organización del sistema educativo general y supervisión de actividades de los distritos escolares.

- Regulación de los sistemas educativos, mediante acuerdos y reglamentos.

- Establecimiento de los requerimientos curriculares, certificación de maestros y aprobación de libros de texto.

- Determinación de la cantidad de días que funcionarán las escuelas, típicamente 180 días por año.

B. Jefe del Sistema Educativo llamado Superintendente o Comisionado de Educación.

¹⁵ En 1867 el Gobierno Federal estableció el Departamento de Educación destinado a capturar y difundir información estadística.

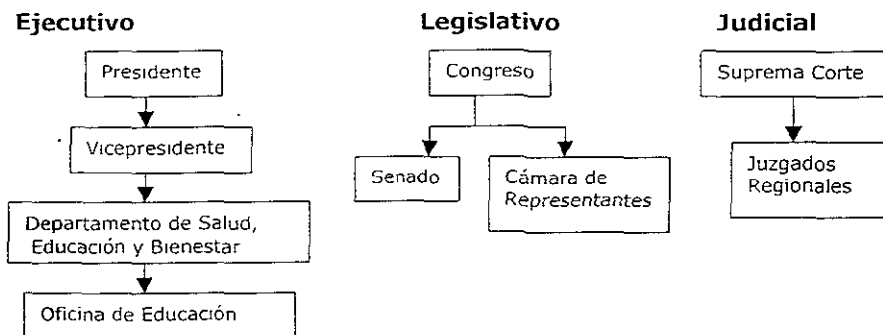
Es el titular de los servicios educativos; en algunos Estados es electo, en otros es designado por el Gobernador o por la Junta Estatal de Educación

C. Personal de servicio.

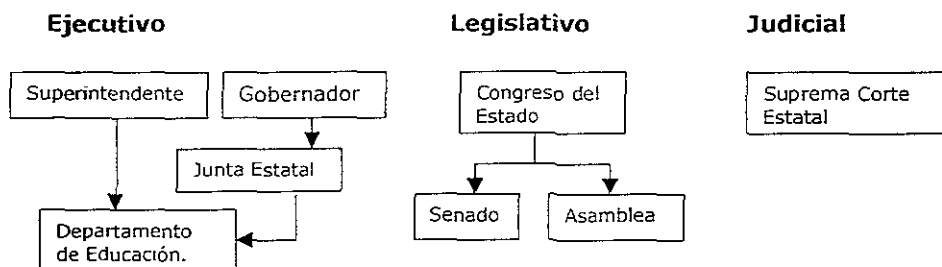
Constituido por todo el personal en general que hace posible que se lleven a cabo todos los servicios administrativos con mayor eficiencia directores de programas específicos (educación migrante, educación bilingüe, inglés como segunda lengua, etc.), asistentes, secretarias, etc.

A continuación se presentará un esquema básico de la administración escolar en los diferentes ámbitos de gobierno, para su mejor comprensión.

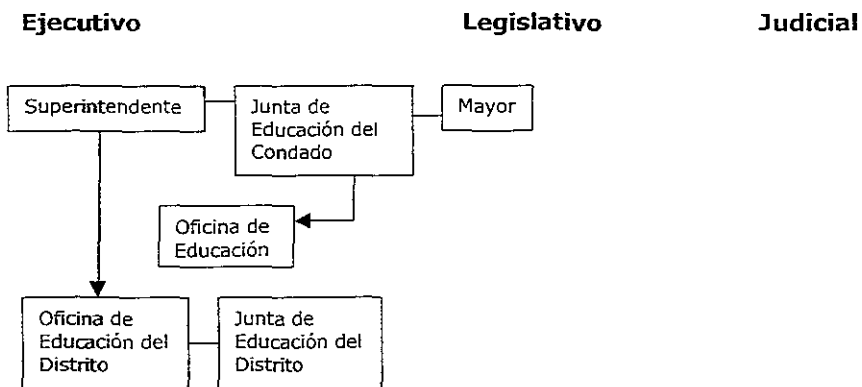
Administración federal.



Administración estatal.



Administración Local.



Otro punto fundamental de la administración educativa de los Estados Unidos es el distrito escolar; una división política administrativa dentro del Estado, con un territorio demarcado, una población a la cual prestar servicios educativos, bajo la dirección de la Junta Local de Educación. En el ámbito estatal, las Juntas de Educación Estatales supervisan las actividades de los Distritos Escolares.

Como una cuestión legal, los Distritos Escolares son creaciones del Estado, y las atribuciones que éstos ejercen son de su exclusiva competencia, al recibirlas directamente del Estado.

Aunque la autoridad formal de las Juntas de Educación Estatales y de los Superintendentes parece ser grande, todos los distritos escolares disfrutan de autonomía e independencia sustanciales. Todos ellos desarrollan presupuestos, establecen objetivos pedagógicos, y contratan y despiden personal. Típicamente son responsables del diseño, construcción y mantenimiento de sus edificios escolares. Si algo sale mal, los demandados en una querrela judicial son el Distrito Escolar y el Superintendente, no el gobernador.¹⁶

Por lo tanto, durante los últimos 200 años, los diferentes niveles de gobierno involucrados en la educación han trabajado juntos y cooperando. Por ejemplo: en el caso del presupuesto, el gobierno nacional en Washington proporciona en promedio, el 7 por ciento de los recursos recibidos por las escuelas locales; los gobiernos estatales otorgan más del 50 por ciento, y los locales más del 25 por ciento. Como consecuencia, la amenaza de un Estado de retener fondos si un Distrito Escolar se niega a acatar una ley o disposición estatal, es un poderoso freno ante la posibilidad de incumplimiento. Si un Distrito Escolar no cumple los lineamientos generales estatales, el Superintendente local no enfrenta la posibilidad de ir preso, en cambio, su Distrito Escolar pierde sus fondos estatales, medida de control que representa una catástrofe que paralizaría sus escuelas. El dicho de que "el que paga la

¹⁶ Hoy día, las escuelas están organizadas en más de 14 000 distritos escolares independientes. Actualmente Hawái, es el único estado con un sistema escolar estatal. En contraste, California y Texas, tienen más de mil distritos escolares.

música elige la canción” no es más cierto en ningún otro aspecto de la vida estadounidense que en la educación.

Así como los tres niveles de gobierno buscan la toma de decisiones, de igual forma, todos los sectores minoritarios de la población americana buscan su incorporación y representación en el sistema educativo, puesto que sin dicha representación, estarán excluidos del proceso educativo igualitario, respecto al resto de los estudiantes de los Estados Unidos de América.

Cabe mencionar que los estudiantes, considerados como parte de una minoría, constituyen el 30 por ciento de la población estudiantil. De esos estudiantes, el 12 por ciento es hispano. Asimismo, la distribución educativa por raza es: 66 por ciento para blancos, 16.2 por ciento para negros, 12.3 por ciento para hispanos, 3.6 por ciento para asiáticos y 1.1 por ciento para indios americanos y nativos de Alaska.¹⁷ Esta distribución educativa también es por zonas; los mexicanos se encuentran dentro de la categoría de mayor número de alumnos inscritos en los Estado de California, Arizona, Nuevo Mexico, Texas e Illinois.¹⁸

¹⁷U.S. Department of Education, *National Center for Education Statistics, Schools and Staffing Survey, 1993-94*, Washington, D.C., 1997.

¹⁸ Información de la Oficina de la Secretana de Estado de Arizona, Censo 2000 en Phoenix, Anzona.

1.- LA EDUCACIÓN BILINGÜE EN MÉXICO.

1.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

1.1.1. Artículo 3º .

Actualmente, la educación rebasa el acontecer al interior de las aulas. La educación no sólo constituye la enseñanza de un programa educativo, también es un medio para adquirir valores, actitudes, habilidades y comportamientos que posibilitan una perspectiva más amplia de la sociedad y un mejor proyecto de vida.

En la búsqueda de los mexicanos para acceder a una educación de calidad, que responda a las necesidades de formación de individuos y contribuya al desarrollo del país, nació el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Como se mencionó en el capítulo anterior, el artículo 3º referido y la Ley General de Educación, son los principales cuerpos legales que regulan el Sistema Educativo Nacional y establecen los fundamentos de la educación en México.

El artículo 3º de la Constitución, estipula que todo individuo tiene derecho a recibir educación y que la Federación, los Estados y los Municipios la impartirán en los niveles de preescolar, primaria y secundaria. De igual forma, decreta que la educación primaria y secundaria son obligatorias, siendo el Estados quien tiene el deber de impartirlas.

En 1993 fue aprobada la última reforma al artículo 3º constitucional que le dió su perfil actual. Entre otras cosas, se estableció el **derecho** que tienen

todos los individuos en México a la **educación preescolar, primaria y secundaria**, así como la obligatoriedad de la enseñanza secundaria.

En este mismo precepto constitucional se definen las características de la educación, los fines que le asigna el Estado, así como los principios básicos que la sustentan. Además, señala las obligaciones y derechos que competen al gobierno y a los particulares en materia educativa.

"ART. 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado - Federación, Estados y Municipios- impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y secundaria son obligatorias."¹

La educación debe ser impartida por el gobierno federal como una de sus principales obligaciones, siendo uno de los derechos fundamentales para los mexicanos, ya que se encuentra dentro del apartado de las garantías individuales.

Por lo tanto, la educación obligatoria en México es la educación básica, es decir, la primaria y la secundaria.

En México, la educación es competencia federal con la participación de las entidades federativas y los municipios, que se coordinan a través de la Secretaría de Educación Pública, órgano descentralizado del Poder Ejecutivo.

La enseñanza está a cargo de instituciones públicas y privadas, en todos los niveles. Sin embargo, el Ejecutivo Federal determina los planes y programas de estudio de la educación primaria, secundaria y normal (educación media superior) para toda la República.

El Congreso de la Unión - Cámara de Senadores y Cámara de Diputados- es el encargado de legislar en materia educativa para toda la Federación. Como consecuencia, la legislación en materia educativa debe ceñirse a los

¹ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1999.

lineamientos generales de la educación en México, establecidos en el párrafo segundo del artículo 3º Constitucional, es por ello que el Congreso de la Unión es el órgano encargado de incluir las características generales de la educación en todos los proyectos de la misma.

"ART. 3º.-

II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además: a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; b) Será nacional, en cuanto a que -sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, y c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio por la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos; "

Como lo indica el artículo antes mencionado, la educación es para todos, incluyendo a aquellas personas que no hablan español, lengua que usa la mayor parte de la población en México. Por lo tanto, el gobierno federal ha creado diversos programas de enseñanza bilingüe, para niños y adultos.

Para cumplir dicho objetivo es necesaria la participación de diversas instituciones, no sólo con fundamento en el artículo tercero Constitucional sino también en el artículo cuarto de la propia Constitución.

1.1.2. Artículo 4º.

Como reconocimiento a la pluralidad de mexicanos existentes dentro de México y a las diferencias costumbres aún dentro del mismo territorio, en el artículo 4º Constitucional se refleja una de tantas medidas tomadas por el

gobierno mexicano para conservar y respetar la diversidad cultural con la que cuenta la República.

A continuación se hará la transcripción del artículo antes mencionado:

"ART. 4o.- La Nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado..."²

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática, la población nacional es predominantemente mestiza y de habla hispana. Sin embargo, casi 10 millones de indígenas buscan preservar su patrimonio lingüístico, cultural y social, esta población tienen una diversidad parlante de más de 80 lenguas y variantes dialectales; más de 80% de esta población se concentra en nueve Estados: Yucatán, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Hidalgo, Campeche, Puebla, Guerrero y San Luis Potosí. El resto de los grupos indígenas se encuentra disperso en el resto del territorio nacional.

Aquateco	Hontal-tab	Huichol	Lacandón	Motozintleco	Popoluca	Tojolabal
Amuzgo	Chuj	Ixcateco	Mame	Nahuaft	Purépecha	Totonaca
Cakchiquel	Cochimi	Ixil	Matlatzinca	Ocuilteco	Quiché	Triqui
Catino	Cora	Jacalteco	Maya	Otomí	Serí	Tzeltal
Chichimeca-	Cucapá	Kanjobal	Mayo	Paipai	Tarahumara	Tzotzil
Jonaz	Cuicateco	Kekchí	Mazahua	Pame	Teco	Yaqui
Chocho	Guarijío	Kikapú	Mazateco	Papágo	Tepehua	Zapoteco
Chol	Huasteco	Kiliwa	Mixe	Pima	Tepehuán	Zoque
Chontal-aox	Huave	Kumiai	Mixteco	Popoloca	tlapaneco	

Información del Instituto Nacional Indigenista, 1998.

La población que habla una lengua indígena sumaba 5.5 millones en 1995. Si se consideran como indígenas a todas aquellas personas que forman parte de un hogar donde el jefe o su cónyuge hablan lengua indígena, esta cifra se incrementa a 9.2 millones. Se estima que la población indígena

² Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1999.

crece a una tasa de 1.23 por ciento anual, ritmo mucho menor que el registrado por la población en su conjunto.³

La participación del gobierno federal no se ha quedado únicamente en enumerar la presencia de los pueblos indígenas. La mayor tarea se realiza por el Instituto Nacional Indigenista en coordinación con la Secretaría de Educación Pública.

Después de la reforma al artículo 4º Constitucional, la participación de instituciones como el Instituto Nacional Indigenista (INI), el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), e incluso la Universidad Nacional Pedagógica (UPN) han realizado innumerables esfuerzos para cooperar en la gran tarea de satisfacer las necesidades educativas de los pueblos indígenas.

Como parte de las acciones dirigidas hacia las entidades federativas que experimentan un elevado grado de marginación y registran una elevada proporción de población indígena, tales como Chiapas, Hidalgo, Oaxaca y Puebla, entre otras, se suscribieron acuerdos de coordinación con los gobiernos de las mismas a fin de poner en marcha programas de acción, que considerando las necesidades y aspiraciones de los pueblos indígenas y sus características culturales y de organización, permitan elevar la cobertura y calidad de los servicios de planificación familiar y salud reproductiva así como fortalecer las acciones de información, educación y comunicación y al mismo tiempo promover estrategias viables y eficaces en materia de población y desarrollo.

Con la iniciativa de reformas al artículo 4º Constitucional turnada al Congreso de la Unión sobre derechos y cultura indígenas, se reflejó el compromiso indeclinable y el principio de cambio estructural para enfrentar la

³ Fuente: Estadísticas del Consejo Nacional de Población, CONAPO, 1999

situación de injusticia, exclusión y pobreza en que viven cerca de 10 millones de indígenas.

Desde 1998 la Secretaría de Educación Pública ha reforzado las acciones orientadas a proporcionar educación a la población indígena y como resultado, se avanzó en la cobertura de los programas compensatorios en las escuelas de educación indígena y de los contenidos curriculares, de las formas de organización de los servicios y las normas académicas de las escuelas, con el fin de proporcionar un servicio de mayor calidad y acorde a la situación de las diversas comunidades.

Por otra parte, se desarrolló el Programa de Mejoramiento del Sistema de Formación Inicial de Profesores Bilingües, que funciona con base en un sistema de becas para apoyar a los maestros en la conclusión o ampliación de sus estudios; así mismo se amplió la producción de materiales en lengua indígena.

En el año escolar 1997-1998 se proporcionaron servicios de educación preescolar y primaria indígena a 1,027,200 niños y jóvenes, lo que significa que se extendió la cobertura en 18,400 personas.⁴

La educación bicultural indígena se imparte en español y en 52 lenguas y sus variantes, para lo cual se cuenta con los libros y materiales desarrollados *exprofeso* y se fortalece la formación y actualización de los docentes. Para el ciclo escolar 1998-1999, se repartieron 1,067,305 ejemplares para apoyar la educación indígena.⁵

Sin embargo, las necesidades van más allá de las respuestas, las condiciones en que vive el pueblo mexicano no son las adecuadas para prestar la atención requerida a las necesidades educativas. Por ello, se ha tratado de regular de la mejor manera posible la organización y prestación de servicios

⁴ Fuente: Instituto Nacional Indigenista, 1999.

regular de la mejor manera posible la organización y prestación de servicios educativos creándose la Ley General de Educación, ley reglamentaria del artículo tercero constitucional.

1.2. Ley General de Educación.

La Ley General de Educación es la ley reglamentaria del artículo 3º Constitucional y explica de una forma más amplia los objetivos de la educación bilingüe en México.

La vocación educativa de México ha significado una preocupación nacional, permanente y prioritaria. Ejemplo de ello es la creación, en 1921, de la Secretaría de Educación Pública, Secretaria encargada de la materia educativa en toda la Federación. Sus objetivos están dirigidos a todos los miembros de la sociedad mexicana para impulsar la capacidad productiva y mejora sus instituciones económicas, sociales, políticas y científicas, puesto que contribuye decisivamente a fortalecer la unidad nacional y a consolidar la cohesión social, a promover una más equitativa distribución del ingreso, a fomentar hábitos más racionales de consumo, a enaltecer el respeto a los derechos humanos, en particular el aprecio a la posición de la mujer y de los niños en la comunidad, y a facilitar la adaptación social al cambio tecnológico.

Así, el artículo 7 de la ley en mención señala:

"ART.7 La educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3º de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

IV. Promover, mediante la enseñanza de la lengua nacional -español-, un idioma común para todos los mexicanos, sin menoscabo de proteger y promover el desarrollo de las lenguas indígenas; "

Es decir, se protegera el desarrollo de las lenguas indígenas sin dejar a un lado el aprendizaje de la lengua que la mayoría de los mexicanos hablan, más de 90 millones de personas

El respeto a los principios de pluralidad y tolerancia, no son sólo fundamentos de la organización y desarrollo en México, son también principios internacionales que rigen a países compuestos por gran variedad de grupos, distintos por sus tradiciones y cultura pero iguales por ser todos miembros de una misma Nación.

1.3. Organización Internacional del Trabajo. Convenio 107 y Convenio 169.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el Convenio sobre Poblaciones Indígenas y Tribuales de 1957, todos los países que cuenten con población indígena deben asegurar educación en todos los grados y en igualdad de condiciones que el resto de la población.

Los requisitos para la educación para las poblaciones indígenas son:

-Enseñar a los niños de las poblaciones a leer y escribir en su lengua materna o, cuando ello no sea posible, en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo al que pertenezcan.

-Se deberá asegurar la transición progresiva de la lengua materna o vernácula a la lengua nacional ó, a una de las lenguas oficiales del país.

-Deberán adaptarse disposiciones para preservar el idioma materno o la lengua vernácula.

Los anteriores puntos tienen como objetivo preservar las características sociales y culturales de dichas poblaciones y, a su vez, integrarlas a la colectividad nacional sin perjuicio de desigualdad y discriminación.

El Convenio 107 fue revisado en 1989, y como resultado de la revisión surgió el Convenio 169. Del contenido de este último, en materia de educación, los resultados más importantes son:

-El reconocer el derecho de los pueblos a crear sus propias instituciones y medios de educación respetando las normas mínimas establecidas por la autoridad competente y, el deber de asegurar que los libros de historia y material didáctico ofrezca descripción equitativa, exacta e instructiva de las sociedades y cultura de dichos pueblos.

Tales aspiraciones pretenden una verdadera igualdad entre los pueblos indígenas y el resto de la población, a pesar de tener diferentes valores, costumbres y perspectivas.

En nuestro país, la educación básica es un derecho y una garantía individual para todos y cada uno de sus habitantes sin perjuicios de raza, color, sexo o religión.

Hasta ahora, no todos los objetivos han sido cumplidos, ya que gran parte de la población tiene niveles educativos muy bajos, pues al no tener oportunidades para subsistir, tampoco cuenta con la posibilidad de estudiar. Por ello, los pueblos indígenas, son los primeros en emprender la búsqueda de mejores oportunidades.

Finalmente, no son los únicos en buscar algo mejor; desde hace más de cien años, miles de mexicanos han encontrado en nuestro vecino del Norte, lo que tanto buscaban: subsistir, sin detenerse a pensar que allá no serán iguales, que serán sobrevivientes de la lucha por la igualdad y el respeto a su vida y libertad.

2.- LA EDUCACIÓN BILINGÜE PARA LOS MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS.

Con los primeros mexicanos que se quedaron del otro lado del Río Bravo comienza la lucha por la educación bilingüe. Contra los preceptos del Tratado de Guadalupe-Hidalgo de 1848, que establecía el respeto a la propiedad de la tierra, la lengua y la cultura de la población de origen mexicano; la educación se orientó a lograr la aculturación de este grupo, a quienes comúnmente se consideró inferiores, buscando cambiar su idioma y su cultura.⁶

El *Tratado de Guadalupe-Hidalgo otorgaba derechos y garantías para la continuidad cultural de la población que decidiese permanecer en el territorio ocupado y adoptar la nacionalidad norteamericana, se estipulaba el mantenimiento de la cultura y el idioma español.*

El ejemplo más claro lo dió la Constitución del Estado de Nuevo Mexico de 1910: "Consagraba que el derecho de todos los ciudadanos a votar, a desempeñar cargos públicos o a formar parte de un jurado no podría ser limitado por la incapacidad de hablar, leer o escribir la lengua inglesa o española. La primera legislatura del nuevo Estado colocó en pie de igualdad tanto al inglés como al español, para asuntos oficiales, dando así a Nuevo Mexico oficialmente un carácter bilingüe".⁷

No en todo Estados Unidos fue igual, por décadas los mexicanos fueron objetos de serias vejaciones: eran castigados por hablar español, se les hacía sentir vergüenza de su herencia cultural, muchos fueron etiquetados como de lento aprendizaje, lesionando su autoestima y provocando con ello el fracaso escolar. Fueron años que marcaron a varias generaciones de mexicanos y de los que recién llegaban.

⁶ Reuben W. Hellin, *The New Mexico Constitutional Convention*, *New Mexico Historical Review*, 21. No. 1, 1946, pgs. 60-68.

⁷ David Maciel, *Aztlan: Historia del pueblo chicano (1848-1910)*, Ediciones SEP., 1975, p.163.

Sin poderlo evitar, la crítica situación educativa de muchas minorías, la discriminación y segregación, motivaron el nacimiento de organizaciones que lucharon por la defensa de estos derechos. Se hicieron intentos por implementar la enseñanza del inglés como segunda lengua en las escuelas de nivel elemental con alumnos que no hablaban esta lengua, pero los resultados no fueron los esperados, por falta de maestros y de financiamiento para estos programas, los programas estaban lejos de ser realmente bilingües.

Las causas del rezago educativo para muchas de las minorías es consecuencia, en parte, de no encontrar una solución dentro del sistema jurídico de los Estados Unidos de América que les permita acceder a la educación en su propio idioma; primero, por no ser ciudadanos norteamericanos o no parecer serlo, y segundo, porque todas las minorías están divididas, cada raza busca sus propios beneficios.

La raza negra busca más becas deportivas; los asiáticos buscan becas de intercambio internacional, y los hispanos, únicamente buscan fundamentar su derecho de acceso a la educación en su propio idioma.

Como se ha mencionado en el capítulo anterior, la educación no es un derecho constitucional, el derecho a recibir educación y educación bilingüe, tiene su fundamento en la Enmienda X y Enmienda XIV a la Constitución de los Estados de América por cuestiones de igualdad y de no discriminación, más no por existir dentro de la Constitución de Estados Unidos derechos educativos. La Ley de los Derechos Civiles de 1964, la Ley de Educación Bilingüe de 1968 y la Ley de Igualdad de Oportunidades Educativas de 1974 también son documentos básicos para fundamentar tal derecho.⁸

⁸U.S. Department of Education. www.ed.gov/

2.1. Constitución de los Estados Unidos de América.

El punto de partida dentro del marco legal educativo es la inexistencia de la materia educativa dentro de la Constitución de Estados Unidos de América, como una obligación para el Estado y un derecho para el pueblo. La educación es una responsabilidad asignada a los Estados, que no está expresamente contenida en la Constitución federal y su operación descansa en las autoridades locales, por aplicación de la Enmienda X a la Constitución de los Estados Unidos, que a la letra señala:

Enmienda X : “Los poderes que la Constitución no delegada a los Estados Unidos ni prohíbe a los Estados, quedan reservados a los Estados respectivamente o al pueblo.”

Como se mencionó en el capítulo anterior, la materia educativa es jurisdicción de los Estados, pero vigilada por la Suprema Corte de los Estados Unidos, es decir, por el gobierno federal.

En Estados Unidos, las demandas por casos de discriminación y negación de igualdad de oportunidades educativas son muy frecuentes.

La educación, ciertamente, es materia estatal; sin embargo, no se puede ir en contra de los principios generales que establece el Departamento de Educación de los Estados Unidos. Cada Estado emite propuestas educativas según su Constitución y Código de Educación, aún en contra de leyes de orden federal. Baste citar que en California se pretende eliminar el derecho a recibir educación bilingüe, aún existiendo una Ley de Educación Bilingüe federal y otra estatal.

Asimismo, la Constitución en su Enmienda XIV establece:

SECCION I. Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sometidas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y de los Estados

en que residen. Ningún Estado podrá dictar ni dar efecto a ley alguna que limite los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; tampoco podrá Estado alguno privar a una persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni negar a persona alguna que se encuentre dentro de sus límites jurisdiccionales la protección de las leyes, igual para todos.

Siendo éste el fundamento para la igualdad entre todos los habitantes de los Estados Unidos, dicho precepto otorga la misma protección a todos los miembros de las minorías por el simple hecho de estar bajo su jurisdicción, sin importar su calidad migratoria ni su condición de raza, color u origen.

En este ámbito, la historia más reciente de la lucha por la igualdad de derechos educativos bilingües en los Estados Unidos, por ciudadanos americanos con origen diferente al anglosajón, comienza con la llegada de miles de cubanos exiliados en Miami a principios de 1950. Para 1963 se estableció en el condado de Dade un experimento bilingüe en la escuela de *Coral Way*, donde niños cubanos (hispanoparlantes) y norteamericanos (angloparlantes) tomaban clases en dos idiomas; este programa fue financiado por la Fundación Ford.⁹

No fue este experimento en Florida lo que le dio el mayor impulso al reciente movimiento en pro de la educación bilingüe, sino una serie de estudios llevados a cabo en varios Estados del suroeste del país por la Comisión de Derechos Civiles, entidad creada por el Congreso Federal en 1957, con el propósito de investigar violaciones de derechos civiles y humanos, por cuestiones lingüísticas, contra ciudadanos norteamericanos. Estos estudios se conocieron bajo el título de "*The Mexican American Study*".¹⁰

Estos acontecimientos y los resultados de dichos estudios propiciaron que por primera vez se dieran a conocer públicamente las pésimas condiciones a que estaban sujetos miles de niños mexicanos y mexicoamericanos en los sistemas escolares públicos de Texas, Nuevo Mexico, Arizona y Colorado. Los problemas de pobreza, deserción escolar y retraso

⁹ David W. Steward, *Immigration and Education. The Crisis and the Opportunities*, Ed. Lexington Books, New York, 1993, p.156

¹⁰ *Ibidem*

académico, junto con los probados abusos que se perpetraban en contra de alumnos por el solo hecho de hablar español, ofendieron la conciencia nacional del país. Se demostraba ante la sociedad norteamericana la segregación y discriminación de los alumnos de origen mexicano.

Esto ocurría en una época de efervescencia social y política encabezada por el movimiento chicano; su empeño por lograr la igualdad de oportunidades educativas en las siguientes décadas sigue vigente hasta este momento. Los resultados de su lucha han sido y serán de utilidad para las siguientes generaciones de hispanos en busca de mejores condiciones sociales, económicas y políticas.

Aunque los derechos de los ciudadanos mexicoamericanos no están reconocidos en ninguna ley de los Estados Unidos de América, el simple hecho de ser ciudadanos, y en todo caso, de estar bajo la jurisdicción del gobierno en cualquiera de los tres niveles -local, estatal o federal-, les da derecho a recibir los mismos beneficios que reciben los ciudadanos "blancos".

Aún los mexicanos no ciudadanos, residentes e indocumentados, tienen derecho a recibir los mismos beneficios educativos por cuestiones de igualdad.

2.2. Ley de los Derechos Civiles.

En 1963, por iniciativa del Presidente John F. Kennedy se inicia el proyecto de la Ley de los Derechos Civiles que se consolidaría hasta el gobierno del Presidente Lyndon Baines Johnson, en 1964.

Es importante mencionar el Título IV Y VI de la Ley de los Derechos Civiles ya que han servido para luchar contra la desigualdad entre los grupos racistas y discriminatorios, así como en contra de las instituciones educativas por no ofrecer las mismas oportunidades a todos los niños para acceder a la

educación por cuestión de raza, color, religión u origen nacional. De igual forma, es el principal fundamento legal para demandar al gobierno estatal y a las instituciones educativas por cuestiones de discriminación, ya que al ser la educación bilingüe un programa educativo, financiado, en parte, por el gobierno federal no debe existir ningún tipo de discriminación en los programas que cuenten con asistencia de éste.¹¹

El Título IV, en su Sección 401, establece que dentro de las escuelas de educación pública no habrá segregación por razones de raza, color, religión u origen nacional. A su vez, por escuelas públicas se entiende; las instituciones de educación elemental y secundaria, así como instituciones de educación superior o técnica que reciban fondos del Estado.

Actualmente, la protección e igualdad, con fundamento en estos dos Títulos, dan derecho a todas las personas que hablan un idioma diferente al inglés, aproximadamente una de cada siete personas, a luchar por el respeto a su herencia cultural y a su idioma. Cabe mencionar que el censo de 1990, contó casi 14 millones de personas –6% de la población – que hablaba y entendía con dificultad el inglés. Diez años después, en el Censo 2000, se informó que tres de cada diez personas, hablan un idioma diferente al inglés.

En 1967, el Congreso Norteamericano, dado el estado deplorable en que se encontraba la minoría mexicanoamericana, decidió investigar el asunto a fondo. Para financiar programas innovadores dirigidos a los alumnos con habilidad limitada en el inglés, múltiples educadores y líderes chicanos presentaron testimonios y propuestas apoyando esta medida como condición indispensable para mejorar la situación educativa de los niños de habla hispana.

Sin embargo, la población con menor apoyo, es la población mexicana. Los mexicanos, por su sola condición de trabajadores, han sido olvidados y

¹¹Civil Rights Act Of 1964, 2 Jul. 64. 88th Congress, H. R. 7152. Document number. PL 88-352. Véase en los anexos.

hasta eliminados de cualquier programa educativo. Por razones políticas, los derechos laborales y educacionales de los inmigrantes mexicanos han sido omitidos en las negociaciones México-Estados Unidos. Los mexicanos, por lo tanto, han tenido que construir su propia existencia para obtener el reconocimiento de sus derechos. Baste citar que en la última visita de la Secretaría de Relaciones Exteriores a Phoenix, nunca se trataron los temas de la inmigración indocumentada, y de las decenas de muertes de conacionales en la frontera México-Estados Unidos.

2.3. Ley de Educación Bilingüe.

Como resultado de décadas de lucha para obtener el derecho a recibir educación en dos idiomas, activistas latinos lograron, trabajando con el Senador Ralph Yarborough del Estado de Texas, que el Congreso adoptara la Ley de Educación Bilingüe del 2 de enero de 1968, firmada por el Presidente Lyndon B. Johnson, conocida también como Título VII, que enmendó la Ley de Educación Elemental y Secundaria de 1965.

Esta Ley de Educación Bilingüe autorizaba recursos para apoyar programas educativos bilingües, capacitar a profesores y asistentes, desarrollar materiales didácticos para la enseñanza de la educación bilingüe y alentar la participación de los padres de familia. Para lograr estas metas, un año más tarde se aprobó un financiamiento especial de 7.5 miles de millones de dólares, y a partir de entonces se comenzaron programas en varios idiomas, aunque la mayor parte de ellos se dedicó a los hispanoparlantes, ya que estos constituían –y constituyen- la inmensa mayoría de las minorías.¹²

¹² Roberto Villarreal and Norma G. Hernández, *Latinos and Political Coalition. Political Empowerment for the 1990s*. New York, Praeger Publishers, 1999, p.49.

La Ley de Educación Bilingüe enuncia que debido al porcentaje de niños y jóvenes que hablan un idioma diferente al inglés o tienen conocimiento limitado del mismo, el gobierno federal ayudará a niños y jóvenes a recibir una oportunidad educativa que les permita acceder a la educación que recibe la mayoría de la población en Estados Unidos de América. Además, reconoce las habilidades multilingües que constituyen un recurso nacional importante que merece protección y desarrollo.

Asimismo, establece que el Congreso declara que "es política del gobierno de los Estados Unidos, asegurar las mismas oportunidades educativas a todos los niños y jóvenes que tengan una habilidad limitada del inglés (LEP) ya que el gobierno federal tiene la obligación de asegurar que los Estados y los distritos escolares tomen acciones apropiadas para proporcionar la misma oportunidad a los alumnos con conocimientos limitados de inglés".¹³

En el último informe bienal de los programas de educación bilingüe en Estados Unidos, se estima que el 73 por ciento de los estudiantes LEP hablan español. Los siguientes grupos porcentualmente hablando son: Vietnamita (3.9 por ciento), Hmong (1.8 por ciento), Cantones (1.7 por ciento), Camboyano (1.6 por ciento) y Coreano (1.6 por ciento).

La misma Ley de Educación Bilingüe en la Parte E- Disposiciones Generales, define al Programa de Educación Bilingüe como un programa educativo para estudiantes con habilidades limitadas de inglés que:

-Imparte educación en ambos idiomas, en inglés y en el idioma nativo del estudiante.

-Capacita y habilita a los estudiantes para alcanzar la habilidad y el dominio necesarios para acceder a recibir materias académicas que necesitan un completo dominio del inglés.

¹³ Title VII- Bilingual Education, language enhancement, and language acquisition programs, Public Law 103-382

-Incluye la participación de estudiantes que sean expertos en inglés y busquen aprender una segunda lengua.

De igual forma, define el significado de conocimientos limitados de inglés, usado para referirnos a individuos que:

-No nacieron en los Estados Unidos o su lengua nativa es una diferente al inglés y proviene de un lugar en donde el inglés no es el idioma dominante.

-Tiene dificultad para hablar, leer, escribir o entender en inglés, y como consecuencia no tiene una igual oportunidad para aprender exitosamente en un salón de clase donde el idioma de instrucción es el inglés o no puede participar completamente en la sociedad.

Estos preceptos han servido a todas las minorías como base legal para demandar iguales oportunidades educativas, ya que reconoce que hay un gran número de niños con habilidad limitada para hablar inglés; que la educación bilingüe no esta limitada a ningún grupo lingüístico o cultural; provee programas de educación bilingüe desde la educación preescolar, pero no le pone límite y enfatiza el uso de la lengua nativa para aprender inglés.

Después de todo, Estados Unidos es un país de minorías; según la Academia Norteamericana de la Lengua Española existen 40 millones de personas que hablan español en Estados Unidos, es decir, una quinta parte de la población.

Por lo tanto, la educación bilingüe, al implementar y expandir una legislación, ha pasado a ser importante a nivel nacional, estatal, y fundamentalmente, local. La currícula y los programas de instrucción ya han sido desarrollados para la educación bilingüe, y día a día se preparan instructores para dichos programas.

Por último, se hará mención de la Ley de Igualdad de Oportunidades Educativas de 1974, que ha servido a muchas minorías para demandar iguales oportunidades.

2.4. Ley de Igualdad de Oportunidades Educativas

La Ley de Igualdad de Oportunidades Educativas, mejor conocida como Enmienda al Título IX de la Educación de 1974, prohíbe la discriminación en instituciones educativas que reciban fondos federales.

La ley en cita prohíbe cancelar programas y actividades que incluyan estudiantes que tengan becas, hospedaje, servicios médicos, atléticos, servicios profesionales y cursos especiales.

Esta ley sirve para garantizar a todos una educación, sin importar su raza, sexo, religión o condición legal. El único requisito para solicitar la protección de esta ley es no tener conocimientos suficientes del idioma inglés para acceder a una instrucción únicamente en este idioma.

Gracias a esta ley, las Cortes Federales han promulgado varios dictámenes, cuyo resultado ha sido la creación y expansión de programas que proveen de igualdad de oportunidades educativas a las minorías lingüísticas en las escuelas públicas del país.

La Sección 204(f) de la ley en comento establece la obligación de los Estados y los Distritos Escolares de tomar medidas apropiadas para proveer de iguales oportunidades educativas a niños y jóvenes con conocimientos limitados de inglés.¹⁴

¹⁴ Fuente: Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de America, 1999.

1.- BENEFICIOS Y ELEMENTOS A FAVOR DE LA EDUCACIÓN BILINGÜE.**1.1. Beneficios sociales.**

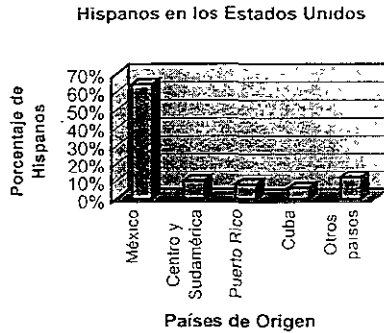
Los mexicanos en los Estados Unidos conforman grupos muy diversos. Al hablar de los *descendientes*, se refiere ciudadanos estadounidenses, que van a la escuela y crecen bajo las influencias del medio en que viven, logran una mayor integración a los patrones de la sociedad americana; son los que más padecen de una crisis de identidad y muchas veces desconocen sus raíces. La mayoría de esta población ya no habla español y han rebasado los niveles de mano de obra barata para ocupar espacios de dirección y en el liderazgo de demandas sociales.

El grupo de *los recién llegados*; se caracteriza porque van con la idea de regresar a México, y el apego a su tierra de origen es quizá superior al resto de los inmigrantes, su grado de asimilación es mucho menor. Son sus hijos los que se integran con más facilidad a la sociedad que los acoge.

Por otro lado, *los que van y vienen*, conocidos como la población migrante, se caracteriza por realizar trabajos agrícolas principalmente.

Todos ellos, tienen en común su origen y raíces culturales. Buscan el reencuentro con sus orígenes mexicanos y casi todos hablan español, aunque incorrecto por no practicarlo.

Se ha estimado que cerca del 64% de la población hispana es de origen mexicano.



Fuente: Hispanic-Latinos, Diverse People in Multicultural Society.
National Association of Hispanic Publications, 1995.

Es esta comunidad mexicana tan diversa, así como se encuentran migrantes mixtecos indocumentados, que no hablan inglés, pero tampoco español, que son trabajadores agrícolas, también se encuentran destacados hombres de negocios, académicos, artistas y profesionistas de clase media, con perfecto inglés y muy poco español; todos ellos son los mexicanos del otro lado.

Según una estimación del Censo de 1990, actualmente existen 325 idiomas hablados distintos al inglés. Actualmente, el Censo 2000, arroja datos sorprendentes: se estima que el 30 por ciento de la población habla español, y un 10 por ciento más, está aprendiendo.

Todos buscan adaptarse, integrarse o, al menos, sobrevivir en aquella sociedad a la que no pertenecen y que es muy diferente a la mexicana por razones de idioma, cultura, tradiciones y desarrollo.

Si una persona no sabe inglés, no morirá. En los Estados que colindan con la frontera mexicana, muchas personas hablan español o son bilingües, por

no tanto, integrarse a esa sociedad no es difícil. Sin embargo, en los Estados del norte de Estados Unidos o donde existe muy poca población hispanoparlante, es de suma importancia saber o aprender inglés.

En Estados como California, Arizona, Nuevo Mexico y Texas, hablar español no es una vergüenza, al contrario, la gente se enorgullece por hablar dos idiomas y en su caso, muchos de los que no saben inglés estudian para comprender y hablar; en el resto de los casos aprenden por la práctica y por costumbre.

El mayor beneficio de hablar dos idiomas es la aceptación de la sociedad, porque hablar inglés significa dejar de ser discriminado: serán atendidos en cualquier lado, sin esperar 10, 20 o 30 minutos "hasta que encuentren a alguien que hable su idioma", podrán ir al cine "a escuchar y entender", y podrán leer las instrucciones de cómo usar tal o cual cosa.

Sin embargo, no se habla un idioma de un día para otro, algunos aprenden en meses, otros tantos en años, y muchos otros nunca lo hacen. Pero la mejor forma, según la Asociación Nacional de Educación Bilingüe (NABE) para aprender inglés sin perder el avance educativo, es un programa de educación bilingüe.

En 1996 Estados Unidos ocupaba el quinto. lugar con mayor número de personas que hablan español, para el año 2025, ocupará el segundo. lugar.¹

Los países en el mundo con mayor número de hablantes en español.

	1996	2025
MEXICO	94,700	136,600
ESPAÑA	40,200	42,500
COLOMBIA	35,500	49,300
ARGENTINA	35,000	46,100
ESTADOS UNIDOS	27,200	56,300

¹ U.S. Bureau of the Census. Current Population Reports, p.23

Por lo que es crucial que uno de los principales retos en materia educativa para el gobierno mexicano sea precisamente la difusión del idioma español, sobre todo, impulsar acciones que lo prestigien.

1.2. Beneficios culturales

El pertenecer a dos nacionalidades, a dos culturas, a dos formas de pensar, de creer y de sentir convierte a una persona; en una persona en alguien más completa, con dos visiones, con dos ideologías y con más metas.

Ser bilingüe, no sólo es hablar dos idiomas, es saber comunicarse con personas que son completamente distintas, entender dos mundos totalmente distintos; con diferentes tradiciones, valores y formas de pensar.

Un mexicano bilingüe, en Estados Unidos, vale por dos personas. Se puede comunicar con dos mundos porque pertenece a ellos, porque ha crecido complementándose día a día. Muchos mexicanos se encuentran en procesos de aculturación o adaptación; el proceso de integración no es igual para todos, para los adultos no es tan fácil como lo es para los niños y los adolescentes.

La integración depende de la condición laboral, de la convivencia comunitaria y de la necesidad de hablar otro idioma. En las comunidades mexicanas se escucha la radio, se ve televisión, y se lee prensa en español.

Lo que llama la atención es que los medios de comunicación en español no sólo han logrado subsistir, sino crecer y fortalecerse en un medio competitivo y siempre restrictivo del uso de una lengua distinta al inglés. Gracias a cadenas televisivas como Telemundo y Univisión, con más de 75 estaciones y alrededor de 600 sistemas de cable afiliados poco más de 290 estaciones de radio, permiten transmitir más de 20 horas a la semana en español, y más de 500 horas de tiempo parcial.

Diez diarios, cerca de 250 periódicos, la mayoría semanales o quincenales, 25 revistas de distribución nacional y alrededor de 100 de distribución estatal local, permiten a la comunidad hispanoparlante acceder a la programación en su propio idioma y que tiene como origen su propio país.²

En el caso de los mexicanos, pueden acceder incluso a la programación de las cadenas Televisa y Televisión Azteca. En el caso de la prensa, no sólo se consulta en el periódico, sino vía internet; así se pueden consultar desde el periódico "Prensa Hispana" de Phoenix, Arizona a través de la página <http://prensahispana.com>, hasta "La Voz", de Seattle, Washington, cuya página es <http://bmi.net/lavoz>.

En todos los medios se informa de los acontecimientos y eventos de todo México, Centroamérica y Sudamérica; se presentan todo tipo de noticias: deportivas, políticas, económicas y culturales. Además, se promueven eventos para toda la comunidad que habla español.

Hablar y entender dos idiomas resulta un gran beneficio, sobre todo, para la juventud hispana que busca un cambio en la sociedad norteamericana, acceder a un mejor futuro y lograr sus metas profesionales.

La comunidad mexicana ya no busca tener un trabajo, ahora busca ser un profesional con un trabajo. Los jóvenes que pertenecen a la segunda o tercera generación de mexicanos viviendo en Estados Unidos ya no se conforman con ganar el salario mínimo, buscan ser profesionales exitosos, hombres y mujeres que buscan romper las barreras de la discriminación.

Los jóvenes mexicanos en ese país han dejado de sentirse "ciudadanos de segunda". Ahora luchan por sus derechos, a pesar de su condición de indocumentados.

² Información de la Fundación Solidaridad México Americana A.C., 1997.

Ingresar a una biblioteca o museo no es un lujo, es un derecho y un placer. El 100% de las bibliotecas en Estados Unidos tienen material en varios idiomas, entre ellos, en español. Existen secciones de libros, videos y discos compactos en español y en todas las bibliotecas existe registro de usuarios en español, incluso se puede pedir que sea atendido en su propio idioma.

Usar estos servicios es un derecho, según las leyes de Igualdad de Oportunidades, ya que todos los ciudadanos tienen el mismo derecho a acceder a todos los servicios públicos, incluyendo los servicios educativos. Como resultado, muchos ciudadanos bilingües hispanos permiten a otros "no ciudadanos" obtener el derecho de acceder a muchos otros servicios. Y, no únicamente acceder a los servicios, sino a otra forma de vida, a otra sociedad distinta y a la vez análoga a la que los mexicanos pertenecen.

1.3. Beneficios económicos.

Para ser parte de un estilo de vida se deben sacrificar muchas cosas, olvidar algunas y aprender otras tantas. El proceso de integración implica convivir con personas que pertenecen a una sociedad totalmente diferente, no únicamente porque se habla otro idioma sino porque pertenecen a un pueblo que fue y ha sido dominado por el vecino del norte.

Existen personas que han rebasado grandes obstáculos para convertirse en mujeres y hombres de negocios al ser el mercado hispano el número dos en Estados Unidos, abrir un negocio para hispanos y atender en español es una gran inversión. En la Cámara de Comercio Hispana de Arizona existen registrados más de 500 negocios propiedad de hispanos; de igual forma, en todo Estados Unidos existen negocios que cuentan con inversiones de hispanos.

Los negocios de prestaciones de servicios son los más solicitados porque el trabajo de los hispanos esta garantizado como el mejor, aunque con un salario mínimo de 7.50 dólares la hora. Sin embargo, se puede conseguir un trabajo de hasta 25.00 dólares la hora por el hecho de ser bilingüe sin tener ninguna profesión. Para los más conservadores, la población hispana seguirá siendo una mano de obra barata para los trabajos que rechazan los anglos.

Incluso en trabajos "más importantes", uno de los principales requisitos es ser bilingüe, tal es el caso del *Federal Bureau Investigation (FBI)*; en donde se requiere que los solicitantes hablen uno de los 17 idiomas con los que trabaja el *FBI*, entre ellos, el español. Cabe señalar que el director del *Federal Buereau Investigation* en Phoenix, Az., es el agente Guadalupe González, un mexicanoamericano.

En muchos negocios, bancos, aeropuertos y dependencias del gobierno las personas que no hablan inglés tiene derecho a recibir atención en español por cuestiones de igualdad de oportunidades y por conveniencia, ya que un gran porcentaje de sus clientes son de habla hispana. Además, se calcula que el consumo de los hispanos es de más de 30 mii millones de dólares anuaies según la Fundación Solidaridad México-Americana.

Los hispanos tienden a formar grandes hogares, por lo tanto, gastan más de 1.4 billones de dólares al año en alimentos para consumir dentro del hogar, más de 1.3 billones de dólares al año en pago de vivienda, 755 millones en transportación, más de 544 millones de dólares al año en ropa y servicios, 441 millones de dólares en muebles y equipo para el hogar, más de 347 millones en diversiones, más de 75 millones de dólares en comidas fuera de casa y más de 61 millones de dólares al año en seguros.³

³ Fuente: DRI/Mc Graw-Hill, 1997. Usados por la estación de radio La Nueva 105.9 F.M. de Phoenix, Az., para un informe del Censo 2000.

1.4. Benéficos políticos.

Como se ha señalado anteriormente, la cantidad de hispanos se ha elevado y se elevará considerablemente, números que empiezan a contar los republicanos o los demócratas para las elecciones. El ejemplo más claro es el Suroeste, con la población hispana primordialmente mexicanoamericana, ya que los trabajadores temporales han sido tratados de convencer por el movimiento *One-Stop Immigration*, con base en Los Angeles, para que se naturalicen con el objetivo de legitimizarlos para la plataforma legal y obtener su voto. ⁴

Sin embargo, emprender el proceso burocrático correspondiente, es una gran lucha y prefieren seguir siendo "sólo mexicanos", y están por consiguiente, ausentes de los procesos electorales.

Todos estos votos, no sólo son votos a favor de tal o cual partido, significan votos para que las papeletas electorales sigan siendo bilingües, significa contar con traductores en los Tribunales de Justicia y en los hospitales, significa tener voz y voto en la legislaturas y dentro del Congreso, ya que el hispano se convierte en indispensable a la hora de establecer prioridades y opciones.

El gobernador de Texas, George W. Bush, lanzó su primera campaña publicitaria en búsqueda de la nominación republicana a la Presidencia de los Estados Unidos con una serie de comerciales en los que incluye dos en español. Esto demuestra la importancia del voto latino. Incluso, uno de los sobrinos de George Bush, un mexicanoamericano, es el elemento básico para su campaña en español, sin dejar de mencionar que él habla bastante bien el español.

⁴ Alberto Moncada, *Norteamérica con acento hispano*, Instituto de Cooperación Iberoamericana, Madrid, España, 1992
p 101

Por otro lado, datos de la Fundación Solidaridad Mexicano-Americana informan que hay más de 5 mil funcionarios electos de origen hispano en todos los niveles de gobierno y el entorno legislativo.

Un factor importante de la influencia política hispana es que la mayor densidad de esta población se condensa en ciertos Estados de la nación: casi dos terceras partes de todos los hispanos en los Estados Unidos residen en tres estados: California (33 de cada 100), Texas (21 por cada 100) y Nueva York (11 por cada 100). Si a éstos se les añaden los hispanos residentes en Florida, Illinois, Nueva Jersey, Nuevo Mexico y Arizona, el total suma 85% de todos los hispanos de la nación; es por ello que sus líderes concretan las campañas a favor de registrarse para votar.

La participación política hispana ha crecido porque muchos cargos carecen de candidatos y la reelección es frecuente. En la década de los ochenta había 3,360 políticos hispanos electos. La proporción era de doce alcaldes de ciudades mayores de 25.000 habitantes, sobre todo en Texas, ciento veinte legisladores estatales, un gobernador, el de Florida y, coronando la estadística, los once miembros hispanos del Congreso.

Tratándose de políticos y administradores no electos, sino nombrados según las leyes respectivas, la Asociación Nacional de Funcionarios Públicos Hispanos (NALEO), presentó un perfil aún mayor, con representantes de 31 Estados. Hay hispanos en todos los rangos de la administración civil, judicial y hasta militar, con generales y hasta tres almirantes de la Naval desde aquel entonces.

Como consecuencia, todos ellos han buscado y buscarán un mejor trato educativo, sanitario y laboral ya que para mejorar las condiciones actuales, el mejor camino es participar en los procesos políticos a todos los niveles.

El esfuerzo actual de los activistas hispanos es el de modificar la geografía electoral. Los distritos han sido diseñados a veces para impedir o romper el voto étnico.

La acción política se continua en acción cívica, es por ellos que hay asociaciones hispanas para casi todo y a todos los niveles: *The National Coalition for Hispanic Health and Human Services* estudia y propone cuestiones de la salud y beneficencia; *The Hispanic Chamber of Commerce*, para cuestiones de negocios; *The Mexican American Legal Defense and Education Fund* (MALDEF), para la defensa de los derechos de los hispanos:ciudadanos, no ciudadanos, residentes e inmigrantes indocumentados; *The League of United Latin American Citizens* (LULAC), que lucha por los derechos civiles, por la igualdad y la educación; *The National Council of La Raza* (NCLR) tiene gran énfasis en el desarrollo económico y educativo de la comunidad hispana; *The United Farm Workers of America* (UFWC) lucha por los derechos de los trabajadores agrícolas.

Estas asociaciones son un ejemplo de que los hispanos ya no son una minoría, ahora son ciudadanos americanos luchando por sus derechos y por sus connacionales, en su mayoría, indocumentados. Porque ser hispano no sólo es hablar un idioma diferente, es pertenecer a una raza de sobrevivientes, con una gran historia, cultura y las más variadas tradiciones.

Los albores del nuevo siglo traerán a los hispanos nuevas metas, nuevos triunfos de expansión, y de actividad política y económica. Tal vez el impacto que esto tendrá en la sociedad norteamericana sea duradero.

Sin embargo, aunque la comida, la música, la moda y el materialismo, integren a muchos hispanos en la economía, en la política y en la vida social del país, se debe de recordar que otros miles o millones continuaran con sus costumbres, tradiciones, y sobre todo con el idioma de los hispanos, el español. Baste recordar que después de más de un siglo, los mexicanos siguen

vivos en la tierra en donde un día todos hablaban español, en los Estados del sur de los Estados Unidos de América, territorio mexicano hace decenas de años.

2.- OBSTÁCULOS Y ELEMENTOS EN CONTRA DE LA EDUCACIÓN BILINGÜE.

2.1. Obstáculos sociales.

La migración al vecino país está motivada por el grado de marginación social, la falta de justicia y equidad en que viven aún millones de mexicanos, impidiéndoles ser parte activa del desarrollo político y social de México. Éstas, son condiciones que no difieren mucho de las que prevalecen en los lugares donde van a parar los mexicanos que cruzan la frontera norte en busca de prosperidad.

En los Estados que se encuentran cruzando la frontera, la marginación social no es notoria. No son totalmente aceptados pero respetan sus diferencias. Sin embargo, desde la década de los ochenta surgieron en los Estados Unidos varias organizaciones xenófobas, camuflageadas tras conspicuos organismos de aparentes objetivos lingüísticos, como el *English Only*, *U.S. English* y *English First*.

En 1992, el Senador Alan Simpson, de Wyoming, esbozó la primera versión del Decreto para la Reforma y el Control de la Inmigración (luego llamada Ley Simpson-Rodino) para frenar la migración de indocumentados a los Estados Unidos, a través de tres fuentes principales:

- a) Sancionando a los empleadores que con previo conocimiento contrataran indocumentados.
- b) Reforzando las labores del Servicio de Inmigración y Naturalización a través de la multiplicación de agentes, operando patrullas fronterizas (la temida "Migra").

c) Decretando una amnistía que permitiría la legalización de su calidad migratoria a todos los indocumentados que pudiesen probar haber residido continuamente en los Estados Unidos desde 1982.⁵

Hasta ahora, se han venido exacerbando las actitudes racistas, xenófobas, anti-inmigrantes y segregacionistas.

En general, las personas indocumentadas en Estados Unidos no tienen acceso a los beneficios de los programas de asistencia social. Específicamente, pueden quedar sin recibir fondos del Programa de Vales para Alimentos, la Ayuda a Familias con Niños Dependientes (AFND), el Programa de seguro médico *Medicaid*, la vivienda pública, la Administración para la Capacitación para el Empleo en General (CEG) o el seguro de desempleo.

No obstante, los niños nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados son, en todo caso, ciudadanos estadounidenses por nacimiento y tienen pleno derecho a recibir los beneficios de los programas de asistencia social.

Las últimas Propuestas de ley, la 187 y 227, son iniciativas que pretenden eliminar derechos de asistencias social y educación bilingüe para los inmigrantes, en especial para los mexicanos; es de llamar la atención que ambas Propuestas han sido lanzadas por unos cuantos, pero aprobadas por muchos, incluso, por los propios inmigrantes.

Estos son sólo algunos ejemplos de los tratos hacia los hispanos y en especial a los mexicanos. En Estados Unidos, la visión predominante acerca de estas minorías es que se trata de de criminales que transportan droga desde México y que entran a Estados Unidos básicamente a vivir de los programas de asistencia pública y a obtener empleos que deberían ser realizados por los

⁵ David M Heer, *Los Mexicanos Indocumentados en Estados Unidos*, Fondo de Cultura Económica, México, 1993, pgs.267-279

proprios estadounidenses que se mantienen desempleados a causa de que los migrantes mexicanos les quitan los empleos.

Para muchos, los mexicanos, no son más que algo negativo, amenazante e indeseable. No en vano han etiquetado a los mexicanos como "*illegal aliens*".

2.2. Obstáculos culturales.

En Estados Unidos, no hay un idioma oficial, mucho se legisla y casi todo se respeta. Con mexicanos de todas las entidades federativas, se celebra el Día de Muertos, el Grito de la Independencia y el más importante, el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe.

Debido a que casi todos los mexicanos siguen celebrando costumbres y tradiciones, no pierden sus raíces, las de la tierra que los vió nacer. Sin embargo, también representan un obstáculo para su integración, ya que muchos mexicanos llevan viviendo años sin poder salir solos o desarrollarse en un idioma diferente al suyo.

Vivir en un país diferente implica también un comportamiento diferente, es por ello que los hispanos se agrupan y se unen para celebrar costumbres y tradiciones "de aquí y de allá", se agrupan en clubes de oriundos de su entidad federativa o bien porque hablan el mismo idioma, sólo así, logran preservar una parte de su cultura. Sin embargo, en este caso, el obstáculo más grande es la conservación del idioma, el español, ya que muchos mexicanos se niegan a participar en el proceso de aculturación en el que están inmersos.

**Población mexicana en Estados Unidos e Inmigración neta
(miles de personas de ambos sexos)**

Año	Población Total	Pobladores originales y sus descendientes	Inmigrantes	Descendientes de inmigrantes
1850	84	84	-	-
1860	133	101	27	5
1870	198	122	54	22
1880	270	148	71	51
1890	355	178	87	90
1900	463	215	103	145
1910	718	260	222	236
1920	1,210	314	480	416
1930	1,729	379	640	710
1940	1,904	457	377	1,070
1950	2,573	586	451	1,536
1960	3,671	798	576	2,299
1970	5,422	1,117	788	3,517
1980	9,071	1,520	2,199	5,352
1990	14,094	1,923	4,447	7,724

Fuente: Rodolfo Corona Vázquez, El Colegio de la Frontera Norte, 1995.

Como todas las minorías, los mexicanos seguirán siendo una raza marcada por el racismo, la segregación y la hispanofobia. Desde siempre, la sociedad norteamericana ha funcionado en tres partes: una blanca, una negra y una café.

Basta mencionar que en las ciudades más importantes de Estados Unidos todo está dividido, del lado de las avenidas viven las minorías y del lado de las calles viven los anglos.

Existe música para blancos, para negros y en español; escuelas con cuotas raciales; deportes para negros y trabajos para mexicanos; transporte público para hispanos y negros; salarios para hombres y salarios para mujeres y sistemas carcelarios especializados en atender únicamente a negros e hispanos.

2.3. Obstáculos económicos.

Los latinos son el grupo étnico con menor cobertura médica, casi 44.3 millones de personas no cuentan con protección médica. Como esta noticia, encontramos cientos: “estudiantes latinos, buscan becas”, “prohibición de educación bilingüe por falta de recursos”, “programas de educación bilingüe buscan maestros capacitados”, etc.⁶

Muchos de los programas de apoyo para consolidar el español y aprender inglés trabajan con voluntarios, no existen materiales ni libros de texto adecuados, ya que la educación bilingüe es considerada como un remedio para los desaventajados a causa de su lengua y su cultura, factores que muchas ocasiones se perciben como obstáculos al progreso de los alumnos del sistema escolar anglosajón.

El presupuesto asignado a los programas de educación bilingüe está contenido en la Ley de la Educación Bilingüe, dicho presupuesto consta de asignaciones federales, estatales y de los propios distritos escolares. El financiamiento general es de: 65 por ciento el Estado, 28 por ciento autoridades locales y 7 por ciento gobierno federal.

Sin embargo, el obstáculo más grande, lo constituye la forma de vida y las condiciones económicas de los estudiantes hispanos y mexicanos, “todos”, padres e hijos llegan a trabajar, y asistir a la escuela queda en segundo término; o bien, debido a que el trabajo resulta lo que esperaban, es decir, han logrado ganar suficientes dólares; asistir a la escuela ya no es importante.

Un alto porcentaje de padres mexicanos no tiene interés en que sus hijos se eduquen, simplemente porque lo consideran innecesario. Al darse cuenta que ellos sobreviven sin educación, no consideran indispensable que sus hijos asistan a la escuela para forjarse un mejor futuro. Es más, cuando se

⁶ Fuente: Noticias Univision Canal 33 por Johana Molina, Octubre 1999.

dan cuenta que sus hijos saben inglés, los impulsan a buscar empleo, lo cual reduce las aspiraciones de los jóvenes mexicanos a un trabajo en un restaurante sin mayores perspectivas

Son muchos los obstáculos que hay que revisar para entender la complejidad del problema de la educación de los conacionales que viven en los Estados Unidos y que se asemeja en general a lo que sucede con los hispanos. Básicamente, cuando la cultura del consumismo y materialismo los invade, ser empleado de la construcción o lava platos no importa, después de todo gracias a ese trabajo pueden vivir mejor, sin importar el grado de educación o si hablan o no inglés.

2.4.Obstáculos políticos.

Tal vez la objeción más importante a un incremento en la participación de los migrantes, por parte del pueblo estadounidense, se basa en la creencia de que tal inmigración amenaza la conservación de la cultura del país. Entre los estadounidenses siempre ha existido la idea de que el inglés debe ser el idioma usado en el discurso oficial y ordinario. Sin embargo, se teme que si llega un número elevado de inmigrantes, el consenso se destruirá y entonces se instituyan ambos idiomas, el español y el inglés, como idiomas oficiales

El temor de que el inglés pudiera convertirse sólo en uno de dos idiomas oficiales del país pueden eliminarse con la promulgación de un enmienda constitucional que estipule que el inglés es el único idioma oficial del gobierno federal. Como consecuencia, el Congreso de los Estados Unidos ha recibido múltiples propuestas que proclaman el inglés como el idioma oficial, tal es el caso de "*Declaration of Official Language Act of 1999*" y "*National Language Act of 1999*".⁷

⁷ 106 th Congress, 1st Session: Declaration of Official Language Act of 1999(HR 50 IH), National Language Act of 1999 (HR 1005 IH)

Las anteriores Propuestas, promueven la terminación de la educación bilingüe y prohíben el uso de lenguas “foráneas” como lo piden organizaciones como *U.S. English*. En 1981 el Senador Samuel Hayakawa, un americano de origen japonés, introduce una enmienda constitucional que declara el inglés como idioma oficial; en 1983 junto con el Dr. John Tanton, fundan *U.S. English*. A finales de los ochenta, contaba con medio millón de afiliados y más de 28 millones de dólares.⁸

En 1984, Indiana, Kentucky y Tennessee adoptaban el inglés como lengua oficial de sus Estados. En 1986, California adopta el inglés como lengua oficial en su Constitución. Todo esto fue del conocimiento, e incluso aprobación de William Bennet, Secretario de Educación del Presidente Reagan en 1985, que se manifestaba contra la educación bilingüe y pidió que fuera eliminada.⁹

En 1986, se crearon dos organizaciones íntimamente relacionadas con el *Official English*: el *English First*, fundado por Larry Pratt del *Gun Owners of America*, multitud de fanáticos del rifle y la pistola, y la *American Ethnic Coalition*, fundada por el tejano Lou Zaeske.¹⁰

La organización más destacada en esta materia, y más antigua, *English Only*, fundada por Emmy Shafer, en 1978 en Florida, ha logrado que treinta y cuatro Estados adquieran el requisito de “*english only*” en la educación, es decir, sólo brindan educación en un solo idioma, inglés.¹¹

Actualmente, Alabama, Arkansas, California, Colorado, Florida, Georgia, Hawaii, Indiana, Kentucky, Mississippi, Montana, Nebraska, New Hampshire, North Carolina, North Dakota, South Carolina, South Dakota, Tennessee y

⁸ Gerardo Piña, *Hispanofobia*, <http://coloquio.com/coloquio1994pnira.txt> p.2

⁹ Véase, James Crawford, *Bilingual Education: History, Politics, Theory and Practice*, Third edition, Los Angeles: Bilingual Education Service, 1995

¹⁰ Cfr. *Encyclopedia of Bilingualism and Bilingual Education*, Section Two, University of Wales, Bangor, U.S., 1998. pgs. 290-291

¹¹ David W. Steward, *Immigration and Education: The crisis and opportunities*, Lexington Books, New York, 1993, pgs.172-175

Virginia han hecho del inglés el idioma oficial de su Estado, según el Departamento de Educación de Estados Unidos.

El distinguido sociolingüista Calvin Veltman ha demostrado en varios estudios que los hispanos aprenden inglés y que el 98% de los padres hispanos estima imprescindible que sus hijos aprendan y dominen el inglés. Sin embargo, también afirma que los hispanos se niegan a abandonar su lengua y su cultura. Inglés sí, pero español más inglés, es mejor; esa es la campaña de *English Plus*. La Liga Hispano Americana contra la Discriminación, acuñó el concepto de "*English Plus*", ya que la primera lengua que se habló en Estados Unidos no fue el inglés, sino la lengua de Miguel de Cervantes. Su campaña establece que no sólo hay que hablar inglés, es mejor hablar español y aprender inglés como segunda lengua; hablar inglés sin dejar de hablar su propio idioma, es decir, ser personas bilingües.

Las propuestas para declarar al inglés como idioma oficial, y como consecuencia, eliminar la educación en dos idiomas, han sido y serán temas predilectos para abanderar reñidas elecciones, temas de discusión y grandes batallas políticas, tal es el caso del millonario Ron Unz, en California.

1.- REGULACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO PARA LOS INMIGRANTES.

El Secretario de Educación de los Estados Unidos, Richard W. Riley informó en 1998 que casi el 20 por ciento de todos los niños que se encuentran en las escuelas de Estados Unidos son inmigrantes o hijos nacidos en ese país de padres inmigrantes.

Ruben Rumbaut, reconocido sociólogo de la Universidad de Michigan, afirmó que 13.7 millones de niños menores de 18 años de edad, o son inmigrantes o hijos de padres inmigrantes nacidos en Estados Unidos, y provienen de más de 150 países, en su mayoría de México, Filipinas, Cuba y Vietnam.

Sin embargo, no existe ninguna ley que brinde un programa de educación para niños migrantes de cualquier nacionalidad o lengua. Pero cada Estado ha decidido establecer sus Programas de Educación Migrante, en especial para los mexicanos.

En Pensilvania, donde al igual que California la agricultura es la mayor industria de esos Estados, los campesinos migrantes tienen gran importancia.

Los campesinos migrantes son los que se mueven de un lugar a otro en búsqueda de trabajo de estación, es decir, en búsqueda de las cosechas de temporada en diferentes zonas. Para cosechar frutas se dirigen a los condados de York y Franklin; para cosechar uvas se van a los viñedos de Erie; para hongos, al condado de Berks y al condado de Chester. En el lado septentrional, en cambio, encuentran trabajo para el procesamiento de carne de res y pollo, variedad de frutas y la industria lechera.

Sin la colaboración y presencia de las manos que cosechan y procesan estos productos, los estadounidenses se encontrarían pagando precios mucho más altos por frutas y productos lácteos y del ganado.¹

Según el reporte anual de 1995 publicado por el Programa de Educación Migrante de Pennsylvania, el sueldo promedio de un 75 a 90 por ciento de las familias campesinas llega a 10,000 dólares anuales combinando todas sus entradas. Cuando comparamos esta realidad numérica con los 25 billones que es el volumen al que llegan las ventas en la industria de la agricultura de este Estado, se infiere claramente que la mano que siembra y cosecha la tierra no es precisamente la que está beneficiándose de su trabajo.

Con este panorama se puede afirmar que, a pesar de que el campesino migrante es una mano de obra bien codiciada, todo lo que tiene que pasar éste y su familia son cosas por demás severas y difíciles, en lo que se refiere a su nivel de vida y la educación de sus niños. Para remediar este último aspecto de la educación existe el Programa de Educación Migrante de Pennsylvania, conocido también como MEP, por sus siglas en inglés (*Migrant Education Program*); como Pennsylvania, cada Estado involucrado con alumnos migrantes tiene dentro del Departamento Estatal de Educación una sección que se encarga de atender y proteger las necesidades de los alumnos migrantes.

Este programa cuenta con 4 millones 400 mil dólares anuales del Gobierno Federal, más otros fondos de la Beneficencia, del Control de Enfermedades y del Programa "Leer es Fundamental"; que incrementan la suma anterior a 4 millones 900 mil dólares. El Estado de Pennsylvania aporta, por su parte, 222 mil dólares anuales.

Cabe mencionar que la movilidad de los estudiantesmigrantes entre los Estados tiene su escenario principal en California, de donde emigran con destino a Texas, Arizona, Washington, Oregón, Florida, Idaho y Nebraska.

¹ Charito Calvachi Wakefield, *Programa de Educación Migrante*.

Las necesidades de salud y educación de los hijos de trabajadores campesinos migrantes son múltiples y se originan, en parte, en el estilo de vida que llevan sus padres (ir de un lugar a otro donde sus hijos tienen que seguirlos). Más, sus problemas también se deben a la pobreza en que viven, a la falta de conocimientos del idioma inglés y a la alienación con el resto del contexto social.

Basado en esta realidad, el Programa de Educación Migrante trata de ofrecer a estos niños programas de alta calidad en cursos de verano, enseñanza complementaria, ayuda para hacer deberes después de las horas de clase, educación vocacional para elegir carreras profesionales, enseñanza previa al ingreso a la escuela, programas para secundaria y defensa de los derechos a la educación.

Los trabajadores campesinos que tienen hijos y aquellos campesinos jóvenes que vienen solos, sin familia, y que están en la edad de educarse deben saber que:

1) La Enmienda XIV a la Constitución de los Estados Unidos en lo relativo a igual protección, contiene el derecho de acceso de niños inmigrantes a las escuelas públicas, y debido a esta enmienda constitucional, las escuelas públicas y los Estados tienen prohibido negar a los estudiantes migrantes el uso de su derecho a la educación pública, basándose en su origen o su situación de indocumentado;

2) La Corte Suprema ha elevado el derecho de acceso a la educación pública a la categoría de derecho semi-fundamental para los inmigrantes indocumentados;

3) El fallo de la Corte Suprema sobre el caso Plyer vs. Doe, expresamente dice que: los organismos educativos no constituyen una agencia para obligar al

cumplimiento de las leyes de inmigración. Por eso, los campesinos trabajadores no deberían tener recelo de enviar sus hijos o de ir ellos mismos a la escuela, ya que las escuelas y profesores tienen prohibido denunciar a los inmigrantes o pedirles documentación;

4) Otras leyes federales se han pronunciado expresamente en el sentido de obligar a las escuelas municipales a crear un programa educativo, dirigido a remediar los problemas de los estudiantes minoritarios con estudios bilingües y biculturales, y no establecer programas educativos que mantengan a los jóvenes y niños hispanos separados de los otros alumnos mientras se capacitan en el idioma inglés.

Para que los niños de los campesinos emigrantes y los demás jóvenes migrantes califiquen para utilizar los servicios del Programa de Educación Migrante y se beneficien de él, tienen que estar comprendidos en estas circunstancias:

- A) El niño(a) ó joven necesita haberse movido de un lugar a otro sólo, ó con su padre, esposo(a) o tutor dentro de los últimos 36 meses;
- B) El cambio debe haber sido desde una escuela distrital a otra;
- C) La razón de haberse mudado debe haber sido con el propósito de conseguir trabajo que sea temporal o de estaciones, y éste trabajo tiene que ser relativo a la agricultura o la pesca;
- D) El trabajo en la agricultura o en la pesca que el emigrante busque o consiga tiene que ser el que da el sustento principal a su familia o de su propia persona en México.

El Programa Migrante de muchos Estados de la Unión Americana también cuentan con la participación del gobierno de México, a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores, gracias al Programa para las Comunidades Mexicanas en el Exterior que se encarga de coordinar la participación de México en el Programa Binacional de Educación Migrante.

El Programa Binacional está conformado por representantes de 14 Estados de la Unión Americana: Arizona, California, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Michigan, Montana, Nuevo Mexico, Oregon, Pensilvania, Texas, Washington y Wisconsin, y 16 Estados de la República Mexicana: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas.²

Dicho Programa ha creado, con la colaboración de la Secretaría de Educación Pública, un documento único de transferencia del estudiante migrante binacional que permite a los hijos de connacionales que regresan a México, la incorporación en forma prácticamente automática al sistema educativo nacional para continuar los estudios que hubiera iniciado en los Estados Unidos.³

² Datos obtenidos del Programa para las Comunidades Mexicanas en el Exterior, Secretaría de Relaciones Exteriores, 1999.

³ Lic. Sofía Orozco, Subdirectora de Educación del Programa para las Comunidades Mexicanas en Exterior, consultada para obtener esta información

2.- DICTÁMENES FAVORABLES PARA LA EDUCACIÓN BILINGÜE.

Desde 1923 se iniciaron las luchas por la educación bilingüe por parte de los inmigrantes que llegaron a los Estados Unidos de América. El primer caso registrado es el caso Meyer vs. Nebraska de 1923. La Suprema Corte resolvió que la comunidad alemana tenía derecho a que los miembros de la escuela de la Parroquia Luterana de su comunidad, recibieran educación en alemán, usaran textos bíblicos en su idioma, y recibieran clases de historia de su país, Alemania y, por supuesto, recibir instrucción religiosa en su idioma.

Este fue, sin duda, el primer fundamento jurídico para solicitar que se otorgara educación en un idioma diferente al inglés.

2.1. Casos en la Suprema Corte.

El precedente legal de mayor importancia en la historia de la educación bilingüe en los Estados Unidos se encuentra en el caso de Lau vs. Nichols. La impugnación se inicia el 25 de marzo de 1970, en San Francisco, California, cuando 13 alumnos de ascendencia china radicaron una demanda en la Corte contra el Presidente del Distrito Escolar, Alan Nichols, alegando que tanto sus derechos civiles como constitucionales habían sido violados por el Distrito al no proveérseles programas especiales dirigidos a su necesidad lingüística y de antemano los promulgaban como ciudadanos de segunda.

El hecho de que casi 1800 estudiantes no hablaban inglés en el Distrito, no fue suficiente para que éste reconociera las necesidades educativas de alumnos; al contrario, los demandados alegaban que con proveer los mismos servicios bajo las mismas condiciones (maestros, libros, aulas, etc.), cumplían con su obligación ante la ley.

La Corte falló en favor del Distrito Escolar y un resultado parecido se obtuvo en el proceso de apelación. Los demandantes apelaron a la Corte Suprema, y en enero de 1974 se emitió la decisión que continúa teniendo impacto en el sistema público escolar norteamericano. En una decisión unánime, la Corte Suprema dictaminó que no existía igualdad de tratamiento por el mero hecho de proveer los mismos currículos, textos, maestros y aulas, ya que los alumnos que no entienden el inglés de hecho están excluidos de una verdadera educación.⁴

La Corte no quiso basar su fallo en una violación de tipo menor basada en una interpretación legal que la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud, Educación y Bienestar Público (HEW) hizo del artículo VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964. En un memorando difundido en mayo de 1970 sobre el tema "Identificación de Discriminación y Rechazo de Servicios basándose en criterios de origen étnico", se citaban ciertos requisitos que todo Distrito Escolar que recibiera una subvención o contrato federal tenía que cumplir, para proveer igualdad de oportunidades educativas a estudiantes minoritarios que no hablan inglés lo suficientemente bien como para participar plenamente en la clase.⁵

Entre los requisitos destaca el siguiente: "cuando la falta de habilidad de hablar y entender el inglés excluye a estudiantes minoritarios de participar en forma efectiva en el programa de estudios que ofrece un Distrito, el Distrito tiene que tomar medidas afirmativas para corregir la deficiencia lingüística y abrir su programa de instrucción a estos alumnos".

La decisión no especificó que se tenía que proveer instrucción bilingüe, sino que dejó que la determinación sobre qué método de instrucción debería utilizarse la tomaran los Distritos Escolares. Sin embargo, la interpretación pública general fue que la enseñanza bilingüe era el método lógico para ser

⁴ James Crawford, *Hold your Tongue: Bilingualism and Politics of English Only*, Addison-Wesley Publishing, Massachusetts, 1992. p.190.

⁵ Lau vs. Nichols, 414 U.S., 563(1974).

empleado -y en muchos casos- requerido por leyes estatales y por los tribunales federales en varios litigios presentados ante ellos por los grupos hispanos de distintas regiones del país.

Después de que el Tribunal Supremo atendió a la comunidad china que se quejaba del escaso rendimiento de los niños de su comunidad en el sistema público escolar californiano. Algunos teóricos, y algunos líderes hispanos, entendieron que eso era la autorización para el bilingüismo en sentido amplio y de ahí, a reivindicar el derecho a la instrucción en español, a la utilización de ayuda federal para la afirmación cultural propia, sólo había un paso. Y así, lo que empezó siendo un remedio para el fracaso escolar, una especie de educación compensatoria, se convirtió en una reivindicación étnica.

El asunto pasó del plano pedagógico al político y, desde entonces, no han cesado las discusiones. Apoyados por el dictamen de la Corte Suprema, los grupos hispanos reanudaron la lucha social y política por institucionalizar la instrucción bilingüe en el sistema público educativo de los Estados Unidos.

En 1982, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó en el caso Plyler vs. Doe (457 U.S. 202, 1982) que los niños y jóvenes indocumentados, cualquiera que sea su nacionalidad, tienen el mismo derecho de asistir a las escuelas públicas primarias y secundarias que tienen sus contrapartes de nacionalidad estadounidense.

Al igual que los demás niños, los estudiantes indocumentados están obligados a asistir a la escuela. A raíz de la decisión Plyler, las escuelas públicas no pueden:

a) Negarle matrícula a un estudiante basándose en su situación legal o migratoria, ya sea a principio del curso o durante cualquier otro momento del año escolar;

- b) Tratar a un estudiante en forma desigual para verificar su situación de residencia;
- c) Efectuar prácticas cuyo resultado sea obstruir el derecho de acceso a los servicios escolares;
- d) Requerir que un estudiante o sus padres revelen o documenten su situación migratoria o hacer interrogatorios a estudiantes o a sus padres que pudieran revelar su situación de indocumentados;
- e) Exigir que un estudiante obtenga un número de seguro social como requisito de admisión a la escuela;
- f) La escuela debe asignar un número de identificación a los estudiantes que no tienen tarjeta de seguro social y,
- g) Los adultos sin número de seguro social quienes están solicitando que un estudiante sea admitido en un programa de almuerzos y/o desayuno gratis, sólo tiene que indicar, en el formulario, que no tiene número de seguro social.

Esta decisión fue emitida bajo la Enmienda XIV a la Constitución de los Estados Unidos de América.

Además, el Acta Familiar de Derechos y Privacidad Escolar (*Family Education Rights and Privacy Act –FEPPRA-*) les prohíbe a las escuelas proveerle a cualquier agencia externa –incluyendo el Servicio de Inmigración y Naturalización- cualquier información del archivo de un niño que pudiera divulgar la situación de indocumentado de éste sin haber primero obtenido permiso de los padres del estudiante.

La única excepción es si una agencia, de cualquier índole, obtiene una orden judicial. En este caso, los oficiales escolares deben estar consientes de

que el mero hecho de pedirle tal permiso a los padres podría impedir los derechos de un estudiante otorgados por la resolución del caso Pyle.

Finalmente, el personal escolar –especialmente los directores de las escuelas y los secretarios generales- deben saber que no están bajo ninguna obligación legal de poner en vigor las leyes de inmigración de los Estados Unidos.

A consecuencia de esto, una multitud de distritos escolares, particularmente en Texas y California, se vieron obligados a recibir los estudiantes indocumentados y proveerles servicios, incluyendo instrucción bilingüe y ayuda especial para aprender inglés, el idioma común de la enseñanza.

2.2. Casos en las Cortes Federales.

El caso *Lau vs. Nichols*, resuelto por la Suprema Corte en 1974, dio inicio a grandes litigios a favor de los derechos de los estudiantes pertenecientes a las minorías y a su derecho a recibir una educación bilingüe, básicamente en español.

En 1974, en el caso *Serna vs. Portales*, en el Décimo Circuito de la Corte de Apelaciones, establece que los estudiantes que tengan apellido de origen hispano deben ser asignados en los mismos niveles que sus contrapartes norteamericanas. Ordenaron a la escuela Municipal de Portales implementar un currículum bilingüe/bicultural, revisar los procedimientos de asignación según los logros estudiantiles y pagar personal bilingüe según las necesidades de la escuela.

La Corte Federal para el Distrito de Eastern de Nueva York, estableció, en 1978, el rechazo de su propuesta de programa bilingüe del Distrito Escolar

Brentwood basado en violaciones hacia "los lineamientos del caso Lau" por la innecesaria segregación de los estudiantes que hablaban español frente a los que hablaban inglés al no tener iguales clases de música y de arte. La Corte también objetó que el fracaso del programa bilingüe se debiera a la salida de los estudiantes cuyo inglés era muy deficiente, ya que el fracaso fue porque la instrucción era principalmente en inglés. (Caso Cintron vs. Brentwood, 1978)

Los "lineamientos Lau", consisten en ⁵

- 1 - Investigar cuáles de sus estudiantes hablan un idioma diferente al inglés;
- 2 - Investigar la lengua y habilidades de esos estudiantes;
- 3.- Investigar los logros académicos de cada estudiante;
- 4.- Armonizar un programa educacional con las características de los estudiantes,
- 5.- Implementar un programa educativo que favoreciera el aprovechamiento del idioma inglés y que mantuviese el nivel académico de cada alumno o lo incrementase;
- 6.- Proporcionar instrucción personal certificada de lingüística, que culturalmente sea familiar a los antecedentes de los estudiantes beneficiados.
- 7.- Implementar un plan educativo, con o sin ayuda federal.

En el caso Ríos vs. Reed, en 1978, se establece que los programas de educación bilingüe son programas de transición para cursar una instrucción en inglés y al no brindar educación en español, no brindan una igual oportunidad de educación.

Sin embargo, la decisión más importante después del caso Lau, es el caso Castañeda vs. Pickard, en 1981. El 5º Circuito de la Corte de Apelaciones formuló tres criterios básicos para la educación de estudiantes que pertenecen a una minoría, siguiendo la Ley de Igualdad de Oportunidades Educativas de 1974: la escuela debe perseguir un programa educativo basado

⁵ Lau vs. Nichols, 414 U.S., 563(1974). Véase en los anexos.

en una teoría que reconozca estrategias mínimas; la escuela debe implementar el programa con recursos y el personal necesario, y en la escuela no debe persistir un programa que no tenga resultados.

Los anteriores casos, sólo son un ejemplo de los cientos que la Suprema Corte y las Cortes Federales han librado, en contra y a favor de la educación bilingüe y de los estudiantes hispanos.

Así se demuestra que en cuestiones legales, los hispanos han tenido la razón, tienen derecho a recibir educación en su propio idioma por cuestiones de no-discriminación y de igualdad de oportunidades educativas. El no-aceptar un estudiante que pertenece a una minoría, que no habla inglés o que es indocumentado, implican cuestiones de racismo, discriminación, trato diferencial, xenofobia y negación de igualdad de oportunidades.

Sin embargo, han existido leyes locales que se oponen a leyes federales o principios generales emitidos por la Suprema Corte o por las Cortes Federales. Basta citar que en San Francisco hubo oposición al uso de materiales bilingües en las elecciones, principalmente en los idiomas chino y español, dada la población minoritaria de esa ciudad. Se aprobó, en 1983, una prohibición en contra de las elecciones locales bilingües. Aunque esta acción no tuvo ningún impacto contra la ley federal que ordenaba lo contrario, dada la supremacía de las leyes federales cuando surge un conflicto con leyes estatales o locales.⁷

Basta citar la más reciente contradicción: la supresión de la educación bilingüe en California por la Propuesta 227, contra la Ley de Educación Bilingüe, una ley federal, controversia que ha suscitado decenas de demandas contra dicha Propuesta, irónicamente aprobada por cientos de hispanos.

⁷ Ricardo Fernández, *La condición educativa de los hispanos en Estados Unidos*, en *Hispanos en los Estados Unidos*, compilado por Rodolfo J. Cortina y Alberto Moncada, Ediciones de Cultura Hispánica, Madrid, 1988, p. 248.

Actualmente, la Propuesta 227 ha sido introducida en el Estado de Arizona con el nombre de Propuesta 203, ahora es ley gracias a la votación de cientos de activistas contra la educación bilingüe, porque los que necesitan la educación bilingüe, desgraciadamente, no pueden votar.

Sin embargo, esperemos que al igual que California, por lo menos, la ley se modifique. Las modificaciones que se hicieron a la Ley 227, en vigor en California desde hace año y medio, permitirán que los inmigrantes que estudian en escuelas públicas lo puedan hacer en su lengua materna. El Departamento de Educación de California dijo a Notimex que a partir del curso que inicio en septiembre del 2000, el segundo desde que está la ley 227, los padres que deseen que sus hijos estudien en su idioma materno, lo deberán notificar a las autoridades.

La nueva version de la ley permitirá que los alumnos estudien su lengua materna, luego de un curso intensivo de inglés que durará 30 días. Para el curso que inició en septiembre del 2000, un millón cuatrocientos mil menores recibieron el curso de inglés intensivo.

Ron Unz, autor de la 227, dijo que uno de los distritos o zonas escolares que mejor aprovecharon los recursos fue el de Oceanside, en el norte de San Diego, donde un alto porcentaje de los alumnos son inmigrantes indígenas mixtecos, del sureño Estado mexicano de Oaxaca.

3.- LA OFICINA DE LOS DERECHOS CIVILES DEL DEPARTAMENTO FEDERAL DE ENSEÑANZA.

3.1. Infracciones contra estudiantes con conocimiento limitado de inglés.

La cancelación de los menús bilingües de Mc Donald's, la eliminación de guías telefónicas en dos idiomas así como las guías bilingües del servicio de transporte público, implican un daño a la población que no habla inglés. Así lo reconoce la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas de 1992.

Para todos estos inconvenientes existen oficinas de gobierno ante las cuales se puede entablar una demanda por discriminación y/o falta de atención en su propio idioma. La Comisión de los Derechos Civiles, establecida por el Congreso en 1957, estableció la Oficina de los Derechos Civiles del Departamento Federal de la Enseñanza para infracciones en materia educativa.

Dicha oficina no ha hecho lo suficiente para hacer cumplir los estatutos federales que dan salvaguardas iguales en la enseñanza a los estudiantes que tienen una capacidad limitada en el inglés, según acusa la Comisión de los Derechos Civiles en un informe de fecha 21 de enero de 1998.

El informe examina si la Oficina de los Derechos Civiles está haciendo cumplir el Título VI de la Ley de los Derechos Civiles de 1964 y la decisión de 1974 del Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos en el caso "Lau". Como mencionamos anteriormente el Título VI ordena que no haya discriminación por motivo de raza, color u origen nacional, en tanto que la decisión de 1974 del Tribunal Supremo afirma los derechos de los estudiantes

con capacidad limitada en el inglés para participar plenamente en el sistema de enseñanza pública de los Estados Unidos.

Después de revisar el volumen de 234 páginas, el director ejecutivo de la Asociación Nacional para la Enseñanza Bilingüe (NABE), Jim Lyons, dijo entonces sentirse complacido de que la Comisión de los Derechos Civiles esté "encendiendo una vela para revelar las infracciones muy extensas" cometidas en todo el país en contra de los estudiantes con conocimiento limitado del inglés. Según señala el informe, había 3,200,000 estudiantes identificados como LEP en 1994, un millón más que en 1990, y la cantidad sigue en aumento. Por esa razón, dijo Lyons, las gestiones enérgicas para el cumplimiento de la ley son más críticas ahora que nunca antes. Casi las tres cuartas partes de los estudiantes LEP son hispanoparlantes, y el 42 por ciento de ellos asisten a las escuelas de California.

La Comisión identifica a cinco terrenos en que la Oficina de los Derechos Civiles debe actuar más agresivamente para obligar a los Distritos Escolares a cumplir las disposiciones federales sobre los derechos civiles. La Comisión señaló que la Oficina debe acelerar sus gestiones para hacer que los Distritos Escolares:

- 1) Estructuren por lo general sus programas de enseñanza a fin de que sirvan mejor a sus cuerpos estudiantiles diversos;
- 2) Se aseguren de la participación de los padres y las madres de los estudiantes LEP en el trámite de la enseñanza;
- 3) Empleen procedimientos de exámenes neutrales al situar a los estudiantes en las aulas de clases;
- 4) Efectúen un mejor trabajo para verificar la capacidad y la competencia de los maestros, y

5) Proporcionen a los estudiantes LEP el acceso a las oportunidades de enseñanza -tales como los programas para alumnos super-dotados y talentosos- en toda su extensión.

Martha Jiménez, asesora legal regional del Fondo Méxicoamericano para la Defensa Legal y la Enseñanza, señala que la Oficina de los Derechos Civiles ha estado siempre carente de fondos. Aunque el informe critica a dicha oficina, concurre en que la carencia de fondos es parte del problema.

Además, el informe de la Comisión se queja de que la Oficina de los Derechos Civiles no ha trabajado en contacto lo suficientemente estrecho con la Oficina de Enseñanza Bilingüe y Asuntos Idiomáticos Minoritarios del Departamento Federal de Enseñanza (OBEMLA) sobre los asuntos relacionados con los estudiantes LEP. La Comisión describe a OBEMLA como una asociada ideal para ayudar al cumplimiento de los estatutos federales de los derechos civiles.

El Departamento de Educación crea en 1980, reestructurando la Oficina de Educación Bilingüe, a la nueva Oficina de Educación Bilingüe y Asuntos Idiomáticos Minoritarios que tiene como objetivos: *administrar programas de educación bilingüe en escuelas elementales y secundarias que brinden ayuda a estudiantes con conocimientos limitados de inglés, supervisar la capacitación de maestros bilingües/biculturales, realizar investigaciones y evaluaciones de los programas de educación bilingüe e implementar el inglés como segunda lengua.*

Es por ello, que se pide la colaboración de OBEMLA para apoyar a la Oficina de Derechos Civiles en materia educativa. Por otro lado, al acusar a la Oficina de los Derechos Civiles por dejar de desarrollar un curso de acción adecuado para poner en práctica de modo eficaz el Título VI, el informe señala que no se han publicado directrices desde 1970, a fin de ayudar a los Distritos Escolares a obedecer las leyes federales.

Irónicamente, cuando la Oficina de Derechos Civiles trató de hacer nuevas directrices en 1980, desató una tormenta en el Congreso, seguida por una resaca nacional contra la enseñanza bilingüe. El Representante John Ashbrook, por el Estado de Ohio, miembro del Comité de Enseñanza y Trabajo de la Cámara de Representantes, presentó una enmienda al proyecto de ley para asignación de fondos al Departamento de la Enseñanza, a fin de prohibir el uso de fondos federales destinados a cumplir los reglamentos relacionados con la ayuda a los estudiantes LFP en su propio idioma.

Ahora, la Oficina de los Derechos Civiles está organizando debidamente un grupo de trabajo y estudiando las recomendaciones de la Comisión, la mayoría de las cuales ya ha puesto a prueba o está trabajando en ellas ahora, ya que los reportes de la Comisión establecen un cuadro muy distinto a sus contrapartes estadounidenses:⁸

-Encontró que los estudiantes hispanos están separados de sus condiscípulos anglosajones. Ellos están aislados por el distrito de la escuela y por las escuelas dentro de distritos individuales. Tampoco están bien representados con maestros o consejeros o en posición de tomar decisiones, como directores de escuela o miembros de la junta de instrucción.

-Que el idioma y la cultura de los niños hispanos son ignorados y aún más, son omitidos en las escuelas.

-Las escuelas a las que asisten hispanos están mal financiadas, en comparación con las escuelas de los niños anglosajones.

-Muchos maestros raramente elogian y estimulan a los estudiantes hispanos, en particular a los mexicoamericanos, no hacen uso de sus contribuciones en clase, y ni siquiera les hacen preguntas.

⁸ Informe de la Comisión de Derechos Civiles de 1995, Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América.

-Y la más alarmante noticia es que debido a estas causas, de cada 10 estudiantes que entran al primer grado, solamente 6 se gradúan en la escuela secundaria.

Estas condiciones dramatizan las dimensiones del problema, y hasta cierto punto dan un indicio de los factores que contribuyen a la existencia de este conflicto.

Actualmente, el problema más grande se ha suscitado en California con la supresión total de la educación bilingüe ya que es el Estado con más población hispana, y por lo tanto, mexicana.

CAPITULO V. LA EDUCACIÓN: UN DERECHO FUNDAMENTAL

1.- PROPUESTA 187.

1.1 Supresión de derechos elementales.

Lejos del estereotipo del mexicano perezoso, dormido bajo su sombrero, los trabajadores inmigrantes mexicanos y sus descendientes han trabajado mucho en pro del desarrollo económico de los Estados Unidos. Como inmigrantes, con o sin papeles, se han caracterizado por su dedicación al trabajo pesado.

Sin embargo, para los estadounidenses, los mexicanos, al igual que otros latinos y los asiáticos, constituyen una amenaza cultural para ese país. Sugieren que los inmigrantes de ascendentes no europeos se niegan a adaptarse a la cultura tradicional de habla inglesa de los estadounidenses y se aferran tenazmente a sus propias tradiciones no anglosajonas. Se niegan a aprender inglés, se niegan a asimilar la cultura, se apiñan en clanes. Representan no solo una amenaza cultural, sino una amenaza política en potencia porque sientan las bases del nacionalismo étnico y la secesión.¹

Lo que se debe reconocer es que los mexicanos han conservado sus tradiciones culturales, pero al mismo tiempo las han modificado. Ahora, luchan incansablemente para defender su derecho a ser diferentes, por su derecho a ser educados y atendidos en su propio idioma.

La lucha más grande ha sido la batalla contra la propuesta 187 o SOS, *Save our State* (Salvemos Nuestro Estado), cuyo objetivo fundamental es negar los servicios públicos de salud, educación y asistencia social a los inmigrantes documentados en California y, a largo plazo, restringir la

¹ Jorge T. García *Historia Mexicana .Mitos y Realidades*, En Mitos en las relaciones México-Estados Unidos de Ma Esther Schumacher Secretaría de Relaciones Exteriores-Fondo de Cultura Económica, Mexico, 1994, pgs 320-321

inmigración documentada en dos terceras partes así como reducir los beneficios otorgados actualmente a los inmigrantes documentados.

La propuesta fue creada por Ron Prince con el apoyo de Harold Ezeel y Alan Nelson, funcionarios del Servicio de Inmigración y Naturalización en la administración del Presidente Reagan, y vinculados a la Federación para la Reforma de la Inmigración Americana (*Federation for American Immigration Reform, FAIR*), y de Robert Kiley, y cuya esposa Bárbara es alcaldesa de Yorba Linda, quien logró reunir seiscientas mil firmas en sólo cien días para llevar su propuesta al Consejo Estatal Legislativo que debería someterla a plebiscito público de los electores californianos el ocho de noviembre de 1994. Además, la Propuesta obtuvo el incuestionable apoyo del gobernador, Pete Wilson.

Dicha Propuesta, en materia educativa, pretende obligar a las agencias policíacas locales a cooperar con el Servicio de inmigración y naturalización, en la detención de inmigrantes ilegales y responsabilizar a maestros y empleados de las escuelas en la identificación de quienes no fuesen residentes legales; además, de suspender cualquier tipo de educación a los hijos de inmigrantes.²

Sin embargo, como hemos visto anteriormente, el derecho de todos los residentes en Estados Unidos, ciudadanos o no, a la educación, ha quedado consagrado legalmente en la decisión de la Suprema Corte en el caso Plyler vs. Doe de Texas, y es un principio de la justicia norteamericana que quiere dar iguales oportunidades a todos sus habitantes.

Este derecho es aún mayor para los hijos de los inmigrantes indocumentados nacidos en los Estados Unidos y del Estado de California según la Enmienda XIV a la Constitución de ese país.

² Véase el texto completo de la Propuesta en materia educativa, pág. 93.

Con la aprobación de esta Propuesta, cerca de cuatrocientos mil niños cuyo unico delito es su tez morena, nacidos o residentes en Estados Unidos, pero cuyos padres ingresaron sin documentos, fueron excluidos de los servicios educativos y de la atención a la salud, los desayunos escolares, el servicio de transporte para niños que viven lejos de su plantel y son trasladados en autobuses gratuitos para mantener el balance étnico en las escuelas, entre otros. .

Además, con la aplicación total, se hubiese afectado al sistema de educación porque la Propuesta 187 habría perdido seiscientos veintiocho millones de dólares en concepto de ayuda federal, cien mil estudiantes y diez mil puestos de trabajo de maestros y empleados, según afirmó Mark Slavkin, presidente de la Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de Los Angeles (LAUSD); agregó que para cumplir dicha Propuesta, deberían violar la Ley Familiar de Derechos y Privacidad Escolar.³

Por lo tanto, librarse de las dificultades económicas debido a las presencia de extranjeros ilegales y dejar de sufrir daños y lesiones por la conducta criminal de esos extranjeros, no era todo: la Propuesta 187 solicitaba que directores y maestros identificaran a estudiantes de quienes se tuviera una "sospecha razonada" de no ser estadounidense.

Esto, independientemente de que hasta hoy no haya prosperado, creó un ambiente hostil contra los inmigrantes, explotado ampliamente durante las campañas de 1996, y dió pie a propuestas legislativas con propósitos similares en Texas, Arizona, Nuevo Mexico, Colorado y Florida, donde la inmigración documentada o no, es cuantiosa.⁴

³ Pablo Comesaña, *La Opinión*, Oct 22, 1994.

⁴ En Pomona, California, el alcalde Eddie Cortez fue arrestado sólo por su apariencia étnica.

1.2. ¿Para inmigrantes o para mexicanos?

La aprobación de la Propuesta 187 en California, el 8 de noviembre de 1994, sorprendió y asustó a muchas personas en México y en Estados Unidos. El voto definitivo del 59% a favor de la iniciativa y el 41% en contra indicó un apoyo importante a la idea de restringir la presencia de inmigrantes indocumentados y limitar su participación y la de sus familias en la sociedad californiana.⁵

Muchos de los votantes son hispanos que están cansados de ser confundidos y ser tratados como indocumentados.

Sin embargo, el aspecto económico parece ser el centro de la controversia que ha despertado la Propuesta 187: la cuestión de que si los inmigrantes "ilegales" le cuestan al Estado de California, o si contribuyen a la economía del Estado, cuestión que es el ojo de la tormenta desatada.

El gobernador Wilson dijo que los inmigrantes indocumentados le cuestan al estado cinco mil millones de dólares, de los cuales cada contribuyente debe cubrir cuatrocientos al año. Además, exigió al gobierno federal pagar por los millones de dólares que el gobierno de California gasta en la detención y encarcelamiento de inmigrantes ilegales.⁶

La opinión contraria más fundada, más allá de una opinión moral y humana, la da el Comité para los Derechos Humanos de los Inmigrantes (*Committee for Humane Immigrants Rights*, CHIRLA), ha elaborado documentos, tablas y estudios que refutan la tesis de los costos de los inmigrantes y enfatizan que, por el contrario, el gasto en servicios que se les prestan queda más que compensado por su contribución en mano de obra barata y por el consumo de bienes que realizan.

⁵ Aunque en este momento la ley estatal se encuentra suspendida por órdenes de las Cortes federales y estatales, el voto a favor de la Iniciativa la convirtió en ley.

⁶ Jesús Velasco Suplemento "Enfoque", Diario Reforma, Oct. 2, 1994, p.13.

Incluso, el propio Distrito Escolar Unificado de Los Angeles perdería unos 450 millones de dólares en fondos federales, y dejaría de percibir tres mil dólares por cada alumno indocumentado inscrito en las escuelas públicas del condado.

El propio Secretario del Departamento de Educación de Estados Unidos, Richard W. Riley, ha dicho que se suspenderían los fondos a los Distritos Escolares de California si la medida es aprobada. Menciona también que ésta medida violaría las regulaciones federales al obligar a las escuelas a revelar información personal de los estudiantes o de los padres de éstos.

Los Distritos Escolares de California reciben un total de 2.3 millones de dólares al año. El Distrito Escolar de Los Angeles, cuyo presupuesto de cuatro mil millones de dólares anuales depende en un 14% de los fondos federales, sería el más afectado de todos los distritos de California si la medida se aprueba. Estos fondos federales se invierten en programas de servicios de comidas para los estudiantes, en salud y educación bilingüe, los cuales tendrían que ser cancelados de inmediato ante la imposibilidad financiera del Distrito para mantenerlos.

De los seiscientos cuarenta mil estudiantes del Distrito, unos trescientos mil tienen conocimientos limitados de inglés, entre residentes legales y ciudadanos norteamericanos que se verían afectados si se recortan los programas de educación bilingüe.

Por último, el Distrito Escolar sostiene que no hay forma de saber cuantos estudiantes indocumentados tiene porque está prohibido pedir el estado migratorio de estos. Porque el hecho de tener un apellido en español, no quiere decir nada. Por ello, la Junta de educación del segundo Distrito Escolar más grande en Estados Unidos, el distrito unificado de Los Angeles, apoyó una moción rechazando la Propuesta 187.

Por otro lado, los inmigrantes no naturalizados no pueden votar, lo cual significa que miles de mexicanos carecen del derecho más importante en la participación política en Estados Unidos, es decir, el objeto del discurso anti-inmigrante se encuentra en una situación desigual legalmente porque los inmigrantes están limitados en sus posibilidades de protestar.

Una consecuencia inesperada, pero positiva a largo plazo, fue la conciencia política que surgió de la comunidad latina como respuesta a la Iniciativa; Por fin muchos inmigrantes legales latinos se dieron cuenta de la importancia de obtener la ciudadanía estadounidense para poder votar, ya que muchos de ellos no obtienen la ciudadanía por cuestiones administrativas.

Debido a que muchos votantes registrados en California, particularmente quienes no residen en el área de Los Angeles, tienen poco o limitado contacto con los inmigrantes en discusión, por lo que no tienen un punto de referencia para entender las implicaciones de la Iniciativa.

Hasta ahora, el trabajo de los mexicanos indocumentados sigue siendo atractivo: si les va bien, ganan el salario mínimo; si se ponen exigentes, son despedidos; cuando ya no se necesita la mano de obra, se deportan en menos de dos horas; los inmigrantes mexicanos indocumentados son más dóciles, aceptan su suerte y no forman sindicatos, ya que en Estados Unidos siempre habrá inmigrantes mexicanos indocumentados, basta recordar que sólo existe una cerca de 25 kilómetros sobre una frontera de tres mil kilómetros.

1.3. Propuesta 187, en contra de la Constitución de los Estados Unidos.

En efecto, muchos se opusieron y se oponen a la Propuesta 187; no sólo esgrimen estudios económicos para mostrar la contribución de los inmigrantes indocumentados a la economía de la región y fuertes argumentos morales

apoyados por la jerarquía eclesiástica católica, sino también, y fundamentalmente, la improcedencia de la Propuesta.

La Sección 7 de la Propuesta 187 establece:

Sección 7. Exclusion de los extranjeros ilegales de las escuelas públicas primarias y secundarias.

Sección 48215 se agrega al Código de educación para leerse.

Sección 48215 (a) Ninguna escuela pública primaria o secundaria admitirá ni permitirá la asistencia de ningún niño que no sea ciudadano de los Estados Unidos, extranjero legalmente admitido como residente permanente, o persona de otra manera esté autorizada para estar en los Estados Unidos por las leyes federales.

(b) A partir del 1 de enero de 1995, cada Distrito Escolar verificará el estado legal de cada niño que se inscriba en el Distrito Escolar por primera vez para asegurar que sólo se inscriban los ciudadanos extranjeros admitidos legalmente como residentes permanentes o personas que de otra manera estén autorizados para estar en los Estados Unidos.

(c) Para el 1 de enero de 1996, cada Distrito Escolar habrá verificado el estado legal de cada niño ya inscrito y que asista a la escuela en el Distrito Escolar para asegurar la inscripción o asistencia solo de ciudadanos de los Estados Unidos, extranjeros legalmente admitidos como residentes permanentes, o personas de otra manera estén autorizadas para estar en los Estados Unidos por las leyes federales.

(d) Para el 1 de enero de 1996, cada Distrito Escolar también habrá verificado el estado de cada padre o tutor de cada niño mencionado en la subdivisión (b) y (c) anteriores, para determinar al dicho padre o tutor en uno de los siguientes:

- 1.- Ciudadano de los Estados Unidos.**
- 2.- Un extranjero admitido legalmente como residente permanente.**
- 3.- Un extranjero admitido legalmente por un período temporal.**

(e) Cada Distrito Escolar proveerá información al Superintendente estatal de instrucción pública, al Procurador general de California y al Servicio de Inmigración y Naturalización de cualquier estudiante inscrito o alumno, padre o tutor de estudiantes que asistan a las escuelas públicas primarias o secundarias del Distrito Escolar acerca de los cuales se ha determinado o se sospecha razonablemente que han violado las leyes federales de inmigración dentro de cuarenta y cinco días de tener conocimiento de una violación aparente. También se avisará al padre o tutor legal del estudiante inscrito o alumno que éste no seguirá asistiendo a la escuela después de noventa días civiles de la fecha del aviso, amenos que se establezca su estado legal.

(1) En el caso de que cada niño que no pueda establecer su estado legal en los Estados Unidos, el Distrito Escolar educándolo por su período de noventa días de la fecha del aviso. Dicho período de noventa días se usará para lograr un traslado ordenado a una escuela en el país de origen del niño. Cada Distrito Escolar cooperará plenamente en este traslado para asegurar que las necesidades educativas del niño sean satisfechas durante ese período.

Estas son las modificaciones educativas que pretende la Propuesta 187; que el personal de los Distritos Escolares se convierta en personal del Servicio de Inmigración y Naturalización.

La Enmienda XIV a la Constitución de los Estados Unidos afirma que cualquier persona nacida en su territorio es un ciudadano de pleno derecho; en consecuencia, los hijos de inmigrantes nacidos en Estados Unidos son ciudadanos de esa nación y gozan de todos los derechos y de la protección de sus leyes.⁷

De acuerdo con la Ley Suprema de Estados Unidos, los bebés y niños hijos de inmigrantes son ciudadanos del país, como tales, deben, recibir el mayor bienestar posible. Este es el espíritu de la Constitución norteamericana explicado con claridad por el juez William J. Brennan Jr., nombrado por el Presidente Eisenhower en 1956, quien opinó en nombre de los cinco miembros de la Suprema Corte que interpretaron a favor de un inmigrante indocumentado la Enmienda XIV, y que es aplicable ahora a California como lo fue en el caso *Plyler vs. Doe* para Texas hace 10 años.

En este caso, se puso en duda que los inmigrantes indocumentados entraran a Texas en busca de educación gratuita, impusieran una carga significativa a la economía y degradaran la calidad global de la educación en el Estado; las razones principales de la Corte se basaron en el tipo de Nación que son los Estados Unidos.

La primera razón que se esgrimió fue lo que la Corte llamó la concepción fundamental de la justicia en la cual se basa el sistema. Aunque los padres que entran sin documentos deben ser castigados, los niños no son responsables de su condición. La condena de un infante sería contraria al concepto básico de justicia del sistema americano que establece que la pena legal debe tener alguna relación con la responsabilidad individual o con la conducta delictuosa. Castigar a los niños por una característica legal sobre la cual no tienen control es un medio poco efectivo –e injusto– de castigar a los padres.

⁷ Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, *Historia de la Constitución de los Estados Unidos*

El Juez Lewis. F. Powell Jr., nombrado por el Presidente Richard Nixon en 1972, señaló que negarles la educación sería crear una subclase de personas iletradas, adicionadas a los problemas de costos, desempleo, asistencia social y criminalidad .

Pero la tradición de justicia y de multiculturalismo en los Estados Unidos viene de lejos. Thomas Jefferson, uno de los primeros presidentes de la Nación afirmó en alguna ocasión: "Aplicate al estudio del idioma español con toda la asiduidad que te sea posible. El español y el inglés, que cubren prácticamente toda la cara de América deben ser conocidos de todo poblador que desee ver más allá de los límites de su granja".⁸

Con un pueblo políglota como lo es Estados Unidos Jefferson hubiese estado fascinado; sin embargo, hoy día, hablar un idioma distinto al inglés o no hablarlo, resulta un peligro.

Después de la votación favorable hacia la Propuesta 187, no se hicieron esperar las demandas en su contra al día siguiente, muchos grupos mexicanoamericanos y de derechos civiles como ACLU (*American Civil Liberties Union*), y MALDEF (*Mexican American Legal Defense and Educational Fund*) lograron una *injunction* para evitar la instrumentación de la ley estatal en las Cortes estatales y federales.⁹

De hecho, una Juez federal de Los Angeles tuvo que ordenar al gobierno estatal en enero de 1995, que aciarara a sus empleados y a los usuarios de servicios sociales que la Iniciativa 187 estaba suspendida por una *injunction* para evitar problemas de discriminación.¹⁰

⁸ Carta de Thomas Jefferson a Peter Carr en 1788. Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.

⁹ Véase Los Angeles Times, 16 de noviembre de 1994, p D-1

¹⁰ Véase Los Angeles Times, 20 de enero de 1995, p 3-A

CAPÍTULO VI LA EDUCACIÓN BILINGÜE EN EL ESTADO DE CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

1.1.- PROPUESTA 227.

Todos aquellos niños y niñas que buscan aprender en su propio idioma mientras toman clases de inglés para poder acceder a clases regulares, es decir, a clases 100 por ciento en inglés, ya no podrán hacerlo. ¿Por qué gastar recursos humanos y financieros en ellos? ¿Por qué enseñar en español?

1.1.1 ¿Quién es Ron Unz?

Ron Unz (el millonario que lideró la 227) dijo que este es el primer paso para prohibir la educación bilingüe en todo el país. Efectivamente, tan pronto se aprobó la Propuesta 227, el representante ante el Congreso, Frank Riggs, de California presentó un proyecto de ley para instituir una medida similar en todo el país.

La Proposición 227, también es llamada Iniciativa Unz/"Inglés para los niños", es una Iniciativa de voto que prohibiría la educación bilingüe en las escuelas públicas del Estado de California. Esta iniciativa tiene como mandato principal enseñar el idioma inglés en condiciones extremas.

Estudiantes que no tienen la capacidad suficiente en el idioma inglés o no tienen ninguna habilidad del idioma, "serán educados mediante la

inmersión en el idioma inglés que será de un tiempo transitorio, el cual no tendrá una duración mayor a un año".¹

Debajo de ciertas condiciones, los padres podrán renunciar al programa de inmersión, y solicitar la educación bilingüe. La Proposición también dispone de 50 millones de dólares para financiar la educación del inglés para adultos.

Maestros, administradores y las mesas directivas podrán ser demandados por los padres de familia si éstos se oponen a seguir los mandatos de la Proposición.

La Propuesta 227 fue promovida por una organización llamada "Una Nación/Una California.", ésta alega que la educación bilingüe impide que los niños aprendan inglés y que se asimilen a la sociedad estadounidense. El autor de la iniciativa es Robert Unz, un millonario de la industria de computadoras que se postuló contra el gobernador Pete Wilson en las elecciones de 1994.

La Propuesta 227 fue escrita y editada por Ron Unz y Gloria Matta Tuchman. La Señora Tuchman es una maestra de educación primaria en Santa Ana California, ella es pionera de la mesa directiva de la campaña "Sólo inglés."

Otros que apoyan la iniciativa son Fernando Vega, miembro de la mesa directiva escolar en Redwood City , y Alice Callahan un sacerdote episcopal, el cual da sus servicios en la ciudad de Los Angeles California.

¹ Véase el texto completo del la Propuesta 227 en los anexos.

En Silicon Valley, condado de Santa Clara, Distrito Escolar de San José, al norte de California, el republicano Ron Unz, advirtió que los niños y adolescentes de hasta 15 años, aprenden inglés en "unos cuantos meses". Por lo tanto, "los programas de educación bilingüe son infructuosos" y un "gasto innecesario".²

Pero, ¿por qué prohibir el bilingüismo en California multirracial, multilingüe y multicultural? California nació de la colisión de las Américas anglo y latina. Luego, tras el descubrimiento del oro en 1848, hombres desesperados de cada rincón del mundo –de Australia, de China, de Perú, de Escocia– se precipitaron hacia California. California se convirtió en el cruce de caminos del mundo mientras los hombres se abrían paso a empujones en el barro por la posibilidad de hacer girar la rueda de la fortuna.

En el Estado de California existían 5.6 millones de estudiantes en 1997; aproximadamente 1.4 millones (25 por ciento) eran únicamente en inglés. El 80 por ciento de estos estudiantes hablan español. El resto hablan vietnamés, hmong, cantones, ruso, armenio, y más de 50 diferentes lenguas. La educación bilingüe también enseña a los niños que tienen como primera lengua el inglés para aprender un segundo idioma cuando aún son niños.³

Los que apoyan la Propuesta 227 hacen referencia a estadísticas que indican que sólo el 7 por ciento de los estudiantes que hablan poco inglés lo aprenden en un año. Para ellos eso demuestra que el "experimento de educación bilingüe ha fracasado." Lo que es más afirman que la educación bilingüe está malgastando los recursos del sistema escolar de California.

² Entrevista con Ron Unz efectuada por el publicista de Hispanic Link News Service, Charles Encksen, y el reportero Josep Torres, 29 de junio de 1997.

³ Thomas Wayne and Virginia Collier, *School Effectiveness for Language Minority Students*, George Mason University, Published by the National Clearinghouse for Bilingual Education, April 1997

En realidad, más de dos tercios de los estudiantes con baja capacidad de inglés no reciben ninguna clase de enseñanza en su idioma, según un informe de la Oficina de Educación de California. Eso se debe a una escasez crónica de maestros y a la reducción de presupuestos federales en programas de educación bilingüe. En 1980 el presupuesto federal para la educación bilingüe era de 264 millones de dólares, en 1996 había bajado a 128 millones; eso coincide con una explosión en la demanda de educación bilingüe en California. El número de estudiantes que necesita la educación bilingüe es hoy el triple, 1.4 millones de lo que fue en 1985, 520,000.⁴

En 1997, California tenía sólo un maestro bilingüe para cada 92 estudiantes necesitados; para ciertas lengua como el vietnamés, la tasa era de 535 a uno. Para estudiantes khmer de Camboya, era de 2,000 a uno. Por lo tanto, la gran mayoría de los estudiantes que no logran aprender inglés ya reciben enseñanza sólo en inglés.⁵

La demanda de maestros bilingües actualmente excede la oferta, en particular, en California en donde el número de niños con habilidades limitadas de inglés casi se ha duplicado a 1,3 millones en menos de diez años, en la nación existen cerca de 4 millones de estudiantes LEP. La Junta Educativa del Estado de California estima que hay un déficit de 21,000 maestros bilingües en ese Estado.⁶

Desde noviembre de 1999 el Departamento de Educación de California y el Departamento de Educación de Arizona, abrieron una convocatoria a la

⁴ The WSWS, *Propuesta de California de escuelas sólo en inglés. Un ataque contra los derechos democráticos*, 2 de junio de 1998, p.2

⁵ *Ibidem*.

⁶ Información de la California Association for Bilingual Education (CABE).

Secretaría de Educación Pública de México solicitando maestros bilingües que quisieran enseñar en escuelas públicas de su jurisdicción por un año.⁷

El apoyo a la Proposición 227 está basado en la ignorancia acerca de este contexto. En abril de 1998, Los Angeles Times encontró en las votaciones que: el 64% de los votantes aceptaban que la mejor forma de educar es usando la lengua natal, esto es, cerca de dos tercios de los votantes registrados favorecían a la educación bilingüe. Justo un 32 por ciento está en favor de enseñar sólo inglés (la implementación de la proposición 227 sería una imposición).⁸

La Propuesta dio como resultado votos que indican que el 63 por ciento de los latinos y el 52 por ciento de los afroamericanos votaron en contra de la Propuesta 227. En comunidades inmigrantes el resultado del voto fue más del 75 por ciento en contra de la Proposición.

Sin embargo, existen grandes opositores: el Presidente Clinton, el asambleísta Cruz Bustamante, el líder asambleísta mayoritario Antonio Villaraigosa, la Federación Californiana de Maestros, y cerca de 53 Distritos escolares en California .

1.2. *English Only* en California.

El 2 de junio, la Proposición 227, fue aprobada y ahora es ley. La Proposición 227 es un ataque sádico contra los niños inmigrantes. A todos los estudiantes que no dominan el inglés, los aglomerarán en el mismo salón durante un año para aprender inglés, no importa su idioma natal ni el curso

⁷ Fuente: Programa de Educación Migrante en Glendale, Az.

⁸ Fuente: LA Times Pollat, <http://www.latimes.com/home/news/polls/>

en que estén. No recibirán clases en su propio idioma. Después de un año de esa "transición temporal", los pasarán a clases regulares donde todo se enseña sólo en inglés para que "aprendan o se hundan". Encima, la Proposición 227 facilita demandar a maestros y personal escolar que enseñen en otro idioma fuera del inglés.⁹

El objetivo de los programas de educación bilingüe que existen actualmente es capacitar a los estudiantes para desempeñarse en clases regulares y, mientras tanto, enseñarles materias en su idioma. Estos programas ayudan a los niños que no saben inglés a funcionar en la escuela. Además, rechazan la idea de que hay que obligar a todos los niños a comunicarse solamente en inglés.

Estos programas apenas tocan por encima la injusticia y la opresión que sufren los que no saben inglés. La educación bilingüe por sí sola no soluciona la opresión nacional; pero eliminar la educación bilingüe será un desastre para los niños que no saben inglés. Todos los que anhelan justicia y equidad deben luchar contra este ataque a la educación bilingüe porque es parte de la guerra que la clase dominante ha lanzado contra los inmigrantes, especialmente los latinos.

En California, casi un millón y medio de estudiantes están en la categoría de "*Limited English Proficiency*", es decir, una cuarta parte de los alumnos de las escuelas públicas. Un vocero de Departamento de Educación dijo que sólo 30 por ciento de ellos reciben clases de educación bilingüe. Y de ese 30 por ciento, sólo un poco más de la mitad tiene

⁹ Para mayor información, consultar la Proposición 227 en los anexos

maestros acreditados. Mejor dicho, antes de esta nueva ley, una pequeña minoría de los estudiantes que necesitaban educación bilingüe la recibía.

Millones saben por experiencia propia lo que es sentir la humillación de atender una clase donde no entienden lo que dice el maestro, y los hacen sentir como incapaces. Saben el terror de que el maestro les haga una pregunta que no entienden o de sentirse rechazados y abochornados por su idioma. Ahora, la Proposición 227 volverá a traer esa pesadilla para millones de niños.

Sin embargo, el principal fundamento para la supresión de la educación bilingüe, no es, después de todo; el presupuesto educativo. Tan solo recordemos que en California, el idioma oficial, según su Constitución; es el inglés.

En 1986, por medio de la Propuesta 63 la Constitución de California, artículo III, sección 6, establece que:

“El inglés es el idioma común del pueblo de los Estados Unidos y del Estado de California”.¹⁰

Por lo tanto, el inglés es declarado como el idioma oficial de California para todos los asuntos que sean jurisdicción del gobierno de California. Sin embargo, el Código de Educación de California, sección 52160-52178 ó Ley Chacón-Mascone: Ley de Educación Bilingüe/Bicultural de 1976 (AB 1329), reconoce que en cuestiones educativas, existe más de un idioma.

¹⁰ Véase la Proposición 63 en el anexo

Aunque el inglés sea el idioma oficial de California, las necesidades de su población exigen apoyo educativo en dos idiomas, derecho otorgado por leyes federales. En el propio ámbito local, la Ley Chacón-Mascone otorga derechos educativos para recibir apoyo y protección para acceder al sistema de educación pública en condiciones de igualdad de oportunidades educativas.

Dicha ley obliga a que se imparta instrucción bilingüe a todos los estudiantes de K-12, identificados como estudiantes que no hablan inglés y estudiantes con conocimientos limitados de inglés. Todos los Distritos Escolares del estado de California están obligados al identificar anualmente el número de estudiantes con conocimientos limitados de inglés, evaluar el desarrollo de dichos estudiantes, desarrollar un programa educativo bilingüe para los estudiantes identificados como LEP y explicar a los padres de los estudiantes identificados como LEP las ventajas del programa bilingüe y el derecho que ellos tienen o no de permitir que sus hijos participen en los programas bilingües.¹¹

Sin embargo, Estados Unidos sigue siendo una sociedad desigual, a pesar de la inconformidad de cientos de inmigrantes. El 3 de agosto de 1998 empezaron las clases en unas 50 escuelas del Distrito Escolar de Los Angeles, miles de alumnos que no saben inglés encontraron una realidad de *English Only*, donde se prohíbe enseñar español, coreano u otro idioma.

¹¹ Véase la Ley Chacón-Mascone en el anexo.

1.3. Consecuencias de la aprobación de la Propuesta 227.

Al día siguiente de la aprobación de la Propuesta 227 una coalición de grupos de derechos civiles, libertades civiles y derechos de inmigrantes entabló una demanda en la Corte Federal de San Francisco para bloquearla. Varios Distritos Escolares han anunciado que contra la ley, conservarán sus programas de educación bilingüe. Varios directores han dicho que no podrán cumplir la ley porque se necesitan nuevos libros, nuevos planes de estudio, nuevos maestros, etc., que no estarán listos para la fecha que requiere la Proposición.

El 4 de junio, centenares de estudiantes de la Preparatoria Wilson *High School* de Los Angeles hicieron un paro en señal de protesta. En la misma ciudad, 1500 maestros firmaron una promesa de desafiar la Propuesta 227.

12

El 22 de abril, miles de estudiantes de San Francisco y alrededores hicieron una marcha a la nueva delegación de policía de Concord, que costó 20 millones de dólares; allí apoyaron la educación bilingüe y criticaron el hecho de que se gasten millones en delegaciones y cárceles, mientras las escuelas se pudren.

En un foro en *Revolution Books* de Berkeley dos semanas antes de la votación, una estudiante de preparatoria dijo: "Si esto triunfa, todas las luchas de nuestros padres y abuelos, el movimiento de derechos civiles, será

¹² www.mcs.net/~twp/v19/950-59/995/wolk-s.htm

descartado, como si nunca hubiese sucedido. Vamos para atrás. Me parece que esto es esclavizante. No podemos hablar nuestros idiomas”.

Las vacaciones de verano estaban a punto de empezar y no se sabía exactamente cuándo se implementará la Proposición 227. Pero claramente, es la punta de lanza de un ataque nacional contra la educación bilingüe.

Los defensores de la Proposición 227 dicen que lo que quieren es que los inmigrantes aprendan inglés, no atacarlos. La prensa planteó el "debate" con dos mentiras: que el método de *"sink or swim"* es la mejor forma de enseñar inglés, y que la educación bilingüe es un fracaso y lleva a la deserción escolar.

Ningún estudio serio demuestra que los estudiantes en clases donde sólo se habla inglés es una buena forma de enseñarles inglés o cualquier otra cosa.

Por otra parte, el hecho de que muchos estudiantes (y no sólo los inmigrantes) abandonan los estudios se debe al terrible deterioro de las escuelas públicas y a que no hay suficientes programas de educación bilingüe.

Lo que impide que los niños se eduquen no es la educación bilingüe; es el tipo de enseñanza del sistema de educación de los Estados Unidos que no ofrece a millones de jóvenes más que la cárcel o un trabajo de salario mínimo y que no tiene el menor interés en que se eduquen.

Este ataque a la educación bilingüe se presenta como una "iniciativa de los ciudadanos", como si fuera la "voz del pueblo". Dicen que el voto prueba que el "pueblo" de California no quiere a los inmigrantes, así que deben bajar la cabeza y aguantar. Pero la Proposición 227 no es la voz del pueblo; es la voz del sistema. Por ejemplo: el gobierno de California comenzó a desmantelar el sistema de educación bilingüe antes de la votación. En febrero de 1998, la Junta Escolar Estatal decidió dejar la decisión de ofrecer educación bilingüe en manos de cada Distrito Escolar, (antes, el Estado lo mandaba). Esa estrategia de dejar la decisión al arbitrio de cada quien es una forma de darle rienda suelta a los conservadores. Además, la mayoría de los estudiantes no tienen maestros bilingües por recortes de fondos.

Antes de la votación, grupos de estudiantes fueron de puerta en puerta a inscribir votantes y a explicar el verdadero objetivo de la Proposición 227. Sin embargo, tropezaron con el hecho de que las elecciones son un campo desfavorable para el pueblo. Muchos de los que más sufrirían por la Propuesta 227 no pueden votar porque no son ciudadanos, porque son menores o porque han tenido problemas serios con la justicia.

Los estudiantes contaron que mucha gente estaba mal informada sobre la Propuesta 227 y pensaba que iba a mejorar las escuelas y beneficiar a los estudiantes. Los defensores de la 227 le pusieron el engañoso de "inglés para los niños". Prácticamente todos los artículos de la prensa decían que la Proposición buscaba mejorar las escuelas y agilizar el aprendizaje de los inmigrantes. Le hicieron gran propaganda a unos pocos casos aislados y exagerados de niños que aprendieron inglés en programas regulares. Las encuestas de opinión pública preguntaban: "¿quiere que sus hijos aprendan inglés?", ante la respuesta afirmativa de los padres, la conclusión de la prensa era que querían que únicamente les enseñaran en inglés.

El Presidente Clinton, los cuatro candidatos a gobernador y los Partidos Demócrata y Republicano de California se opusieron a la 227. Pero esa "oposición" se limitó a unas pocas declaraciones ninguno hizo campaña contra la Iniciativa 227, sólo decían que iba "muy lejos".

Estas diferencias se deben en parte a que la clase dominante todavía no ha acordado cómo responder ante el hecho de que los europeo-americanos pronto serán una minoría en California.

Pero el debate oficial nunca tocó el problema de que no hay suficientes programas bilingües, y mucho menos que la educación bilingüe sólo es una parte de la lucha por alcanzar igualdad de idiomas y culturas.

Los mayores opositores fueron quienes entablaron una demanda contra la 227: *The Mexican American Legal Defense and Education Fund (MALDEF)*, *Multicultural Education, Training and Advocacy, Inc.*, *California Latino Civil Rights Network*, *National Council de La Raza*, *Southern Christian Leadership Conference*, y *Chinese for Affirmative Action*. Ted Wang, del último grupo, dijo que la Propuesta 227 "tratará los niños (inmigrantes) como si tuvieran una enfermedad".

La demanda menciona varios pronunciamientos de las Cortes en los años 70 que afirmaron que los niños que no saben inglés tienen derecho a igualdad en la educación. Eso fue parte de una serie de fallos de las Cortes para integrar las escuelas en el Sur, que hasta esa década estaban segregadas por raza.

Los programas de educación bilingüe en California fueron producto de las luchas de los años 60 y 70, y de la necesidad del gobierno de mejorar su imagen internacional. En ese contexto, las Cortes Federales pronunciaron el fallo Lau en 1974, en respuesta a la demanda de un estudiante chino. El fallo Lau proponía que para que los estudiantes que no sabían inglés tuvieran igualdad en educación, deberían recibir educación bilingüe. Ahora la Iniciativa 227 eliminó ese principio.

Muchos directores de escuela critican la Propuesta. Bill Rojas, el superintendente escolar de San Francisco, dijo: "Que me metan a la cárcel.... Esto es tan ofensivo y tan inmoral que sé que los jueces lo verán así".

Un grupo de maestros de Los Angeles ha reunido 1500 firmas de maestros que dicen que no obedecerán la Iniciativa 227. Un maestro bilingüe de Los Angeles dijo que dicha Propuesta "nos hace ser saboteadores... la pregunta básica es: ¿vamos a darle la mano o a darle la espalda a los niños? Cuando se cierre la puerta, los que no son partidarios del *English Only* la van a sabotear".

La redacción del periódico *Los Angeles Times* escribió alarmada: "Hay maestros que amenazan con sabotear o simplemente ignorar la 227, pero aunque sea con buenas intenciones, los maestros no pueden cerrar la puerta del salón y desafiar la nueva ley".

Desde la "Rebelión de Los Angeles" de 1994, cuando los latinos se unieron a negros y gente de muchas nacionalidades contra el sistema, poderosas voces de la clase dominante han pintado a los inmigrantes como

una amenaza a la existencia de Estados Unidos. Los han agarrado de chivo expiatorio por los trastornos económicos y la incertidumbre social que esta alterando la vida de la clase media. El ataque a la educación bilingüe es parte de las maniobras para crear una polarización reaccionaria, que no beneficia para nada a la gran mayoría de la sociedad.

¿Qué inspira tanto odio y ataques a los inmigrantes de parte del gobierno? ¿Por qué el proletariado y los oprimidos deben luchar contra esos ataques? Un ciudadano americano, Bob Avakian, contesta estas pregunta así: ¹³

"Los imperialistas estadounidenses se enorgullecen de como han usado y absorbido a millones y millones de inmigrantes a todos nos han contado sobre el "gran crisol de razas". Pero en Estados Unidos hoy hay millones de inmigrantes a quienes los gobernantes imperialistas consideran problemáticos y peligrosos. Estos son inmigrantes del tercer mundo, en particular de las naciones oprimidas por los imperialistas estadounidenses. Tienen una vida llena de experiencia con la dura y brutal realidad del dominio yanqui y entre ellos existe un odio profundo a éste y no poca experiencia de lucha en su contra. Además, estos inmigrantes tienen muchas cosas en común con los negros, los de ascendencia mexicana, los indígenas norteamericanos y otros pueblos oprimidos dentro de las fronteras de lo que es hoy los Estados Unidos de América.

"Los imperialistas ven en estos inmigrantes una fuente de inestabilidad y sublevación, una fuerza que debilita la cohesión interna del país y tiene el potencial de socavar el poder de Estados Unidos como terrateniente internacional.... Los imperialistas reaccionan afirmando más agresivamente la identidad blanca, europea, de habla inglesa de la Nación Americana.... "

¹³ Información del periódico Latino Link, 1999.

La lucha por la educación bilingüe plantea preguntas básicas: ¿qué clase de mundo se quiere? ¿una sociedad que trate como parias a los que trabajan la tierra y sudan en las maquiladoras y prohíban su idioma?, ¿qué se torture a los niños embutiéndolos en clases donde no entienden al maestro?. ¿O se quiere un mundo diferente? ¿un mundo donde se valoran las contribuciones de gente de todas partes, que se expresan en varios idiomas?, ¿un mundo donde el pueblo puede unir su diversidad y variedad de experiencias como una poderosa fuerza para hacer la revolución y construir una nueva sociedad, una sociedad que acabe con la opresión nacional y todas las demás formas de opresión?

La consecuencia a todo ello, es la lucha por los derechos, por medio de la presentación de varias demandas en la Corte Federal:¹⁴

Los demandantes son *The California Latino Civil Rights Network* (La Red Latina de California por los Derechos Civiles), *Chinese for Affirmative Action* (Chinos en favor de la Acción Afirmativa), *Mujeres Unidas y Activas*, *Parents for Unity* (Padres por la Unidad), *National Council of La Raza* (Concilio Nacional de La Raza), *Southern Christian Leadership Conference* (Conferencia del Liderazgo Cristiano del Sur), y un gran número de padres con niños inscritos en escuelas públicas en California.

Los demandados son el Gobernador Pete Wilson, la Mesa Directiva Estatal de Educación, y la Superintendente de Instrucción Pública.

Debido a cuestiones de traducción, interpretación y conocimiento de precedentes, la decisión de la Corte ha sido transcrita en su totalidad. Para mayor información, consultar el último anexo de este trabajo.

¹⁴ Véase la demanda más importante contra la Proposición 227 *Valeria vs. Pete Wilson*, 1998, véase en los anexos.

Los representantes legales de los demandantes son abogados de las siguientes organizaciones: META, *Mexican American Legal Defense Education Foundation*, *American Citizen Language Union*, el Centro Mexico-Americano, Junta Legal Asiática (*Asian Law Caucus*), el Centro Legal Pacífico Asiático-Americano (*Asian Pacific American Legal Center*), y el Centro de Ley Laboral (*Employment Law Center*).

El objetivo inicial de la demanda era el de obtener una orden judicial para la suspensión de la implementación de la Propuesta 227. Esta orden fue negada por el Juez Legge, pero el juicio continúa.

La demanda argumenta que las siguientes leyes son violadas por la Propuesta 227: la Ley de Igualdad de Oportunidades en Educación (EEOA, 1974), la Cláusula de Igualdad de Protección de la Enmienda XIV, y el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964. Estas leyes federales garantizan el derecho a todos los estudiantes a recibir instrucción de tal manera que se les permita participar en condiciones de igualdad como los estudiantes de origen anglosajón.

Los argumentos principales son: El programa denominado "*Sheltered English Immersion*" en la Propuesta 227 no tiene bases legales ni educativas, y además forja a los estudiantes con limitado conocimiento del idioma inglés a participar en un experimento educacional para el cual no existen materiales, libros de texto ni un programa definido.

Expertos en educación predicen que muchos de los estudiantes que terminarán los 180 días del programa "*Sheltered English Immersion*" seguirán inadecuadamente preparados para seguir con su educación solamente en inglés, y sufrirán retrasos educativos.

Un argumento básico es el de que la Propuesta 227 viola la garantía constitucional de igualdad de protección al aislar un área de instrucción que beneficia a un grupo de niños en particular. La Iniciativa 227 establece un programa rígido que sería difícil de cambiar.

La Propuesta 227 entraría en vigor 60 días después de las elecciones del 2 de junio, por lo tanto:

-No se deben iniciar cambios dentro de los primeros 60 días.

-Los estudiantes que comenzaron el año escolar en julio o antes de los 60 días (2 de agosto de 1998) tampoco debían de tener cambios en sus programas bilingües, ni cambios dentro del primer término escolar.

-Es importante que los padres se informen acerca de sus derechos para ejercerlos. Estos derechos incluyen peticiones para que sus hijos participen en programas alternativos.

-Los padres deben recibir información tocante al programa que van a recibir sus hijos, incluyendo una descripción del mismo y los materiales que se utilizarán.

La Propuesta 227, dice el Secretario de Educación de los Estados Unidos, Richard W. Riley, no es el mejor camino que se pueda seguir. Según su parecer, la adopción de la Enmienda Unz resultará en que menos niños aprendan el inglés y que muchos niños se retrasen en los estudios aún más. Hay cinco razones significantes por las cuales cree que la Enmienda Unz es contraproducente para una enseñanza de calidad de todos los estudiantes.¹⁵

¹⁵ Declaración de Richard W. Riley, Secretario de Educación de los Estados Unidos, *Ayudar a cada niño a aprender*, 27 de abril de 1998, www.ed.gov

Primero, el límite de un año y el procedimiento inflexible en la enseñanza del inglés contradice los trabajos de investigación a través de los años: los niños aprenden en formas y pasos distintos. Un relato reciente del Consejo Nacional de Investigación que apareció el mes marzo de 1998, concluye que el apresurar a los niños que no hablan inglés a que lean en inglés sin asegurar que se hayan preparado adecuadamente es contraproducente. El relato recomienda que la mejor manera de alfabetizar en inglés a niños que no hablan en inglés, es primero enseñarles a leer en sus lenguas maternas, si hay maestros y materiales disponibles en esas lenguas.¹⁶

Así, aunque un procedimiento basado sólo en el inglés pueda ser adecuado para algunos niños que no dominan el inglés, no es más probable que sea eficaz para otros. No se opone a los programas especiales de enseñanza del inglés. De hecho, el 25 por ciento de los fondos federales actuales para la enseñanza bilingüe apoyan este tipo de acercamiento didáctico. Lo que se duda, es el límite arbitrario de un año, y la exigencia de que sólo este procedimiento sea correcto para ayudar a los jóvenes a que aprendan inglés.

Segundo, la Enmienda Unz limita la discreción del maestro a seleccionar el método más apto para los niños que enseña. Algunos niños aprenden mejor en una clase que únicamente utiliza el inglés, otros tal vez aprendan más rápido en una clase bilingüe o mediante otro método experimentado, pero con el acercamiento Unz, los maestros no tienen ninguna opción para utilizar su juicio profesional.

Tercero, la Propuesta 227 sujetaría a los maestros, a los miembros de las juntas escolares, y a los administradores educativos a la responsabilidad

¹⁶ National Research Council, Preventing Reading Difficulties in Young Children, p.324.

personal en pleito jurídico sino cumplen con los requisitos de la Propuesta. A su parecer este aspecto de la Propuesta 227 es punitiva y amenazadora. Esto no es la manera de construir la cooperación entre los maestros y los padres de familia lo que forma la clave del éxito estudiantil.

Cuarto, la Iniciativa Unz es un asalto directo al control local de la enseñanza. El Secretario quedó sorprendido de que tantos defensores francos del control local de la enseñanza no se hayan opuesto a este defecto fundamental en la Iniciativa Unz. La Iniciativa Unz no sería una ayuda a la enseñanza del idioma, sino sería la sobrerregulación opresiva. La flexibilidad local en la selección de los acercamientos educativos que funcionan mejor para sus estudiantes no debería ser restringida por un mandato que exige la selección de un acercamiento sobre otro. A su parecer, cada Distrito Escolar debe escoger el método educativo que funciona mejor basándose en rigurosos trabajos de investigación.

Quinto, la Iniciativa Unz resultará en violación de las leyes federales de derechos civiles. En el caso ejemplar de Lau vs. Nichols, la Corte Suprema interpretó el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de tal manera que requiere que los Distritos Escolares tomen medidas para asegurar que los estudiantes de origen minoritario nacional con habilidades limitadas en inglés puedan participar efectivamente en los programas educativos regulares.

Asimismo, la Ley de Igualdad de Oportunidades Educativas requiere que las agencias públicas educativas superen las barreras de lenguaje que impiden la participación de estudiantes en sus programas de instrucción. El limitar la instrucción especial de desarrollo de lenguaje a un año y el prevenir a las escuelas a que provean enseñanza bilingüe, a pesar del juicio de los maestros y los directores que concluyen que los niños en esas escuelas

necesitan la enseñanza bilingüe para progresar, posiblemente resulte en violaciones de esas leyes.¹⁷

“Me uno a todos los californianos que no están contentos con el estado actual y entiendo que la frustración anima a muchos votantes a pensar en votar a favor de la Iniciativa Unz. Pero el acercamiento de la Iniciativa Unz sencillamente está equivocada. La Propuesta 227 tal vez satisfaga el sentido de frustración que mucha gente tiene, pero en última instancia es contraproducente a nuestra meta común de asegurar que los niños aprendan el inglés mientras progresan académicamente en las otras materias.”¹⁸

El Secretario propone una meta de tres años para asegurar que los niños aprendan el inglés. Las diferencias y circunstancias individuales pueden causar que algunos niños requieran más tiempo para aprender el idioma, pero una meta de aprender el inglés dentro de tres años es razonable. Esta meta es semejante al propósito de asegurar que cada niño aprenda a leer independientemente al fin del tercer año o antes.

Una meta no es mandato u orden. Y ciertamente una meta no es una camisa de fuerza educativa que limita la posibilidad de que los maestros hagan lo mejor para cada niño. Algunos niños tal vez aprendan el inglés dentro de un año o dos, y otros tal vez necesiten tres años o aún más. El enfoque debe ser sobre las necesidades individuales de cada niño y no sobre alguna estructura artificial y arbitraria.

Si un Distrito Escolar selecciona un método para la enseñanza del inglés que no tiene resultados positivos para un gran número de niños, entonces el Distrito Escolar debería tener el buen sentido de corregir el problema o de utilizar algún otro método apoyado por trabajos de

¹⁷ Así lo establece la el caso: Valera vs. Pete Wilson, 1998. Véase en los anexos.

¹⁸ Declaración de Richard W. Riley. www.ed.gov.

investigación. El énfasis de cada programa sea del inglés como segunda lengua, un programa de inmersión en dos lenguas, la educación bilingüe o la inmersión en el inglés tiene que ser el de fortalecer la calidad de la enseñanza, a pesar del método educativo.

Finalmente , Richard Riley declara que el pueblo norteamericano debe pensar en todas las ventajas económicas, culturales y políticas que la fluidez en dos idiomas pueda traer al pueblo norteamericano. El mensaje norteamericano de la democracia, los derechos humanos y la libertad económica seguramente alcanzaría a un público más amplio. Es por esto que anima y apoya todo Distrito Escolar que establezca la meta de asegurar que cada uno de los egresados de las escuelas secundarias podrán hablar dos idiomas con fluidez al egresar. Por último, aboga por todos los norteamericanos a dar la bienvenida a los nuevos ciudadanos y ayudarles a formar parte del sueño norteamericano.

En este sentido, las declaraciones más importantes fueron de Boutros Ghali: "Las últimas disposiciones legales emanadas por los Estados de la Unión practican la peor y más monstruosa negación de los derechos de los inmigrantes: imposición cultural de negarles el derecho a la educación bilingüe, pérdida de derechos al acceso a la salud, de cesantía, vejez, jubilación y montepío, negación absoluta de los derechos humanos básicos contenidos en la Declaración Universal de 1948. Así, Estados Unidos comprende los derechos humanos.

"Los afroamericanos, hispanoamericanos, amarillos, indios norteamericanos, son humanos sin derechos por decreto imperial, ya que los derechos sólo pertenecen a los anglosajones, siempre que tengan suficiente dinero para reclamarlos y practicarlos".¹⁹

¹⁹ Ghali-Boutros Boutros, *Estados Unidos viola los Derechos Humanos*, [www3 satnet/vddhh/cronos/cronos2](http://www3.satnet/vddhh/cronos/cronos2).

CONCLUSIONES

PRIMERA.- Contra los preceptos del Tratado de Guadalupe-Hidalgo de 1848 que establecía el respeto a la propiedad de la tierra, la lengua y la cultura de la población de origen mexicano, la educación en Estados Unidos se orientó a lograr la aculturación de este grupo, en donde se les consideró inferiores, buscando cambiar su idioma y su cultura.

SEGUNDA.- En México, la educación es un derecho otorgado por la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 3º. En Estados Unidos de América, la educación no es un derecho constitucional.

TERCERA.- Los derechos educativos en Estados Unidos son reconocidos y otorgados por la Suprema Corte y las Cortes Federales, no por razones basadas en el derecho de acceso a la educación, sino por cuestiones de no discriminación e igualdad de oportunidades.

CUARTA.- La Enmienda X a la Constitución de los Estados Unidos establece que todos los poderes no delegados a la Unión, son delegados a los Estados. La educación es competencia de los Estados, quienes delegan sus atribuciones en los Distritos Escolares.

QUINTA.- La Enmienda XIV a la Constitución de los Estados Unidos, y la Ley de Derechos Civiles de 1964, permiten el acceso a la educación por cuestiones de no discriminación e igualdad de oportunidades más allá de su origen nacional, de su religión, color o condición migratoria.

SÉPTIMA.- La educación bilingüe es un programa en el que se imparte educación en dos idiomas, en inglés y en la lengua materna del estudiante; al mismo tiempo, capacita y habilita a los estudiantes para recibir materias académicas que necesitan un completo dominio del inglés.

OCTAVA.- La Ley de Educación Bilingüe de 1968 y la Ley de Igualdad de Oportunidades Educativas de 1974, otorgan a la educación, la categoría de derecho semifundamental para todos los habitantes de los Estados Unidos de América que no tengan como lengua materna el idioma inglés.

NOVENA.- Los precedentes más importantes para hacer valer los derechos de acceso a la educación para todos los inmigrantes que no hablan inglés son: Lau vs. Nichols de 1974, y Plyler vs. Doe en 1982. El caso Lau vs. Nichols establece el derecho a recibir educación en un idioma diferente al inglés. En 1982, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó en el caso Plyler vs. Doe que los niños y jóvenes indocumentados tienen el mismo derecho de asistir a las escuelas públicas primarias y secundarias que tienen sus contrapartes de nacionalidad estadounidense.

DÉCIMA.- Entre los habitantes de Estados Unidos de América, se encuentran 19.2 millones de mexicanos, es decir, el 64% de la población hispana; concentrados en cinco Estados básicamente: California, Arizona, Nuevo México, Illinois y Texas.

UNDÉCIMA.- Un alto porcentaje de padres mexicanos no tienen interés en que sus hijos se eduquen, simplemente porque lo consideran innecesario. Al darse cuenta que ellos sobreviven sin educación, no consideran indispensable que sus hijos asistan a la escuela para forjarse un mejor futuro.

DUODÉCIMA.- El inglés no está declarado como el idioma oficial de los Estados Unidos de América, sin embargo cerca de catorce Estados lo han adoptado como idioma oficial dentro de su Constitución, permitiendo la prohibición o eliminación de la educación bilingüe.

DECIMOTERCERA.- El idioma inglés ha sido declarado como idioma oficial en California para todos los asuntos que sean jurisdicción del gobierno. El Código de Educación de California reconoce que en cuestiones educativas existe más de un idioma.

DECIMOCUARTA.- Las Propuestas 187 y 227 son iniciativas que pretenden eliminar derechos de asistencia social y educación bilingüe para los inmigrantes, en especial para los mexicanos. Miles de niños y jóvenes cuyo único delito es su tez morena, nacidos o residentes en Estados Unidos, pero cuyo padres ingresaron sin documentos, fueron y han sido excluidos de servicios educativos, de salud, de transporte y de desayunos escolares entre otros.

El inglés se ha convertido en el idioma mundial, en 10 o 15 años todos tendremos que ser bilingües, pero las costumbres, las tradiciones, y sobre todo, el idioma de los hispanos, se reforzará y se expandirá a todos aquellos lugares donde exista alguien que hable español.

Margarita Judith López Peñaloza

ANEXO 1

CIVIL RIGHTS ACT OF 1964.

TITLE I--VOTING RIGHTS
TITLE II--INJUNCTIVE RELIEF AGAINST DISCRIMINATION IN PLACES OF
TITLE III--DESEGREGATION OF PUBLIC FACILITIES
TITLE IV--DESEGREGATION OF PUBLIC EDUCATION
TITLE V--COMMISSION ON CIVIL RIGHTS
TITLE VI--NONDISCRIMINATION IN FEDERALLY ASSISTED PROGRAMS
TITLE VII--EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY
TITLE VIII--REGISTRATION AND VOTING STATISTICS
TITLE IX--INTERVENTION AND PROCEDURE AFTER REMOVAL IN CIVIL RIGHTS CASES
TITLE X--ESTABLISHMENT OF COMMUNITY RELATIONS SERVICE
TITLE XI--MISCELLANEOUS

Document Number PL 88-352

Date 02 JUL 64

88th Congress, H R 7152

An Act

To enforce the constitutional right to vote, to confer jurisdiction upon the district courts of the United States to provide injunctive relief against discrimination in public accommodations, to authorize the Attorney General to institute suits to protect constitutional rights in public facilities and public education, to extend the Commission on Civil Rights, to prevent discrimination in federally assisted programs, to establish a Commission on Equal Employment Opportunity, and for other purposes.

Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled, That this Act may be cited as the "Civil Rights Act of 1964".

TITLE IV--DESEGREGATION OF PUBLIC EDUCATION

DEFINITIONS

SEC. 401 As used in this title--

(a) "Commissioner" means the Commissioner of Education.

(b) "Desegregation" means the assignment of students to public schools and within such schools without regard to their race, color, religion, or national origin, but "desegregation" shall not mean the assignment of students to public schools in order to overcome racial imbalance.

(c) "Public school" means any elementary or secondary educational institution, and "public college" means any institution of higher education or any technical or vocational school above the secondary school level, provided that such public school or public college is operated by a State, subdivision of a State, or governmental agency within a State, or operated wholly or predominantly from or through the use of governmental funds or property, or funds or property derived from a governmental source

(d) "School board" means any agency or agencies which administer a system of one or more public schools and any other agency which is responsible for the assignment of students to or within such system.

SURVEY AND REPORT OF EDUCATIONAL OPPORTUNITIES

SEC. 402 The Commissioner shall conduct a survey and make a report to the President and the Congress, within two years of the enactment of this title, concerning the lack of availability of equal educational opportunities for individuals by reason of race, color, religion, or national origin in public educational institutions at all levels in the United States, its territories and possessions, and the District of Columbia.

TECHNICAL ASSISTANCE

SEC. 403. The Commissioner is authorized, upon the application of any school board, State, municipality, school district, or other governmental unit legally responsible for operating a public school or schools, to render technical assistance to such applicant in the preparation, adoption, and implementation of plans for the desegregation of public schools. Such technical assistance may, among other activities, include making available to such agencies information regarding effective methods of coping with special educational problems occasioned by desegregation, and making available to such agencies personnel of the Office of Education or other persons specially equipped to advise and assist them in coping with such problems.

TRAINING INSTITUTES

SEC. 404. The Commissioner is authorized to arrange, through grants or contracts, with institutions of higher education for the operation of short-term or regular session institutes for special training designed to improve the ability of teachers, supervisors, counselors, and other elementary or secondary school personnel to deal effectively with special educational problems occasioned by desegregation. Individuals who attend such an institute on a full-time basis may be paid stipends for the period of their attendance at such institute in amounts specified by the Commissioner in regulations, including allowances for travel to attend such institute.

GRANTS

SEC. 405 (a) The Commissioner is authorized, upon application of a school board, to make grants to such board to pay, in whole or in part, the cost of--

(1) giving to teachers and other school personnel in-service training in dealing with problems incident to desegregation, and

(2) employing specialists to advise in problems incident to desegregation.

(b) In determining whether to make a grant, and in fixing the amount thereof and the terms and conditions on which it will be made, the Commissioner shall take into consideration the amount available for grants under this section and the other applications which are pending before him; the financial condition of the applicant and the other resources available to it; the nature, extent, and gravity of its problems incident to desegregation, and such other factors as he finds relevant.

PAYMENTS

SEC. 406. Payments pursuant to a grant or contract under this title may be made (after necessary adjustments on account of previously made overpayments or underpayments) in advance or by way of reimbursement, and in such installments, as the Commissioner may determine.

SUITS BY THE ATTORNEY GENERAL

SEC. 407 (a) Whenever the Attorney General receives a complaint in writing--

(1) signed by a parent or group of parents to the effect that his or their minor children, as members of a class of persons similarly situated, are being deprived by a school board of the equal protection of the laws, or

(2) signed by an individual, or his parent, to the effect that he has been denied admission to or not permitted to continue in attendance at a public college by reason of race, color, religion, or national origin,

and the Attorney General believes the complaint is meritorious and certifies that the signer or signers of such complaint are unable, in his judgment, to initiate and maintain appropriate legal proceedings for relief and that the institution of an action will materially further the orderly achievement of desegregation in public education, the Attorney General is authorized, after giving notice of such complaint to the appropriate school board or college authority and after certifying that he is satisfied that such board or authority has had a reasonable time to adjust the conditions alleged in such complaint, to institute for or in the name of the United States a civil action in any appropriate district court of the United States against such parties and for such relief as may be appropriate, and such court shall have and shall exercise jurisdiction of proceedings instituted pursuant to this section, provided that nothing herein shall empower any official or court of the United States to issue any order seeking to achieve a racial balance

in any school by requiring the transportation of pupils or students from one school to another or one school district to another in order to achieve such racial balance, or otherwise enlarge the existing power of the court to insure compliance with constitutional standards. The Attorney General may implead as defendants such additional parties as are or become necessary to the grant of effective relief hereunder.

(b) The Attorney General may deem a person or persons unable to initiate and maintain appropriate legal proceedings within the meaning of subsection

(a) of this section when such person or persons are unable, either directly or through other interested persons or organizations, to bear the expense of the litigation or to obtain effective legal representation; or whenever he is satisfied that the institution of such litigation would jeopardize the personal safety, employment, or economic standing of such person or persons, their families, or their property.

(c) The term "parent" as used in this section includes any person standing in loco parents. A "complaint" as used in this section is a writing or document within the meaning of section 1001, title 18, United States Code.

SEC. 408. In any action or proceeding under this title the United States shall be liable for costs the same as a private person

SEC. 409. Nothing in this title shall affect adversely the right of any person to sue for or obtain relief in any court against discrimination in public education.

SEC. 410. Nothing in this title shall prohibit classification and assignment for reasons other than race, color, religion, or national origin.

TITLE VI--NONDISCRIMINATION IN FEDERALLY ASSISTED PROGRAMS

SEC. 601. No person in the United States shall, on the ground of race, color, or national origin, be excluded from participation in, be denied the benefits of, or be subjected to discrimination under any program or activity receiving Federal financial assistance

SEC. 602. Each Federal department and agency which is empowered to extend Federal financial assistance to any program or activity, by way of grant, loan, or contract other than a contract of insurance or guaranty, is authorized and directed to effectuate the provisions of section 601 with respect to such program or activity by issuing rules, regulations, or orders of general applicability which shall be consistent with achievement of the objectives of the statute authorizing the financial assistance in connection with which the action is taken. No such rule, regulation, or order shall become effective unless and until approved by the President. Compliance with any requirement adopted pursuant to this section may be effected (1) by the termination of or refusal to grant or to continue assistance under such program or activity to any recipient as to whom there has been an express finding on the record, after opportunity for hearing, of a failure to comply with such requirement, but such termination or refusal shall be limited to the particular political entity, or part thereof, or other recipient as to whom such a finding has been made and, shall be limited in its effect to the particular program, or part thereof, in which such non-compliance has been so found, or (2) by any other means authorized by law: Provided, however, That no such action shall be taken until the department or agency concerned has advised the appropriate person or persons of the failure to comply with the requirement and has determined that compliance cannot be secured by voluntary means. In the case of any action terminating, or refusing to grant or continue, assistance because of failure to comply with a requirement imposed pursuant to this section, the head of the Federal department or agency shall file with the committees of the House and Senate having legislative jurisdiction over the program or activity involved a full written report of the circumstances and the grounds for such action. No such action shall become effective until thirty days have elapsed after the filing of such report

SEC. 603. Any department or agency action taken pursuant to section 602 shall be subject to such judicial review as may otherwise be provided by law for similar action taken by such department or agency on other grounds. In the case of action, not otherwise subject to judicial review, terminating or refusing to grant or to continue financial assistance upon a finding of failure to comply with any requirement imposed pursuant to section 602, any person aggrieved (including any State or political subdivision thereof and any agency of either) may obtain judicial review of such action in accordance with section 10 of the Administrative Procedure Act, and such action shall not be deemed committed to unreviewable agency discretion within the meaning of that section

SEC. 604. *Nothing contained in this title shall be construed to authorize action under this title by any department or agency with respect to any employment practice of any employer, employment agency, or labor organization except where a primary objective of the Federal financial assistance is to provide employment*

SEC. 605. *Nothing in this title shall add to or detract from any existing authority with respect to any program or activity under which Federal financial assistance is extended by way of a contract of insurance or guaranty.*

ANEXO 2

Public Law 103-382
The Improving America's Schools Act of 1994

"TITLE VII--BILINGUAL EDUCATION, LANGUAGE ENHANCEMENT, AND LANGUAGE ACQUISITION PROGRAMS

"PART A--BILINGUAL EDUCATION

"SEC. 7101. SHORT TITLE.

"This part may be cited as the 'Bilingual Education Act'.

"SEC. 7102. FINDINGS, POLICY, AND PURPOSE.

"(a) Findings --The Congress finds that--

"(1) language-minority Americans speak virtually all world languages plus many that are indigenous to the United States;

"(2) there are large and growing numbers of children and youth of limited-English proficiency, many of whom have a cultural heritage that differs from that of their English-proficient peers;

"(3) the presence of language-minority Americans is related in part to Federal immigration policies;

"(4) many language-minority Americans are limited in their English proficiency, and many have limited education and income;

"(5) limited English proficient children and youth face a number of challenges in receiving an education that will enable such children and youth to participate fully in American society, including--

"(A) segregated education programs;

"(B) disproportionate and improper placement in special education and other special programs due to the use of inappropriate evaluation procedures;

"(C) the limited-English proficiency of their own parents, which hinders the parents' ability to fully participate in the education of their children, and

"(D) a shortage of teachers and other staff who are professionally trained and qualified to serve such children and youth;

"(6) Native Americans and Native American languages (as such terms are defined in section 103 of the Native American Languages Act), including native residents of the outlying areas, have a unique status under Federal law that requires special policies within the broad purposes of this Act to serve the education needs of language minority students in the United States;

"(7) institutions of higher education can assist in preparing teachers, administrators and other school personnel to understand and build upon the educational strengths and needs of language-minority and culturally diverse student enrollments;

"(8) it is the purpose of this title to help ensure that limited English proficient students master English and develop high levels of academic attainment in content areas;

"(9) quality bilingual education programs enable children and youth to learn English and meet high academic standards including proficiency in more than one language,

"(10) as the world becomes increasingly interdependent and as international communication becomes a daily occurrence in government, business, commerce, and family life, multilingual skills constitute an important national resource which deserves protection and development,

"(11) educational technology has the potential for improving the education of language-minority and limited English proficient students and their families, and the Federal Government should foster this development;

"(12) parent and community participation in bilingual education programs contributes to program effectiveness,

"(13) research, evaluation, and data-collection capabilities in the field of bilingual education need to be strengthened so that educators and other staff can better identify and promote those programs, program implementation strategies, and instructional practices that result in effective education of limited English proficient children;

"(14) the use of a child or youth's native language and culture in classroom instruction can--

"(A) promote self-esteem and contribute to academic achievement and learning English by limited English proficient children and youth,

"(B) benefit English-proficient children and youth who also participate in such programs, and

"(C) develop our Nation's national language resources, thus promoting our Nation's competitiveness in the global economy;

"(15) the Federal Government, as exemplified by title VI of the Civil Rights of 1964 and section 204(f) of the Equal Education Opportunities Act of 1974, has a special and continuing obligation to

ensure that States and local school districts take appropriate action to provide equal educational opportunities to children and youth of limited English proficiency; and

"(16) the Federal Government also, as exemplified by the Federal Government's efforts under this title, has a special and continuing obligation to assist States and local school districts in developing the capacity to provide programs of instruction that offer limited English proficient children and youth an equal educational opportunity.

"(b) Policy.--The Congress declares it to be the policy of the United States, in order to ensure equal educational opportunity for all children and youth and to promote educational excellence, to assist State and local educational agencies, institutions of higher education and community-based organizations to build their capacity to establish, implement, and sustain programs of instruction for children and youth of limited English proficiency.

"(c) Purpose --The purpose of this part is to educate limited English proficient children and youth to meet the same rigorous standards for academic performance expected of all children and youth, including meeting challenging State content standards and challenging State student performance standards in academic areas by--

"(1) developing systemic improvement and reform of educational programs serving limited English proficient students through the development and implementation of exemplary bilingual education programs and special alternative instruction programs;

"(2) developing bilingual skills and multicultural understanding;

"(3) developing the English of such children and youth and, to the extent possible, the native language skills of such children and youth;

"(4) providing similar assistance to Native Americans with certain modifications relative to the unique status of Native American languages under Federal law,

"(5) developing data collection and dissemination, research, materials development, and technical assistance which is focused on school improvement for limited English proficient students; and

"(6) developing programs which strengthen and improve the professional training of educational personnel who work with limited English proficient students.

"SEC. 7103. AUTHORIZATION OF APPROPRIATIONS.

"(a) In General --For the purpose of carrying out this part, there are authorized to be appropriated \$215,000,000 for the fiscal year 1995 and such sums as may be necessary for each of the four succeeding fiscal years.

"(b) Distribution --From the sums appropriated under subsection (a) for any fiscal year, the Secretary shall reserve not less than 25 percent of such funds for such year to carry out subpart 3

"SEC. 7104. NATIVE AMERICAN AND ALASKA NATIVE CHILDREN IN SCHOOL.

"(a) Eligible Entities.--For the purpose of carrying out programs under this part for individuals served by elementary, secondary, and postsecondary schools operated predominately for Native American or Alaska Native children and youth, an Indian

tribe, a tribally sanctioned educational authority, a Native Hawaiian or Native American Pacific Islander native language education organization, or an elementary or secondary school that is operated or funded by the Bureau of Indian Affairs shall be

considered to be a local educational agency as such term is used in this part, subject to the following qualifications:

"(1) Indian tribe.--The term 'Indian tribe' means any Indian tribe, band, nation, or other organized group or community, including any Alaska Native village or regional or village corporation as defined in or established pursuant to the Alaska

Native Claims Settlement Act (43 U.S.C. 1601 et seq.), that is recognized for the special programs and services provided by the United States to Indians because of their status as Indians.

"(2) Tribally sanctioned educational authority.--The term 'tribally sanctioned educational authority' means--

"(A) any department or division of education operating within the administrative structure of the duly constituted governing body of an Indian tribe; and

"(B) any nonprofit institution or organization that is--

"(i) chartered by the governing body of an Indian tribe to operate any such school or otherwise to oversee the delivery of educational services to members of that tribe; and

"(ii) approved by the Secretary for the purpose of this section.

"(b) Eligible Entity Application.--Notwithstanding any other provision of this part, each eligible entity described in subsection (a) shall submit any application for assistance under this part directly to the Secretary along with timely comments on the need for the proposed program.

"SEC 7105 RESIDENTS OF THE TERRITORIES AND FREELY ASSOCIATED NATIONS

"For the purpose of carrying out programs under this part in the outlying areas, the term 'local educational agency' shall include public institutions or agencies whose mission is the preservation and maintenance of native languages.

"Subpart 1--Bilingual Education Capacity and Demonstration Grants

"SEC 7111 FINANCIAL ASSISTANCE FOR BILINGUAL EDUCATION.

"The purpose of this subpart is to assist local educational agencies, institutions of higher education, and community-based organizations, through the grants authorized under sections 7112, 7113, 7114, and 7115 to--

"(1) develop and enhance their capacity to provide high-quality instruction through bilingual education or special alternative instruction programs to children and youth of limited English proficiency; and

"(2) to help such children and youth--

"(A) develop proficiency in English, and to the extent possible, their native language; and

"(B) meet the same challenging State content standards and challenging State student performance standards expected for all children and youth as required by section 1111(b)

"SEC 7112 PROGRAM DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION GRANTS.

"(a) Purpose.--The purpose of this section is to develop and implement new comprehensive, coherent, and successful bilingual education or special alternative instructional programs for limited English proficient students, including programs of early childhood education, Kindergarten through twelfth grade education, gifted and talented education, and vocational and applied technology education

"(b) Program Authorized.--

"(1) Authority --(A) The Secretary is authorized to award grants to eligible entities having applications approved under section 7116 to enable such entities to carry out activities described in paragraph (2)

"(B) Each grant under this section shall be awarded for a period of three years

"(2) Authorized activities.--(A) Grants awarded under this section shall be used to improve the education of limited English proficient students and their families by--

"(i) developing and implementing comprehensive preschool, elementary, or secondary bilingual education or special alternative instructional programs that are coordinated with other relevant programs and services to meet the full range of educational needs of limited English proficient students; and

"(ii) providing inservice training to classroom teachers, administrators, and other school or community-based organizational personnel to improve the instruction and assessment of language-minority and limited English proficient students.

"(B) Grants under this section may be used to improve the education of limited English proficient students and their families by--

"(i) implementing family education programs and parent outreach and training activities designed to assist parents to become active participants in the education of their children,

"(ii) improving the instructional program for limited English proficient students by identifying, acquiring, and upgrading curriculum, instructional materials, educational software and assessment procedures and, if appropriate, applying educational technology;

"(iii) compensating personnel, including teacher aides who have been specifically trained, or are being trained, to provide services to children and youth of limited English proficiency;

"(iv) providing tutorials and academic or career counseling for children and youth of limited-English proficiency; and

"(v) providing such other activities, related to the purposes of this part, as the Secretary may approve

"(c) Eligible Entity --For the purpose of this section the term 'eligible entity' means--

"(1) one or more local educational agencies;

"(2) one or more local educational agencies in collaboration with an institution of higher education, community-based organization or local or State educational agency, or

"(3) a community-based organization or an institution of higher education which has an application approved by the local educational agency to develop and implement early childhood education or family education programs or to conduct

an instructional program which supplements the educational services provided by a local educational agency

"(d) Due Consideration.--In awarding grants under this section, the Secretary shall give due consideration to the need for early childhood education, elementary education, and secondary education programs

"SEC. 7113. PROGRAM ENHANCEMENT PROJECTS.

"(a) Purpose.--The purpose of this section is to carry out *highly focused, innovative, locally designed* projects to expand or enhance existing bilingual education or special alternative instructional programs for limited English proficient students.

"(b) Program Authorized.--

"(1) Authority.--(A) The Secretary is authorized to award grants to eligible entities having applications approved under section 7116 to enable such entities to carry out activities described in paragraph (2).

"(B) Each grant under this section shall be awarded for a period of two years.

"(2) Authorized activities.--(A) Grants under this section shall be used for providing inservice training to classroom teachers, administrators, and other school or community-based organization personnel to improve the *instruction and assessment of language-minority and limited English proficient* students.

"(B) Grants under this section may be used for--

"(i) implementing family education programs and parent outreach and training activities designed to assist parents to become active participants in the education of their children;

"(ii) *improving the instructional program for limited English proficient* students by identifying, acquiring, and upgrading curriculum, instructional materials, educational software and assessment procedures and, if appropriate, applying educational technology;

"(iii) compensating personnel, including teacher aides who have been specifically trained, or are being trained, to provide services to children and youth of limited-English proficiency,

"(iv) *providing tutorials and academic or career counseling for* children and youth of limited-English proficiency;

"(v) providing intensified instruction; and

"(vi) providing such other activities, related to the purposes of this part, as the Secretary may approve.

"(c) Eligible Entity.--For the purpose of this section the term 'eligible entity' means--

"(1) one or more local educational agencies;

"(2) one or more local educational agencies in collaboration with an institution of higher education, community-based organization or local or State educational agency; or

"(3) a community-based organization or an institution of higher education which has an application approved by the local educational agency to enhance early childhood education or family education programs or to conduct an instructional program which supplements the educational services provided by a local educational agency.

"SEC. 7114 COMPREHENSIVE SCHOOL GRANTS.

"(a) Purpose.--The purpose of this section is to provide financial assistance to eligible entities to implement schoolwide bilingual education programs or special alternative instruction programs for reforming, restructuring, and upgrading all relevant programs and operations, within an individual school, that serve all (or virtually all) children and youth of limited-English proficiency in schools with significant concentrations of such children and youth.

"(b) Program Authorized --

"(1) Authority.--(A) The Secretary is authorized to award grants to eligible entities having applications approved under section 7116 to enable such entities to carry out activities described in paragraph (3).

"(B) Each grant under this section shall be awarded for five years.

"(2) Termination.--The Secretary shall terminate grants to eligible entities under this section if the Secretary determines that--

"(A) the program evaluation required by section 7123 indicates that students in the schoolwide program are not being taught to and are not making adequate progress toward achieving challenging State content standards and challenging State student performance standards; or

"(B) in the case of a program to promote dual language facility, such program is not promoting such facility

"(3) Authorized activities.--Grants under this section may be used to improve the education of limited English proficient students and their families by--

"(A) implementing family education programs and parent outreach and training activities designed to assist parents to become active participants in the education of their children;

"(B) *improving the instructional program for limited English proficient students by identifying, acquiring and upgrading curriculum, instructional materials, educational software and assessment procedures and, if appropriate, applying educational technology;*

"(C) compensating personnel, including teacher aides who have been specifically trained, or are being trained, to provide services to children and youth of limited English proficiency;

"(D) providing tutorials and academic or career counseling for children and youth of limited-English proficiency;

"(E) providing intensified instruction; and

"(F) providing such other activities, related to the purposes of this part, as the Secretary may approve.

"(4) Special rule.--A grant recipient, before carrying out a program assisted under this section, shall plan, train personnel, develop curriculum, and acquire or develop materials.

"(c) Eligible Entities.--For the purpose of this section the term 'eligible entity' means--

"(1) one or more local educational agencies; or

"(2) one or more local educational agencies in collaboration with an institution of higher education, community-based organizations or a local or State educational agency.

"SEC. 7115. SYSTEMWIDE IMPROVEMENT GRANTS.

"(a) Purpose --The purpose of this section is to implement districtwide bilingual education programs or special alternative instruction programs to improve, reform, and upgrade relevant programs and operations, within an entire local educational agency, that serve a significant number of children and youth of limited English proficiency in local educational agencies with significant concentrations of such children and youth

"(b) Program Authorized.--

"(1) Authority --(A) The Secretary is authorized to award grants to eligible entities having applications approved under section 7116 to enable such entities to carry out activities described in paragraphs (3) and (4).

"(B) Each grant under this section shall be awarded for 5 years.

"(2) Termination.--The Secretary shall terminate grants to eligible entities under this section if the Secretary determines that--

"(A) the program evaluation required by section 7123 indicates that students in the program are not being taught to and are not making adequate progress toward achieving challenging State content standards and challenging State student performance standards; or

"(B) in the case of a program to promote dual language facility, such program is not promoting such facility

"(3) Preparation --Grants under this section may be used during the first 12 months exclusively for activities preparatory to the delivery of services.

"(4) Uses.--Grants under this section may be used to improve the education of limited English proficient students and their families by reviewing, restructuring, and upgrading--

"(A) educational goals, curriculum guidelines and content, standards and assessments,

"(B) personnel policies and practices including recruitment, certification, staff development, and assignment;

"(C) student grade-promotion and graduation requirements;

"(D) student assignment policies and practices,

"(E) family education programs and parent outreach and training activities designed to assist parents to become active participants in the education of their children;

"(F) the instructional program for limited English proficient students by identifying, acquiring and upgrading curriculum, instructional materials, educational software and assessment procedures and, if appropriate, applying educational technology;

"(G) tutorials and academic or career counseling for children and youth of limited-English proficiency; and

"(H) such other activities, related to the purposes of this part, as the Secretary may approve

"(c) Eligible Entities --For the purpose of this section the term 'eligible entity' means--

"(1) one or more local educational agencies, or

"(2) one or more local educational agencies in collaboration with an institution of higher education, community-based organizations or a local or State educational agency.

"SEC 7116 APPLICATIONS

"(a) In General.--

"(1) Secretary.--To receive a grant under this subpart, an eligible entity shall submit an application to the Secretary at such time, in such form, and containing such information as the Secretary may require.

"(2) State educational agency.--An eligible entity, with the exception of schools funded by the Bureau of Indian Affairs, shall submit a copy of its application under this section to the State educational agency

"(b) State Review and Comments.--

"(1) Deadline.--The State educational agency, not later than 45 days after receipt of an application under this section, shall review the application and transmit such application to the Secretary.

"(2) Comments.--(A) Regarding any application submitted under this title, the State educational agency shall--

"(i) submit to the Secretary written comments regarding all such applications; and

"(ii) submit to each eligible entity the comments that pertain to such entity.

"(B) For purposes of this subpart, such comments shall address how the eligible entity--

"(i) will further the academic achievement of limited English proficient students served pursuant to a grant received under this subpart; and

"(ii) how the grant application is consistent with the State plan submitted under section 1111.

"(c) Eligible Entity Comments.--An eligible entity may submit to the Secretary comments that address the comments submitted by the State educational agency.

"(d) Comment Consideration.--In making grants under this subpart the Secretary shall take into consideration comments made by a State educational agency.

"(e) Waiver.--Notwithstanding subsection (b), the Secretary is authorized to waive the review requirement of subsection (b) if a State educational agency can demonstrate that such review requirement may impede such agency's ability to fulfill the requirements of participation in the State grant program, particularly such agency's data collection efforts and such agency's ability to provide technical assistance to local educational agencies not receiving funds under this Act.

"(f) Required Documentation.--Such application shall include documentation that the applicant has the qualified personnel required to develop, administer, and implement the proposed program

"(g) Contents.--

"(1) In general.--An application for a grant under this subpart shall contain the following:

"(A) A description of the need for the proposed program, including data on the number of children and youth of limited-English proficiency in the school or school district to be served and the characteristics of such children and youth, such as language spoken, dropout rates, proficiency in English and the native language, academic standing in relation to the English-proficient peers of such children and youth, and, where applicable, the recency of immigration.

"(B) A description of the program to be implemented and how such program's design--

"(i) relates to the linguistic and academic needs of the children and youth of limited-English proficiency to be served;

"(ii) is coordinated with other programs under this Act, the Goals 2000: Educate America Act and other Acts, as appropriate, in accordance with section 14306;

"(iii) involves the parents of the children and youth of limited-English proficiency to be served;

"(iv) ensures accountability in achieving high academic standards; and

"(v) promotes coordination of services for the children and youth of limited-English proficiency to be served and their families.

"(C) A description, if appropriate, of the applicant's collaborative activities with institutions of higher education, community-based organizations, local or State educational agencies, private schools, nonprofit organizations, or businesses in carrying out the proposed program.

"(D) An assurance that the applicant will not reduce the level of State and local funds that the applicant expends for bilingual education or special alternative instruction programs if the applicant receives an award under this subpart.

"(E) An assurance that the applicant will employ teachers in the proposed program that, individually or in combination, are proficient in English, including written, as well as oral, communication skills

"(F) A budget for grant funds.

"(2) Additional information.--Each application for a grant under section 7114 or 7115 shall--

"(A) describe--

"(i) current services the applicant provides to children and youth of limited-English proficiency;

"(ii) what services children and youth of limited-English proficiency will receive under the grant that such children or youth will not otherwise receive;

"(iii) how funds received under this subpart will be integrated with all other Federal, State, local, and private resources that may be used to serve children and youth of limited-English proficiency;

"(iv) specific achievement and school retention goals for the children and youth to be served by the proposed program and how progress toward achieving such goals will be measured; and

"(v) current family education programs if applicable; and

"(B) provide assurances that--

"(i) the program funded will be integrated with the overall educational program; and

"(ii) the application has been developed in consultation with an advisory council, the majority of whose members are parents and other representatives of the children and youth to be served in such programs.

(h) Approval of Applications --An application for a grant under this subpart may be approved only if the Secretary determines that--

"(1) the program will use qualified personnel, including personnel who are proficient in the language or languages used for instruction,

"(2) In designing the program for which application is made, the needs of children in nonprofit private elementary and secondary schools have been taken into account through consultation with appropriate private school officials and, consistent with the number of such children enrolled in such schools in the area to be served whose educational needs are of the type and whose language and grade levels are of a similar type to those which the program is intended to address, after consultation with appropriate private school officials, provision has been made for the participation of such children on a basis comparable to that provided for public school children;

"(3) student evaluation and assessment procedures in the program are valid, reliable, and fair for limited English proficient students, and that limited English proficient students who are disabled are identified and served in accordance with the requirements of the Individuals with Disabilities Education Act,

"(4) Federal funds made available for the project or activity will be used so as to supplement the level of State and local funds that, in the absence of such Federal funds, would have been expended for special programs for children of limited English proficient individuals and in no case to supplant such State and local funds, except that nothing in this paragraph shall be construed to preclude a local educational agency from using funds under this title for activities carried out under an order of a court of the United States or of any State respecting services to be provided such children, or to carry out a plan approved by the Secretary as adequate under title VI of the Civil Rights Act of 1964 with respect to services to be provided such children,

"(5) the assistance provided under the application will contribute toward building the capacity of the applicant to provide a program on a regular basis, similar to that proposed for assistance, which will be of sufficient size, scope, and quality to promise significant improvement in the education of students of limited-English proficiency, and that the applicant will have the resources and commitment to continue the program when assistance under this subpart is reduced or no longer available, and

"(6) the applicant provides for utilization of the State and national dissemination sources for program design and in dissemination of results and products

"(i) Priorities and Special Rules --

"(1) Priority.--The Secretary shall give priority to applications which provide for the development of bilingual proficiency both in English and another language for all participating students.

"(2) Special alternative instructional program.--Grants for special alternative instructional programs under this subpart shall not exceed 25 percent of the funds provided for any type of grant under any section, or of the total funds provided, under this subpart for any fiscal year.

"(3) Special rule.--Notwithstanding paragraph (2), the Secretary may award grants under this subpart for special alternative instructional programs if an applicant has demonstrated that the applicant cannot develop and implement a bilingual education program for the following reasons:

"(A) Where the diversity of the limited English proficient students' native languages and the small number of students speaking each respective language makes bilingual education impractical.

"(B) Where, despite documented efforts, the applicant has not been able to hire qualified instructional personnel who are able to communicate in the students' native language.

"(4) Consideration --In approving applications under this subpart, the Secretary shall give consideration to the degree to which the program for which assistance is sought involves the collaborative efforts of institutions of higher education, community-based organizations, the appropriate local and State educational agency, or businesses

"(5) Due consideration.--The Secretary shall give due consideration to applications providing training for personnel participating in or preparing to participate in the program which will assist such personnel in meeting State and local certification requirements and that, to the extent possible, describe how college or university credit will be awarded for such training

SEC 7117 INTENSIFIED INSTRUCTION

In carrying out this subpart, each grant recipient may intensify instruction for limited English proficient students by--

"(1) expanding the educational calendar of the school in which such student is enrolled to include programs before and after school and during the summer months,

"(2) expanding the use of professional and volunteer aids;

"(3) applying technology to the course of instruction; and

"(4) providing intensified instruction through supplementary instruction or activities, including educationally enriching extracurricular activities, during times when school is not routinely in session

"SEC. 7118. CAPACITY BUILDING.

"Each recipient of a grant under this subpart shall use the grant in ways that will build such recipient's capacity to continue to offer high-quality bilingual and special alternative education programs and services to children and youth of limited-English proficiency once Federal assistance is reduced or eliminated

"SEC. 7119. SUBGRANTS.

"A local educational agency that receives a grant under this subpart may, with the approval of the Secretary, make a subgrant to, or enter into a contract with, an institution of higher education, a nonprofit organization, or a consortium of such entities to carry out an approved program, including a program to serve out-of-school youth.

"SEC. 7120. PRIORITY ON FUNDING.

"The Secretary shall give priority to applications under this subpart that describe a program that--

"(1) enrolls a large percentage or large number of limited English proficient students,

"(2) takes into account significant increases in limited English proficient children and youth, including such children and youth in areas with low concentrations of such children and youth; and

"(3) ensures that activities assisted under this subpart address the needs of school systems of all sizes and geographic areas, including rural and urban schools.

"SEC. 7121. COORDINATION WITH OTHER PROGRAMS.

"In order to secure the most flexible and efficient use of Federal funds, any State receiving funds under this subpart shall coordinate its program with other programs under this Act, the Goals 2000. Educate America Act, and other Acts, as appropriate, in accordance with section 14306.

"SEC. 7122. PROGRAMS FOR NATIVE AMERICANS AND PUERTO RICO

"Programs authorized under this part that serve Native American children, Native Pacific Island children, and children in the Commonwealth of Puerto Rico, notwithstanding any other provision of this part, may include programs of instruction,

teacher training, curriculum development, evaluation, and testing designed for Native American children and youth learning and studying Native American languages and children and youth of limited-Spanish proficiency, except that one outcome of such

programs serving Native American children shall be increased English proficiency among such children.

"SEC. 7123. EVALUATIONS.

"(a) Evaluation.--Each recipient of funds under this subpart shall provide the Secretary with an evaluation, in the form prescribed by the Secretary, of such recipient's program every two years.

"(b) Use of Evaluation.--Such evaluation shall be used by a grant recipient--

"(1) for program improvement;

"(2) to further define the program's goals and objectives, and

"(3) to determine program effectiveness.

"(c) Evaluation Components.--Evaluations shall include--

"(1) how students are achieving the State student performance standards, if any, including data comparing children and youth of limited-English proficiency with nonlimited English proficient children and youth with regard to school retention, academic achievement, and gains in English (and, where applicable, native language) proficiency;

"(2) program implementation indicators that provide information for informing and improving program management and effectiveness, including data on appropriateness of curriculum in relationship to grade and course requirements, appropriateness of program management, appropriateness of the program's staff professional development, and appropriateness of the language of instruction;

"(3) program context indicators that describe the relationship of the activities funded under the grant to the overall school program and other Federal, State, or local programs serving children and youth of limited English proficiency; and

"(4) such other information as the Secretary may require.

"SEC. 7124. CONSTRUCTION.

"Nothing in this part shall be construed to prohibit a local educational agency from serving limited English proficient children and youth simultaneously with students with similar educational needs, in the same educational settings where appropriate.

"Subpart 2--Research, Evaluation, and Dissemination

"SEC 7131. AUTHORITY

"(a) In General --The Secretary is authorized to conduct data collection, dissemination, research, and ongoing program evaluation activities in accordance with the provisions of this subpart for the purpose of improving bilingual education and special alternative instruction programs for children and youth of limited English proficiency

"(b) Competitive Awards --Research and program evaluation activities carried out under this subpart shall be supported through competitive grants, contracts and cooperative agreements awarded institutions of higher education, nonprofit organizations, and State and local educational agencies.

"(c) Administration.--The Secretary shall conduct data collection, dissemination, and ongoing program evaluation activities authorized by this subpart through the Office of Bilingual Education and Minority Language Affairs

"SEC 7132. RESEARCH.

"(a) Administration --The Secretary shall conduct research activities authorized by this subpart through the Office of Educational Research and Improvement in coordination and collaboration with the Office of Bilingual Education and Minority Language Affairs

"(b) Requirements.--Such research activities--

"(1) shall have a practical application to teachers, counselors, paraprofessionals, school administrators, parents, and others involved in improving the education of limited English proficient students and their families;

"(2) may include research on effective instructional practices for multilingual classes, and on effective instruction strategies to be used by teachers and other staff who do not know the native language of a limited English proficient child or youth in their classrooms;

"(3) may include establishing (through the National Center for Education Statistics in consultation with experts in bilingual education, second language acquisition, and English-as-a-second-language) a common definition of 'limited

English proficient student' for purposes of national data collection; and

"(4) shall be administered by individuals with expertise in bilingual education and the needs of limited English proficient students and their families

"(c) Field-Initiated Research --

"(1) In general --The Secretary shall reserve not less than 5 percent of the funds made available to carry out this section for field-initiated research conducted by current or recent recipients of grants under subpart 1 or 2 who have received such grants within the previous five years. Such research may provide for longitudinal studies of students or teachers in bilingual education, monitoring the education of such students from entry in bilingual education through secondary school completion.

"(2) Applications.--Applicants for assistance under this subsection may submit an application for such assistance to the Secretary at the same time as applications are submitted under subpart 1 or 2. The Secretary shall complete a review of such applications on a timely basis to allow research and program grants to be coordinated when recipients are awarded two or more such grants.

"(d) Consultation --The Secretary shall consult with agencies and organizations that are engaged in bilingual education research and practice, or related research, and bilingual education researchers and practitioners to identify areas of study and activities to be funded under this section

"(e) Data Collection --The Secretary shall provide for the continuation of data collection on limited English proficient students as part of the data systems operated by the Department

"SEC 7133 ACADEMIC EXCELLENCE AWARDS.

"(a) Awards --The Secretary may make grants to, and enter into contracts and cooperative agreements with, State and local educational agencies, nonprofit organizations, and institutions of higher education to promote the adoption and implementation of bilingual education, special alternative instruction programs, and professional development programs that demonstrate promise of assisting children and youth of limited English proficiency to meet challenging State standards

"(b) Applications.--

"(1) In general --Each entity desiring an award under this section shall submit an application to the Secretary in such form, at such time, and containing such information and assurances as the Secretary may reasonably require

"(2) Peer review.--The Secretary shall use a peer review process, using effectiveness criteria that the Secretary shall establish, to review applications under this section

"(c) Use of Funds --Funds under this section shall be used to enhance the capacity of States and local education agencies to provide high quality academic programs for children and youth of limited English proficiency, which may include--

"(1) completing the development of such programs,

"(2) professional development of staff participating in bilingual education programs;

"(3) sharing strategies and materials, and

"(4) supporting professional networks.

"(d) Coordination.--Recipients of funds under this section shall coordinate the activities assisted under this section with activities carried out by comprehensive regional assistance centers assisted under part A of title XIII.

"SEC 7134. STATE GRANT PROGRAM

"(a) State Grant Program.--The Secretary is authorized to make an award to a State educational agency that demonstrates, to the satisfaction of the Secretary, that such agency, through such agency's own programs and other Federal education programs, effectively provides for the education of children and youth of limited English proficiency within the State.

"(b) Payments --The amount paid to a State educational agency under subsection

(a) shall not exceed 5 percent of the total amount awarded to local educational agencies within the State under subpart 1 for the previous fiscal year, except that in no case shall the amount paid by the Secretary to any State educational agency under this subsection for any fiscal year be less than \$100,000

"(c) Use of Funds.--

"(1) In general --A State educational agency shall use funds awarded under this section for programs authorized by this section to--

"(A) assist local educational agencies in the State with program design, capacity building, assessment of student performance, and program evaluation; and

"(B) collect data on the State's limited English proficient populations and the educational programs and services available to such populations.

"(2) Exception --States which do not, as of the date of enactment of the Improving America's Schools Act of 1994, have in place a system for collecting the data described in subparagraph (B) of paragraph (1) for all students in such State, are not required to meet the requirement of such subparagraph. In the event such State develops a system for collecting data on the educational programs and services available to all students in the State, then such State shall comply with the requirement of paragraph (1)(B).

"(3) Training.--The State educational agency may also use funds provided under this section for the training of State educational agency personnel in educational issues affecting limited English proficient children and youth.

"(4) Special rule.--Recipients of funds under this section shall not restrict the provision of services under this section to federally funded programs.

"(d) State Consultation.--A State educational agency receiving funds under this section shall consult with recipients of grants under this title and other individuals or organizations involved in the development or operation of programs serving limited English proficient children or youth to ensure that such funds are used in a manner consistent with the requirements of this title.

"(e) Applications.--A State educational agency desiring to receive funds under this section shall submit an application to the Secretary in such form, at such time, and containing such information and assurances as the Secretary may require.

"(f) Supplement Not Supplant.--Funds made available under this section for any fiscal year shall be used by the State educational agency to supplement and, to the extent practical, to increase to the level of funds that would, in the absence of such funds, be made available by the State for the purposes described in this section, and in no case to supplant such funds

"(g) Report to the Secretary.--State educational agencies receiving awards under this section shall provide for the annual submission of a summary report to the Secretary describing such State's use of such funds.

"SEC. 7135. NATIONAL CLEARINGHOUSE FOR BILINGUAL EDUCATION

"(a) Establishment.--The Secretary shall establish and support the operation of a National Clearinghouse for Bilingual Education, which shall collect, analyze, synthesize, and disseminate information about bilingual education and related programs.

"(b) Functions --The National Clearinghouse for Bilingual Education shall--

"(1) be administered as an adjunct clearinghouse of the Educational Resources Information Center Clearinghouses system of clearinghouses supported by the Office of Educational Research and Improvement;

"(2) coordinate its activities with Federal data and information clearinghouses and dissemination networks and systems,

"(3) develop a data base management and monitoring system for improving the operation and effectiveness of federally funded bilingual education programs; and

"(4) develop, maintain, and disseminate, through comprehensive regional assistance centers described in part A of title XIII if appropriate, a listing by geographical area of education professionals, parents, teachers, administrators, community members and others who are native speakers of languages other than English for use as a resource by local educational agencies and schools in the

development and implementation of bilingual education programs

"SEC 7136. INSTRUCTIONAL MATERIALS DEVELOPMENT.

"The Secretary may provide grants for the development, publication, and dissemination of high-quality instructional materials in Native American and Native Hawaiian languages and the language of Native Pacific Islanders and natives of the outlying areas for which instructional materials are not readily available. The Secretary shall give priority to the development of instructional materials in languages indigenous to the United States or the outlying areas. The Secretary shall also accord priority to applications for assistance under this section which provide for developing and evaluating materials in collaboration with activities assisted under subparts 1 and 2 and which are consistent with voluntary national content standards and challenging State content standards.

"Subpart 3--Professional Development

"SEC 7141. PURPOSE.

"The purpose of this subpart is to assist in preparing educators to improve the educational services for limited English proficient children and youth by supporting professional development programs and the dissemination of information on appropriate instructional practices for such children and youth.

"SEC 7142. TRAINING FOR ALL TEACHERS PROGRAM.

"(a) Purpose --The purpose of this section is to provide for the incorporation of courses and curricula on appropriate and effective instructional and assessment methodologies, strategies and resources specific to limited English proficient students into preservice and inservice professional development programs for teachers, pupil services personnel, administrators and other education personnel in order to prepare such individuals to provide effective services to limited English proficient students.

"(b) Authorization.--

"(1) Authority --The Secretary is authorized to award grants to institutions of higher education, local educational agencies, and State educational agencies or to nonprofit organizations which have entered into consortia arrangements with one of such institutions or agencies.

"(2) Duration --Each grant under this section shall be awarded for a period of not more than five years.

"(c) Permissible Activities --Activities conducted under this section may include the development of training programs in collaboration with other programs such as programs authorized under titles I and II of this Act, and under the Head Start Act.

SEC 7143. BILINGUAL EDUCATION TEACHERS AND PERSONNEL GRANTS

"(a) Purpose --The purpose of this section is to provide for--

"(1) preservice and inservice professional development for bilingual education teachers, administrators, pupil services personnel, and other educational personnel who are either involved in, or preparing to be involved in, the provision of educational services for children and youth of limited-English proficiency, and

"(2) national professional development institutes that assist schools or departments of education in institutions of higher education to improve the quality of professional development programs for personnel serving, preparing to serve, or who may serve, children and youth of limited-English proficiency.

"(b) Priority --The Secretary shall give priority in awarding grants under this section to institutions of higher education, in consortia with local or State educational agencies, that offer degree programs which prepare new bilingual education teachers in order to increase the availability of educators to provide high-quality education to limited English proficient students.

"(c) Authorization --

"(1) The Secretary is authorized to award grants for not more than five years to institutions of higher education which have entered into consortia arrangements with local or State educational agencies to achieve the purposes of this section.

"(2) The Secretary is authorized to make grants for not more than five years to State and local educational agencies for inservice professional development programs.

'SEC 7144 BILINGUAL EDUCATION CAREER LADDER PROGRAM

"(a) Purpose.--The purpose of this section is--

"(1) to upgrade the qualifications and skills of noncertified educational personnel, especially educational paraprofessionals, to meet high professional standards, including certification and licensure as bilingual education teachers and other educational personnel who serve limited English proficient students, through collaborative training programs operated by institutions of higher education and local and State educational agencies, and

"(2) to help recruit and train secondary school students as bilingual education teachers and other educational personnel to serve limited English proficient students.

"(b) Authorization.--

"(1) *In general.*--The Secretary is authorized to award grants for bilingual education career ladder programs to institutions of higher education applying in consortia with local or State educational agencies, which consortia may include community-based organizations or professional education organizations.

"(2) *Duration.*--Each grant under this section shall be awarded for a period of not more than five years.

"(c) *Permissive Activities.*--Grants awarded under this section may be used--

"(1) for the development of bilingual education career ladder program curricula appropriate to the needs of the consortium participants;

"(2) to provide assistance for stipends and costs related to tuition, fees and books for enrolling in courses required to complete the degree and certification requirements to become bilingual education teachers; and

"(3) for programs to introduce secondary school students to careers in bilingual education teaching that are coordinated with other activities assisted under this section.

"(d) *Special Consideration.*--The Secretary shall give special consideration to applications under this section which provide for--

"(1) participant completion of baccalaureate and master's degree teacher education programs, and certification requirements and may include effective employment placement activities;

"(2) development of teacher proficiency in English a second language, including demonstrating proficiency in the instructional use of English and, as appropriate, a second language in classroom contexts;

"(3) coordination with the Federal TRIO programs under chapter 1 of part A of title IV of the Higher Education Act of 1965, the National Mini Corps under subpart 1 of part F of title V of such Act, the Teacher Corps program under subpart 3 of part C of title V of such Act, and the National Community and Service Trust Act of 1993 programs, and other programs for the recruitment and retention of bilingual students in secondary and postsecondary programs to train to become bilingual educators; and

"(4) the applicant's contribution of additional student financial aid to participating students.

"SEC. 7145. GRADUATE FELLOWSHIPS IN BILINGUAL EDUCATION PROGRAM.

"(a) Authorization.--

"(1) *In general.*--The Secretary may award fellowships for masters, doctoral, and post-doctoral study related to instruction of children and youth of limited-English proficiency in such areas as teacher training, program administration, research and evaluation, and curriculum development, and for the support of dissertation research related to such study.

"(2) *Number.*--For fiscal year 1994 not less than 500 fellowships leading to a master's or doctorate degree shall be awarded under this section.

"(3) *Information.*--The Secretary shall include information on the operation and the number of fellowships awarded under the fellowship program in the evaluation required under section 7149.

"(b) *Fellowship Requirements.*--

"(1) *In general.*--Any person receiving a fellowship under this section shall agree to--

"(A) work in an activity related to the program or in an activity such as an activity authorized under this part, including work as a bilingual education teacher, for a period of time equivalent to the period of time during which such person receives assistance under this section; or

"(B) repay such assistance.

"(2) *Regulations.*--The Secretary shall establish in regulations such terms and conditions for such agreement as the Secretary deems reasonable and necessary and may waive the requirement of paragraph (1) in extraordinary circumstances.

"(c) *Priority.*--In awarding fellowships under this section the Secretary may give priority to institutions of higher education that demonstrate experience in assisting fellowship recipients find employment in the field of bilingual education.

"SEC 7146. APPLICATION.

"(a) *In General.*--

"(1) *Secretary.*--To receive an award under this subpart, an eligible entity shall submit an application to the Secretary at such time, in such form, and containing such information as the Secretary may require.

"(2) *Consultation and assessment.*--Each such application shall contain a description of how the applicant has consulted with, and assessed the needs of, public and private schools serving children and youth of limited-English proficiency to determine such school's need for, and the design of, the program for which funds are sought.

"(3) Special rule.--(A) An application for a grant under subsection (a) from an applicant who proposes to conduct a master's- or doctoral-level program with funds received under this section shall provide an assurance that such program will include, as a part of the program, a training practicum in a local school program serving children and youth of limited-English proficiency

"(B) A recipient of a grant under subsection (a) may waive the requirement of a training practicum for a degree candidate with significant experience in a local school program serving children and youth of limited-English proficiency.

"(4) State educational agency.--An eligible entity, with the exception of schools funded by the Bureau of Indian Affairs, shall submit a copy of the application under this subsection to the State educational agency

"(b) State Review and Comments.--

"(1) Deadline.--The State educational agency, not later than 45 days after receipt of such application copy, shall review the application and transmit such application to the Secretary.

"(2) Comments.--(A) Regarding any application submitted under this subpart, the State educational agency shall--

"(i) submit to the Secretary written comments regarding all such applications, and

"(ii) submit to each eligible entity the comments that pertain to such entity

"(B) For purposes of this subpart, comments shall address how the eligible entity--

"(i) will further the academic achievement of limited English proficient students served pursuant to a grant received under this subpart;

and

"(ii) how the grant application is consistent with the State plan submitted under section 1111

"(3) Waiver --Notwithstanding paragraphs (1) and (2), the Secretary is authorized to waive the review requirement if a State educational agency can demonstrate that such review requirement may impede such agency's ability to fulfill the requirements of participation in the State grant program, particularly such agency's data collection efforts and such agency's ability to provide technical assistance to local educational agencies not receiving funds under this Act.

"(c) Eligible Entity Comments.--An eligible entity may submit to the Secretary comments that address the comments submitted by the State educational agency

"(d) Comment Consideration.--In making awards under this subpart the Secretary shall take into consideration comments made by a State educational agency.

"(e) Special Rule --

"(1) Outreach and technical assistance.--The Secretary shall provide for outreach and technical assistance to institutions of higher education eligible for assistance under title III of the Higher Education Act of 1965 and institutions of higher education that are operated or funded by the Bureau of Indian Affairs to facilitate the participation of such institutions in activities under this part.

"(2) Distribution rule.--In making awards under this subpart, the Secretary, consistent with subsection (d), shall ensure adequate representation of Hispanic-serving institutions that demonstrate competence and experience in the programs and activities authorized under this subpart and are otherwise qualified.

"SEC 7147 PROGRAM REQUIREMENTS

"Activities conducted under this subpart shall assist educational personnel in meeting State and local certification requirements for bilingual education and, wherever possible, shall lead toward the awarding of college or university credit.

"SEC. 7148 STIPENDS.

"The Secretary shall provide for the payment of such stipends (including allowances for subsistence and other expenses for such persons and their dependents), as the Secretary determines to be appropriate, to persons participating in training programs under this subpart.

"SEC 7149 PROGRAM EVALUATIONS

"Each recipient of funds under this subpart shall provide the Secretary with an evaluation of the program assisted under this subpart every two years. Such evaluation shall include data on--

"(1) post-program placement of persons trained in a program assisted under this subpart;

"(2) how the training relates to the employment of persons served by the program,

"(3) program completion; and

"(4) such other information as the Secretary may require.

"SEC. 7150 USE OF FUNDS FOR SECOND LANGUAGE COMPETENCE

"Awards under this subpart may be used to develop a program participant's competence in a second language for use in instructional programs.

"Subpart 4--Transition

"SEC. 7161. SPECIAL RULE.

"Notwithstanding any other provision of law, no recipient of a grant under title VII of this Act (as such title was in effect on the day preceding the date of enactment of the Improving America's Schools Act of 1994) shall be eligible for fourth- and fifth-year renewals authorized by section 7021(d)(1)(C) of such title (as such section was in effect on the day preceding the date of enactment of such Act).

"PART B--FOREIGN LANGUAGE ASSISTANCE PROGRAM

"SEC. 7201. SHORT TITLE

"This part may be cited as the 'Foreign Language Assistance Act of 1994'.

"SEC. 7202. FINDINGS.

"The Congress finds as follows:

"(1) Foreign language proficiency is crucial to our Nation's economic competitiveness and national security. Significant improvement in the quantity and quality of foreign language instruction offered in our Nation's elementary and secondary schools is necessary.

"(2) All Americans need a global perspective. To understand the world around us, we must acquaint ourselves with the languages, cultures, and history of other nations.

"(3) Proficiency in two or more languages should be promoted for all American students. Multilingualism enhances cognitive and social growth, competitiveness in the global marketplace, national security, and understanding of diverse people and cultures.

"(4) The United States lags behind other developed countries in offering foreign language study to elementary and secondary school students.

"(5) Four out of five new jobs in the United States are created from foreign trade.

"(6) The optimum time to begin learning a second language is in elementary school, when children have the ability to learn and excel in several foreign language acquisition skills, including pronunciation, and when children are most open to appreciating and valuing a culture other than their own.

"(7) Foreign language study can increase children's capacity for critical and creative thinking skills and children who study a second language show greater cognitive development in areas such as mental flexibility, creativity, tolerance, and higher order thinking skills.

"(8) Children who have studied a foreign language in elementary school achieve expected gains and score higher on standardized tests of reading, language arts, and mathematics than children who have not studied a foreign language.

"SEC. 7203. PROGRAM AUTHORIZED.

"(a) Program Authority.--

"(1) In general.--The Secretary shall make grants, on a competitive basis, to State educational agencies or local educational agencies to pay the Federal share of the cost of innovative model programs providing for the establishment, improvement or expansion of foreign language study for elementary and secondary school students.

"(2) Duration.--Each grant under paragraph (1) shall be awarded for a period of three years.

"(b) Requirements.--

"(1) Grants to state educational agencies.--In awarding a grant under subsection (a) to a State educational agency, the Secretary shall support programs that promote systemic approaches to improving foreign language learning in the State.

"(2) Grants to local educational agencies.--In awarding a grant under subsection (a) to a local educational agency, the Secretary shall support programs that--

"(A) show the promise of being continued beyond the grant period;

"(B) demonstrate approaches that can be disseminated and duplicated in other local educational agencies; and

"(C) may include a professional development component.

"(c) Federal Share --

"(1) In general --The Federal share for each fiscal year shall be 50 percent.

"(2) Waiver --The Secretary may waive the requirement of paragraph (1) for any local educational agency which the Secretary determines does not have adequate resources to pay the non-Federal share of the cost of the activities assisted under this part.

"(3) Special rule.--Not less than three-fourths of the funds appropriated under section 7206 shall be used for the expansion of foreign language learning in the elementary grades.

"(4) Reservation.--The Secretary may reserve not more than 5 percent of funds appropriated under section 7206 to evaluate the efficacy of programs under this part.

"SEC 7204 APPLICATIONS

"(a) In General --Any State educational agency or local educational agency desiring a grant under this part shall submit an application to the Secretary at such time, in such form, and containing such information and assurances as the Secretary may require

"(b) Special Consideration --The Secretary shall give special consideration to applications describing programs that--

"(1) include intensive summer foreign language programs for professional development,

"(2) link non-native English speakers in the community with the schools in order to promote two-way language learning; or

"(3) promote the sequential study of a foreign language for students, beginning in elementary schools

"SEC. 7205 ELEMENTARY SCHOOL FOREIGN LANGUAGE INCENTIVE PROGRAM

"(a) Incentive Payments.--From amounts appropriated under section 7206 the Secretary shall make an incentive payment for each fiscal year to each public elementary school that provides to students attending such school a program designed to lead to communicative competency in a foreign language.

"(b) Amount --The Secretary shall determine the amount of the incentive payment under subsection (a) for each public elementary school for each fiscal year on the basis of the number of students participating in a program described in such subsection at such school for such year compared to the total number of such students at all such schools in the United States for such year

"(c) Requirement --The Secretary shall consider a program to be designed to lead to communicative competency in a foreign language if such program is comparable to a program that provides not less than 45 minutes of instruction in a foreign language not less than four days per week throughout an academic year

"SEC 7206. AUTHORIZATION OF APPROPRIATIONS.

"There are authorized to be appropriated \$35,000,000 for the fiscal year 1995, and such sums as may be necessary for each of the four succeeding fiscal years, to carry out this part, of which not more than \$20,000,000 may be used in each fiscal year to carry out section 7205

"PART C--EMERGENCY IMMIGRANT EDUCATION PROGRAM

"SEC 7301. FINDINGS AND PURPOSE.

"(a) Findings.--The Congress finds that--

"(1) the education of our Nation's children and youth is one of the most sacred government responsibilities,

"(2) local educational agencies have struggled to fund adequately education services,

"(3) in the case of Plyler v. Doe, the Supreme Court held that States have a responsibility under the Equal Protection Clause of the Constitution to educate all children, regardless of immigration status, and

"(4) immigration policy is solely a responsibility of the Federal Government.

"(b) Purpose --The purpose of this part is to assist eligible local educational agencies that experience unexpectedly large increases in their student population due to immigration to--

"(1) provide high-quality instruction to immigrant children and youth; and

"(2) help such children and youth--

"(A) with their transition into American society, and

"(B) meet the same challenging State performance standards expected of all children and youth

"SEC 7302 STATE ADMINISTRATIVE COSTS.

"For any fiscal year, a State educational agency may reserve not more than 1.5 percent of the amount allocated to such agency under section 7304 to pay the costs of performing such agency's administrative functions under this part.

"SEC 7303. WITHHOLDING.

"Whenever the Secretary, after providing reasonable notice and opportunity for a hearing to any State educational agency, finds that there is a failure to meet the requirement of any provision of this part, the Secretary shall notify that agency that further payments will not be made to the agency under this part, or in the discretion of the Secretary, that the State educational agency shall not make further payments under this part to specified local educational agencies whose actions cause or are involved in such failure until the Secretary is satisfied that there is no longer any such failure to comply. Until the Secretary is so satisfied, no further payments shall be made to the State educational agency under this part, or payments by the State educational agency

under this part shall be limited to local educational agencies whose actions did not cause or were not involved in the failure, as the case may be.

"SEC. 7304. STATE ALLOCATIONS.

"(a) Payments.--The Secretary shall, in accordance with the provisions of this section, make payments to State educational agencies for each of the fiscal years 1995 through 1999 for the purpose set forth in section 7301(b).

"(b) Allocations.--

"(1) In general.--Except as provided in subsections (c) and (d), of the amount appropriated for each fiscal year for this part, each State participating in the program assisted under this part shall receive an allocation equal to the proportion of such State's number of immigrant children and youth who are enrolled in public elementary or secondary schools under the jurisdiction of each local educational agency described in paragraph (2) within such State, and in nonpublic elementary or secondary schools within the district served by each such local educational agency, relative to the total number of immigrant children and youth so enrolled in all the States participating in the program assisted under this part.

"(2) Eligible local educational agencies.--The local educational agencies referred to in paragraph (1) are those local educational agencies in which the number of immigrant children and youth who are enrolled in public elementary or secondary schools under the jurisdiction of such agencies, and in nonpublic elementary or secondary schools within the districts served by such agencies, during the fiscal year for which the payments are to be made under this part, is equal to--

"(A) at least 500; or

"(B) at least 3 percent of the total number of students enrolled in such public or nonpublic schools during such fiscal year, whichever number is less.

"(c) Determinations of Number of Children and Youth.--

"(1) In general.--Determinations by the Secretary under this section for any period with respect to the number of immigrant children and youth shall be made on the basis of data or estimates provided to the Secretary by each State educational agency in accordance with criteria established by the Secretary, unless the Secretary determines, after notice and opportunity for a hearing to the affected State educational agency, that such data or estimates are clearly erroneous.

"(2) Special rule.--No such determination with respect to the number of immigrant children and youth shall operate because of an underestimate or overestimate to deprive any State educational agency of the allocation under this section that such State would otherwise have received had such determination been made on the basis of accurate data.

"(d) Reallocation.--Whenever the Secretary determines that any amount of a payment made to a State under this part for a fiscal year will not be used by such State for carrying out the purpose for which the payment was made, the Secretary shall make such amount available for carrying out such purpose to one or more other States to the extent the Secretary determines that such other States will be able to use such additional amount for carrying out such purpose. Any amount made available to a State from any appropriation for a fiscal year in accordance with the preceding sentence shall, for purposes of this part, be regarded as part of such State's payment

(as determined under subsection (b)) for such year, but shall remain available until the end of the succeeding fiscal year.

"(e) Reservation of Funds.--

"(1) In general.--Notwithstanding any other provision of this part, if the amount appropriated to carry out this part exceeds \$50,000,000 for a fiscal year, a State educational agency may reserve not more than 20 percent of such agency's payment under this part for such year to award grants, on a competitive basis, to local educational agencies within the State as follows:

"(A) At least one-half of such grants shall be made available to eligible local educational agencies (as described in subsection (b)(2)) within the State with the highest numbers and percentages of immigrant children and youth.

"(B) Funds reserved under this paragraph and not made available under subparagraph (A) may be distributed to local educational agencies within the State experiencing a sudden influx of immigrant children and youth which are otherwise not eligible for assistance under this part

"(2) Use of grant funds.--Each local educational agency receiving a grant under paragraph (1) shall use such grant funds to carry out the activities described in section 7307.

"(3) Information.--Local educational agencies with the highest number of immigrant children and youth receiving funds under paragraph (1) may make information available on serving immigrant children and youth to local educational agencies in the State with sparse numbers of such children.

"SEC. 7305 STATE APPLICATIONS.

"(a) Submission --No State educational agency shall receive any payment under this part for any fiscal year unless such agency submits an application to the Secretary at such time, in such manner, and containing or accompanied by such information, as

the Secretary may reasonably require. Each such application shall--

"(1) provide that the educational programs, services, and activities for which payments under this part are made will be administered by or under the supervision of the agency;

"(2) provide assurances that payments under this part will be used for purposes set forth in sections 7301 and 7307, including a description of how local educational agencies receiving funds under this part will use such funds to meet such purposes and will coordinate with other programs assisted under this Act, the Goals 2000 Educate America Act, and other Acts as appropriate;

"(3) provide an assurance that local educational agencies receiving funds under this part will coordinate the use of such funds with programs assisted under part A or title I;

"(4) provide assurances that such payments, with the exception of payments reserved under section 7304(e), will be distributed among local educational agencies within that State on the basis of the number of immigrant children and youth counted with respect to each such local educational agency under section 7304(b)(1);

"(5) provide assurances that the State educational agency will not finally disapprove in whole or in part any application for funds received under this part without first affording the local educational agency submitting an application for such funds reasonable notice and opportunity for a hearing;

"(6) provide for making such reports as the Secretary may reasonably require to perform the Secretary's functions under this part;

"(7) provide assurances--

"(A) that to the extent consistent with the number of immigrant children and youth enrolled in the nonpublic elementary or secondary schools within the district served by a local educational agency, such agency, after consultation with appropriate officials of such schools, shall provide for the benefit of such children and youth secular, neutral, and nonideological services, materials, and equipment necessary for the education of such children and youth,

"(B) that the control of funds provided under this part to any materials, equipment, and property repaired, remodeled, or constructed with those funds shall be in a public agency for the uses and purposes provided in this part, and a public agency shall administer such funds and property, and

"(C) that the provision of services pursuant to this paragraph shall be provided by employees of a public agency or through contract by such public agency with a person, association, agency, or corporation who or which, in the provision of such services, is independent of such nonpublic elementary or secondary school and of any religious organization, and such employment or contract shall be under the control and supervision of such public agency, and the funds provided under this paragraph shall not be commingled with State or local funds;

"(8) provide that funds reserved under subsection (e) of section 7304 be awarded on a competitive basis based on merit and need in accordance with such subsection; and

"(9) provide an assurance that State and local educational agencies receiving funds under this part will comply with the requirements of section 1120(b).

"(b) Application Review --

"(1) In general --The Secretary shall review all applications submitted pursuant to this section by State educational agencies.

"(2) Approval --The Secretary shall approve any application submitted by a State educational agency that meets the requirements of this section.

"(3) Disapproval --The Secretary shall disapprove any application submitted by a State educational agency which does not meet the requirements of this section, but shall not finally disapprove an application except after providing reasonable notice, technical assistance, and an opportunity for a hearing to the State

"SEC 7306 ADMINISTRATIVE PROVISIONS.

"(a) Notification of Amount.--The Secretary, not later than June 1 of each year, shall notify each State educational agency that has an application approved under section 7305 of the amount of such agency's allocation under section 7304 for the succeeding year.

"(b) Services to Children Enrolled in Nonpublic Schools.--If by reason of any provision of law a local educational agency is prohibited from providing educational services for children enrolled in elementary and secondary nonpublic schools, as required by section 7305(a)(7), or if the Secretary determines that a local educational agency has substantially failed or is unwilling to provide for the participation on an equitable basis of children enrolled in such schools, the Secretary may waive such requirement and shall arrange for the provision of services, subject to the requirements of this part, to such children. Such waivers shall be subject to consultation, withholding, notice, and judicial review requirements in accordance with the provisions of title I.

"SEC. 7307. USES OF FUNDS.

"(a) Use of Funds.--Funds awarded under this part shall be used to pay for enhanced instructional opportunities for immigrant children and youth, which may include--

"(1) family literacy, parent outreach, and training activities designed to assist parents to become active participants in the education of their children;

"(2) salaries of personnel, including teacher aides who have been specifically trained, or are being trained, to provide services to immigrant children and youth;

"(3) tutorials, mentoring, and academic or career counseling for immigrant children and youth;

"(4) identification and acquisition of curricular materials, educational software, and technologies to be used in the program;

"(5) basic instructional services which are directly attributable to the presence in the school district of immigrant children, including the costs of providing additional classroom supplies, overhead costs, costs of construction, acquisition or rental of space, costs of transportation, or such other costs as are directly attributable to such additional basic instructional services; and

"(6) such other activities, related to the purposes of this part, as the Secretary may authorize.

"(b) Consortia --A local educational agency that receives a grant under this part may collaborate or form a consortium with one or more local educational agencies, institutions of higher education, and nonprofit organizations to carry out the program described in an application approved under this part.

"(c) Subgrants --A local educational agency that receives a grant under this part may, with the approval of the Secretary, make a subgrant to, or enter into a contract with, an institution of higher education, a nonprofit organization, or a consortium of

such entities to carry out a program described in an application approved under this part, including a program to serve out-of-school youth.

"(d) Construction.--Nothing in this part shall be construed to prohibit a local educational agency from serving immigrant children simultaneously with students with similar educational needs, in the same educational settings where appropriate.

"SEC. 7308. REPORTS.

"(a) Biennial Report.--Each State educational agency receiving funds under this part shall submit, once every two years, a report to the Secretary concerning the expenditure of funds by local educational agencies under this part. Each local educational agency receiving funds under this part shall submit to the State educational agency such information as may be necessary for such report.

"(b) Report to Congress.--The Secretary shall submit, once every two years, a report to the appropriate committees of the Congress concerning programs assisted under this part in accordance with section 14701.

"SEC. 7309. AUTHORIZATION OF APPROPRIATIONS.

"For the purpose of carrying out this part, there are authorized to be appropriated \$100,000,000 for fiscal year 1995 and such sums as may be necessary for each of the four succeeding fiscal years.

"PART D--ADMINISTRATION

"SEC. 7401. RELEASE TIME.

"The Secretary shall allow professional development programs funded under part A to use funds provided under part A for professional release time to enable individuals to participate in programs assisted under part A

"SEC 7402. EDUCATION TECHNOLOGY.

"Funds made available under part A may be used to provide for the acquisition or development of education technology or instructional materials, including authentic materials in languages other than English, access to and participation in electronic networks for materials, training and communications, and incorporation of such resources in curricula and programs such as those funded under this title.

"SEC 7403. NOTIFICATION.

"The State educational agency, and when applicable, the State board for postsecondary education, shall be notified within three working days of the date an award under part A is made to an eligible entity within the State.

"SEC. 7404 CONTINUED ELIGIBILITY.

"Entities receiving grants under this title shall remain eligible for grants for subsequent activities which extend or expand and do not duplicate those activities supported by a previous grant under this title. In

considering applications for grants under this title, the Secretary shall take into consideration the applicant's record of accomplishments under previous grants under this title.

' SEC 7405. COORDINATIONS AND REPORTING REQUIREMENTS.

"(a) Coordination With Related Programs.--In order to maximize Federal efforts aimed at serving the educational needs of children and youth of limited-English proficiency, the Secretary shall coordinate and ensure close cooperation with other programs serving language-minority and limited English proficient students that are administered by the Department and other agencies. The Secretary shall consult with the Secretary of Labor, the Secretary of Health and Human Services, the Secretary of Agriculture, the Attorney General and the heads of other relevant agencies to identify and eliminate barriers to appropriate coordination of programs that affect language-minority and limited English proficient students and their families. The Secretary shall provide for continuing consultation and collaboration, between the Office and relevant programs operated by the Department, including programs under title I and other programs under this Act, in planning, contracts, providing joint technical assistance, providing joint field monitoring activities and in other relevant activities to ensure effective program coordination to provide high quality education opportunities to all language-minority and limited English proficient students.

"(b) Data.--The Secretary shall, to the extent feasible, ensure that all data collected by the Department shall include the collection and reporting of data on limited English proficient students.

"(c) Publication of Proposals.--The Secretary shall publish and disseminate all requests for proposals for programs funded under part A.

"(d) Report --The Director shall prepare and, not later than February 1 of every other year, shall submit to the Secretary and to the Committee on Labor and Human Resources of the Senate and to the Committee on Education and Labor of the House of Representatives a report on--

"(1) the activities carried out under this title and the effectiveness of such activities in improving the education provided to limited English proficient children and youth;

"(2) a critical synthesis of data reported by the States pursuant to section 7134;

"(3) an estimate of the number of certified bilingual education personnel in the field and an estimate of the number of bilingual education teachers which will be needed for the succeeding five fiscal years,

"(4) the major findings of research carried out under this title, and

"(5) recommendations for further developing the capacity of our Nation's schools to educate effectively limited English proficient students.

"PART E--GENERAL PROVISIONS

' SEC 7501 DEFINITIONS; REGULATIONS.

"Except as otherwise provided, for purposes of this title--

"(1) Bilingual education program.--The term 'bilingual education program' means an educational program for limited English proficient students that--

"(A) makes instructional use of both English and a student's native language,

"(B) enables limited English proficient students to achieve English proficiency and academic mastery of subject matter content and higher order skills, including critical thinking, so as to meet age-appropriate grade-promotion and graduation standards in concert with the National Education Goals,

"(C) may also develop the native language skills of limited English proficient students, or ancestral languages of American Indians, Alaska Natives, Native Hawaiians and native residents of the outlying areas; and

"(D) may include the participation of English-proficient students if such program is designed to enable all enrolled students to become proficient in English and a second language.

"(2) Children and youth --The term 'children and youth' means individuals aged 3 through 21.

"(3) Community-based organization.--The term 'community-based organization' means a private nonprofit organization of demonstrated effectiveness or Indian tribe or tribally sanctioned educational authority which is representative of a community or significant segments of a community and which provides educational or related services to individuals in the community. Such term includes Native Hawaiian organizations including Native Hawaiian Educational Organizations as such term is defined in section 4009 of the Augustus F Hawkins-Robert T Stafford Elementary and Secondary School Improvement Amendments of 1988 (20 U.S.C. 4901 et seq), as such Act was in effect on the day preceding the date of enactment of the Improving America's Schools Act of 1994.

"(4) Community college --The term 'community college' means an institution of higher education as defined in section 1201(a) of the Higher Education Act of 1965 which provides not less than a two-year program which is acceptable for full credit toward a bachelor's degree, including institutions receiving assistance under the Tribally Controlled Community College Assistance Act of 1978.

"(5) Director.--The term 'Director' means the Director of the Office of Bilingual Education and Minority Languages Affairs established under section 210 of the Department of Education Organization Act.

"(6) Family education program.--(A) The term 'family education program' means a bilingual education or special alternative instructional program that--

"(i) is designed--

"(I) to help limited English proficient adults and out-of-school youths achieve proficiency in the English language; and

"(II) to provide instruction on how parents and family members can facilitate the educational achievement of their children;

"(ii) when feasible, uses instructional programs such as the models developed under the Even Start Family Literacy Programs, which promote adult literacy and train parents to support the educational growth of their children and the Parents as Teachers Program and the Home Instruction Program for Preschool Youngsters; and

"(iii) gives preference to participation by parents and immediate family members of children attending school.

"(B) Such term may include programs that provide instruction to facilitate higher education and employment outcomes.

"(7) Immigrant children and youth.--The term 'immigrant children and youth' means individuals who--

"(A) are aged 3 through 21;

"(B) were not born in any State; and

"(C) have not been attending one or more schools in any one or more States for more than three full academic years.

"(8) Limited English proficiency and limited English proficient.--The terms 'limited English proficiency' and 'limited English proficient', when used with reference to an individual, mean an individual--

"(A) who--

"(i) was not born in the United States or whose native language is a language other than English and comes from an environment where a language other than English is dominant; or

"(ii) is a Native American or Alaska Native or who is a native resident of the outlying areas and comes from an environment where a language other than English has had a significant impact on such individual's level of English language proficiency; or

"(iii) is migratory and whose native language is other than English and comes from an environment where a language other than English is dominant; and

"(B) who has sufficient difficulty speaking, reading, writing, or understanding the English language and whose difficulties may deny such individual the opportunity to learn successfully in classrooms where the language of instruction is English or to participate fully in our society.

"(9) Native American and native American language.--The terms 'Native American' and 'Native American language' shall have the same meaning given such terms in section 103 of the Native American Languages Act of 1990

"(10) Native Hawaiian or native American Pacific Islander native language educational organization.--The term 'Native Hawaiian or Native American Pacific Islander native language educational organization' means a nonprofit organization with a majority of its governing board and employees consisting of fluent speakers of the traditional Native American languages used in their educational programs and with not less than five years successful experience in providing educational services in traditional Native American languages.

"(11) Native language.--The term 'native language', when used with reference to an individual of limited-English proficiency, means the language normally used by such individual, or in the case of a child or youth, the language normally used by the parents of the child or youth.

"(12) Office.--The term 'Office' means the Office of Bilingual Education and Minority Languages Affairs.

"(13) Other programs for persons of limited-English proficiency.--The term 'other programs for persons of limited-English proficiency' means any programs administered by the Secretary that serve persons of limited-English proficiency.

"(14) Paraprofessional.--The term 'paraprofessional' means an individual who is employed in preschool, elementary or secondary school under the supervision of a certified or licensed teacher, including individuals employed in bilingual education, special education and migrant education

"(15) Special alternative instructional program.--The term 'special alternative instructional program' means an educational program for limited English proficient students that--

"(A) utilizes specially designed English language curricula and services but does not use the student's native language for instructional purposes;

"(B) enables limited English proficient students to achieve English proficiency and academic mastery of subject matter content and higher order skills, including critical thinking so as to meet age-appropriate grade-promotion and graduation standards in concert with the National Education Goals; and

"(C) is particularly appropriate for schools where the diversity of the limited English proficient students' native languages and the small number of students speaking each respective language makes bilingual education impractical and where there is a critical shortage of bilingual education teachers

"SEC. 7502. REGULATIONS AND NOTIFICATION

"(a) Regulation Rule.--In developing regulations under this title, the Secretary shall consult with State and local educational agencies, organizations representing limited English proficient individuals, and organizations representing teachers and other personnel involved in bilingual education.

"(b) Parental Notification.--

"(1) In general --Parents of children and youth participating in programs assisted under part A shall be informed of--

"(A) a student's level of English proficiency, how such level was assessed, the status of a student's academic achievement and the implications of a student's educational strengths and needs for age and grade appropriate academic attainment, promotion, and graduation;

"(B) what programs are available to meet the student's educational strengths and needs and how the programs differ in content and instructional goals, and in the case of a student with a disability, how the program meets the objectives of a student's individualized education program, and

"(C) the instructional goals of the bilingual education or special alternative instructional program, and how the program will specifically help the limited English proficient student acquire English and meet age-appropriate standards for grade-promotion and graduation, including--

"(i) the benefits, nature, and past academic results of the bilingual educational program and of the instructional alternatives; and

"(ii) the reasons for the selection of their child as being in need of bilingual education

"(2) Option to decline --(A) Such parents shall also be informed that such parents have the option of declining enrollment of their children and youth in such programs and shall be given an opportunity to so decline if such parents so choose.

"(B) A local educational agency shall not be relieved of any of its obligations under title VI of the Civil Rights Act of 1964 because parents choose not to enroll their children in bilingual education programs.

"(3) Receipt of information --Such parents shall receive, in a manner and form understandable to such parents, including, if necessary and to the extent feasible, in the native language of such parents, the information required by this subsection. At a minimum, such parents shall receive--

"(A) timely information about projects funded under part A; and

"(B) if the parents of participating children so desire, notice of opportunities for regular meetings for the purpose of formulating and responding to recommendations from such parents

"(4) Special rule.--Students shall not be admitted to or excluded from any federally assisted education program merely on the basis of a surname or language-minority status

ANEXO 3

Lau v. Nichols (excerpts)

414 U.S. 563 (1974)

When children arrive in school with little or no English-speaking ability, "sink or swim" instruction is a violation of their civil rights, according to the U.S. Supreme Court in this 1974 decision. Lau remains the major precedent regarding the educational rights of language minorities, although it is grounded in statute (Title VI of the Civil Rights Act of 1964), rather than in the U.S. Constitution. At issue was whether school administrators may meet their obligation to provide equal educational opportunities merely by treating all students the same, or whether they must offer special help for students unable to understand English. Lower federal courts had absolved the San Francisco school district of any responsibility for minority children's "language deficiency." But a unanimous Supreme Court disagreed. Its ruling opened a new era in federal civil rights enforcement under the so-called "Lau Remedies." The decision was delivered by Justice William O. Douglas on January 21, 1974.

This class suit brought by non-English-speaking Chinese students against officials responsible for the operation of the San Francisco Unified School District seeks relief against the unequal educational opportunities which are alleged to violate, *inter alia*, the Fourteenth Amendment. No specific remedy is urged upon us. Teaching English to the students of Chinese ancestry who do not speak the language is one choice. Giving instructions to this group in Chinese is another. There may be others. Petitioner asks only that the Board of Education be directed to apply its expertise to the problem and rectify the situation.

The Court of Appeals reasoned that "every student brings to the starting line of his educational career different advantages and disadvantages caused in part by social, economic and cultural background, created and continued completely apart from any contribution by the school system"; 83 F.2d 497. Yet in our view the case may not be so easily decided. This is a public school system of California and §sect, 71 of the California Education Code states that "English shall be the basic language of instruction in all schools." That section permits a school district to determine "when and under what circumstances instruction may be given bilingually." That section also states as "the policy of the state" to insure "the mastery of English by all pupils in the schools." And bilingual instruction is authorized "to the extent that it does not interfere with the systematic, sequential, and regular instruction of all pupils in the English language."

Moreover, §sect, 8573 of the Education Code provides that no pupil shall receive a diploma of graduation from grade 12 who has not met the standards of proficiency in "English," as well as other prescribed subjects. Moreover, by §sect; 12101 of the Education Code (Supp. 1973) children between the ages of six and 16 years are (with exceptions not material here) "subject to compulsory full-time education."

Under these state-imposed standards there is no equality of treatment merely by providing students with the same facilities, textbooks, teachers, and curriculum, for students who do not understand English are effectively foreclosed from any meaningful education. Basic English skills are at the very core of what these public schools teach. Imposition of a requirement that, before a child can effectively participate in the educational program, he must already have acquired those basic skills is to make a mockery of public education. We know that those who do not understand English are certain to find their classroom experiences wholly incomprehensible and in no way meaningful.

We do not reach the Equal Protection Clause argument which has been advanced but rely solely on §sect, 601 of the Civil Rights Act of 1964 to reverse the Court of Appeals. That section bans discrimination based "on the ground of race, color, or national origin," in "any program or activity receiving federal financial assistance." The school district involved in this litigation receives large amounts of federal financial assistance. The Department of Health, Education, and Welfare (H.E.W.), which has authority to promulgate regulations prohibiting discrimination in federally assisted school systems, in 1968 issued one guideline that "[s]chool systems are responsible for assuring that students of a particular race, color, or national origin are not denied the opportunity to obtain the education generally obtained by other students in the system." In 1970 H.E.W. made the guidelines more specific, requiring school districts that were federally funded "to rectify the language deficiency in order to open" the instruction to students who had "linguistic deficiencies."

It seems obvious that the *Chinese-speaking minority* receive fewer benefits than the English-speaking majority from respondents' school system, which denies them a meaningful opportunity to participate in the educational program – all earmarks of the discrimination banned by the Regulations. In 1970 H.E.W. issued clarifying guidelines which include the following:

Where inability to speak and understand the English language excludes *national origin-minority group* children from effective participation in the educational program offered by a school district, the district must take affirmative steps to rectify the language deficiency in order to open its instructional program to these students.

Any ability grouping or tracking system employed by the school system to deal with the special language skill needs of *national origin-minority group* children must be designed to meet such language skill needs as soon as possible and must not operate as an educational deadend or permanent track.

Respondent school district contractually agreed to "comply with Title VI of the Civil Rights Act of 1964 . . . and all requirements imposed by or pursuant to the Regulation" of H.E.W. which are "issued pursuant to that title . . ." and also immediately to "take any measures necessary to effectuate this agreement." The Federal Government has power to fix the terms on which its money allotments to the States shall be disbursed. Whatever the limits of that power, they have not been reached here. Senator Humphrey, during the floor debates on the Civil Rights Act of 1964, said:

Simple justice requires that public funds, to which all taxpayers of all races contribute, not be spent in any fashion which encourages, entrenches, subsidizes, or results in racial discrimination.

We accordingly reverse the judgment of the Court of Appeals and remand the case for the fashioning of appropriate relief. . . .

While concurring in the decision, Justice Harry Blackmun (joined by Chief Justice Warren Burger) added a caveat that could prove significant as school districts are confronted with increasingly diverse student populations.

Against the possibility that the Court's judgment may be interpreted too broadly, I stress the fact that the children with whom we are concerned here number about 1,800. This is a very substantial group that is being deprived of any meaningful schooling because the children cannot understand the language of the classroom. We may only guess as to why they have had no exposure to English in their preschool years. Earlier generations of American ethnic groups have overcome the language barrier by earnest parental endeavor or by the hard fact of being pushed out of the family or community nest and into the realities of broader experience.

I merely wish to make plain that when, in another case, we are confronted with a very few youngsters, or with just a single child who speaks only German or Polish or Spanish or any language other than English, I would not regard today's decision . . . as conclusive upon the issue whether the statute and the guidelines require the funded school district to provide special instruction. For me, numbers are at the heart of this case and my concurrence is to be understood accordingly.

ANEXO 4

CALIFORNIA CODES EDUCATION CODE SECTION 52160-52178

52160. This article shall be known and may be referred to as the Chacon-Moscone Bilingual-Bicultural Education Act of 1976.

52161 The Legislature finds that there are more than 288,000 school age children who are limited English proficient and who do not have the English language skills necessary to benefit from instruction only in English at a level substantially equivalent to pupils whose primary language is English. Their lack of English language communication skills presents an obstacle to such pupils' right to an equal educational opportunity which can be removed by instruction and training in the pupils' primary languages while such pupils are learning English. The Legislature recognizes that the school dropout rate is excessive among pupils of limited English proficiency. This represents a tremendous loss in human resources and in potential personal income and tax revenues. Furthermore, high rates of joblessness among these dropouts contribute to the unemployment burden of the state.

The Legislature recognizes that a critical need exists for teaching and administrative personnel qualified in the bilingual and crosscultural skills necessary to the instruction of the limited-English-proficient population in the state's school districts. Therefore, the Legislature directs school districts to provide for in-service programs to qualify existing and future personnel in the bilingual and crosscultural skills necessary to serve the pupils of limited English proficiency of this state. Furthermore, the Legislature intends that the public institutions of higher education establish programs to qualify teachers and administrators in the bilingual and crosscultural skills necessary to serve these pupils.

The Legislature finds and declares that the primary goal of all programs under this article is, as effectively and efficiently as possible, to develop in each child fluency in English. The programs shall also provide positive reinforcement of the self-image of participating pupils, promote crosscultural understanding, and provide equal opportunity for academic achievement, including, when necessary, academic instruction through the primary language.

It is the purpose of this article to require California school districts to offer bilingual learning opportunities to each pupil of limited English proficiency enrolled in the public schools, and to provide adequate supplemental financial support to achieve such purpose. Insofar as the individual pupil is concerned, participation in bilingual programs is voluntary on the part of the parent or guardian.

52162 The State Board of Education shall adopt such rules and regulations as are necessary for the effective administration of this article.

52163 Unless the context otherwise requires, the definitions set forth in this section shall govern the construction of this article.

(a) "Basic bilingual education" is a system of instruction which builds upon the language skills of the pupil and which consists of, but is not limited to, all of the following:

(1) A structured English language development component with daily instruction leading to the acquisition of English language proficiency, including English reading and writing skills.

(2) A structured primary language component with daily basic skills instruction in the primary language for the purpose of sustaining achievement in basic subject areas until the transfer to English is made.

As the pupil develops English language skills, the amount of instruction offered through English shall increase.

(b) "Bilingual-bicultural education" is a system of instruction which uses two languages, one of which is English, as a means of instruction. It is a means of instruction which builds upon and expands the existing language skills of each participating pupil, which will enable the pupil to achieve competency in both languages.

This instruction shall include all of the following:

- (1) Daily instruction in English language development which shall include
- (A) Listening and speaking skills

(B) *Reading and writing skills*; formal instruction in reading and writing of English shall be introduced when appropriate criteria are met.

(2) language development in the pupil's primary language, including oral and literacy skills.

(3) *Reading in the pupil's primary language.*

(4) Selected subjects taught in the pupil's primary language.

(5) Development of an understanding of the history and culture of California and the United States, as well as an understanding of customs and values of the cultures associated with the languages being taught.

(c) (1) "Experimental bilingual programs" are:

(A) Innovative programs which are consistent with the provisions of this article, the requirements for bilingual teaching personnel pursuant to Section 52165, and the requirements for English language and primary language development pursuant to this section. Such programs may include new management approaches, greater emphasis on team teaching, or other appropriate improvements which expand the learning opportunities of pupils of limited English proficiency.

Unless waivers of code sections are required, projects approval of the board is not required. A description of each such innovative program shall be included with the consolidated application for program funding and an annual evaluation of such programs shall be included in the multiple-funded program evaluation required pursuant to Section 33403.

(B) Planned variation programs for the purpose of comparing and improving language development programs for pupils of limited English proficiency. A primary focus shall be on appropriate instruction for pupils of limited English proficiency whose English skills are superior to their skills in their primary language.

A focus may also be placed upon situations in which the number of pupils who, in accordance with Section 52165, would be required to receive instruction pursuant to subdivision (a) or (b) of Section 52163, is substantially smaller than the census indicated for the previous year, in which case all pupils of limited English proficiency shall receive instruction through individual learning programs during the preparation of the district's proposal and the consideration of the proposal by the board. Such programs shall be authorized by the board in up to 300 classrooms in 1982-83 and up to 700 classrooms in 1983-84 and each school year thereafter in districts which are representative of the state both geographically and by size. Not more than 30 such classrooms in 1982-83 and 50 classrooms in 1983-84, which may or may not be in another school, shall be approved in any one district. Such programs shall not result in segregation. For districts proposing a planned variation program, the staffing requirements of Section 52165 may be partially or totally waived by the board provided that the district has an inadequate number of certified bilingual teachers, that certified bilingual teachers are not replaced, that present level of effort is not reduced, and that the proposed language development program is appropriate.

For each participating classroom there shall be another similar classroom in the district which has fully implemented and is in compliance with the other provisions of this article.

(2) Proposals for planned variation programs shall include, but need not be limited to.

(A) A clear statement of the purposes, goals, and objectives for planned variation programs and projected outcomes.

(B) A delineated management, staffing, and instructional plan.

(C) Pupil identification, diagnosis, and assessment procedures.

(D) Evidence of qualified bilingual and other instructional staff with demonstrated competence in language development, bicultural or multicultural knowledge of participating pupils, and instructional methodologies.

(E) Documented parent and community participation and support

(F) Use of state and federal funding, where applicable.

(G) Evaluation component which controls for instructional treatments, instructional engaged time, staffing, pupil language characteristics, achievement, attendance, and related data.

(H) For purposes of this subdivision, if formal action upon a proposal for a planned variation program is not taken by the State Board of Education on or before the second regular meeting of the board following the receipt of a complete and documented proposal, the proposal shall be deemed approved for the remainder of the school year.

Proposals which meet the requirements of this subdivision shall be approved by the board in accordance with standards established in subdivision (b) of Section 52820.

Proposals may be approved annually for a second, third, or fourth year based upon a demonstration of compliance with planned variation program requirements.

(3) The department shall include in its annual report to the Legislature submitted pursuant to Sections 33405 and 52171.6 the number and nature of experimental bilingual and planned variation programs and progress of participating pupils

(4) Nothing contained in this subdivision shall be construed to permit the operation of experimental bilingual and planned variation programs contrary to the purposes or intent of this article and other state or federal statutes and regulations promulgated for and on behalf of pupils of limited English proficiency. The primary goal of all such programs shall be to teach the pupil English.

(d) "Secondary level language development program" is a program in grades 7 to 12 which provides a prescriptive English language program that systematically develops a pupil's listening and speaking skills, knowledge of linguistic and grammatical structure leading to proficiency in reading and writing English. The prescriptive English language program shall be based on the diagnosis of a pupil's language skills pursuant to Sections 52164 and 52164.1 and shall be conducted as an integral instructional program of English curriculum for not less than one full period a day or its equivalent for the purpose of providing pupils with minimum English language competencies pursuant to subdivision (e). The primary goal of such programs shall be to teach pupils the English language.

In addition to the prescriptive English language program required by this subdivision, a secondary level language development program shall provide primary language instructional support to sustain academic achievement in nonelective content subject areas required for high school graduation consistent with current law.

Instruction in a secondary level language development program shall be provided either by a language development specialist, or by a certified bilingual-crosscultural teacher, who has received the recommendation of the local superintendent of schools verifying in writing that the teacher is competent and qualified to teach an English-as-a-second-language component, as measured by the district's personnel evaluation system.

School districts offering an instructional program pursuant to this subdivision shall not be required to provide a secondary level individual learning program, as defined in subdivision (e), but shall be required to maintain records documenting all parental notices and of the continuing evaluation of pupil needs and services.

A school district may make a secondary level language development program available to pupils enrolled in grade 6 whenever that grade is maintained by the district in a middle school comprised of any of grades 6, 7, 8, or 9.

(e) "Secondary level individual learning program" is an individualized systematic program of instruction which meets the needs of limited-English-proficient pupils and builds upon their language skills in order to develop proficiency in English. This program shall be offered in a manner consistent with the United States Supreme Court decision in *Lau vs. Nichols* (414 U.S. 563), the Equal Education Opportunities Act of 1974 (20 U.S.C. Sec. 1701 et seq.) and federal regulations promulgated pursuant to such court decisions and federal statutes. The primary goal of all such programs shall be to teach the pupil English.

(f) "Elementary level individual learning program" is any program of instruction for a pupil of limited English proficiency in which any one of the three program options described in subdivision (a), (b), or (c) is individualized to meet the needs of the pupil of limited English proficiency and is offered in a manner consistent with the requirements of this article. Such instruction shall be offered in a manner consistent with the United States Supreme Court decision in *Lau v. Nichols* (414 U.S. 563), the Equal Educational Opportunities Act of 1974 (20 U.S.C. Sec. 1701 et seq.), and federal regulations promulgated pursuant to such court decisions and federal statutes. The primary goal of all such programs shall be to teach the pupil English.

(g) "Primary language" is a language other than English which is the language the pupil first learned or the language which is spoken in the pupil's home.

(h) "Bilingual-crosscultural teacher" means a person who (1) holds a valid, regular California teaching credential and (2) holds either a bilingual-crosscultural certificate of proficiency or other credential in bilingual education authorized by the Commission for Teacher Preparation and Licensing or a bilingual-crosscultural specialist credential. Such a person shall be fluent in the primary language and familiar with the cultural heritage of limited-English-proficiency pupils in the bilingual classes he or she conducts. Such a person shall have a professional demonstrated working knowledge of the methodologies which are necessary to educate effectively those pupils.

(i) "Bilingual-crosscultural teacher aide" means an aide fluent in both English and the primary language of the pupil or pupils of limited English proficiency in a bilingual-bicultural program. Such an aide shall be familiar with the cultural heritage of pupils of limited English proficiency in the bilingual classes to which he or she is assigned.

(j) "Board" means the State Board of Education.

(k) "Superintendent" means the Superintendent of Public Instruction

(l) "Basic skills" means language arts, including, but not limited to, reading and writing, and mathematics.

(m) "Pupils of limited English proficiency" are pupils who do not have the clearly developed English language skills of comprehension, speaking, reading, and writing necessary to receive instruction *only in English at a level substantially equivalent to pupils of the same age or grade whose primary language is English*. The determination of which pupils are pupils of limited English proficiency shall be made in accordance with the procedures specified in Sections 52164 and 52164.1. Pupils who have no proficiency in their primary language are not included within this definition.

(n) "Pupils of fluent English proficiency" are pupils whose English proficiency is comparable to that of the majority of pupils, of the same age or grade, whose primary language is English.

(o) "Department" means the Department of Education.

52163.5. Each of the program options defined in subdivision (a), (b), (c), (d), (e), or (f) of Section 52163 shall include structured activities which promote the pupil's positive self-image and crosscultural understanding.

The Legislature recognizes that language development is a continuum and that pupils in the same classroom may have varying levels of English and primary language skills. *The individualized instruction for each pupil, pursuant to all of the program options, shall be based on a continuing evaluation of the pupil's progress by the classroom teacher, and by others, as appropriate. An English development component is required for all participating pupils. Pupils with greater strength in their primary language shall receive instruction in academic subjects through the primary language as long as such instruction is needed to sustain academic achievement. As pupils develop the skills which allow them to learn more effectively in English, more of their instruction shall be through the English language. A primary language component shall be provided as specified in subdivision (a), (b), (c), (d), (e), or (f) of Section 52163, but shall be less extensive as the pupil progresses into English*

52163.6 The Legislature recognizes that for many languages there is a shortage of primary language textbooks, curriculum, teacher training programs, and bilingual personnel. The requirement for reading in the primary language may be waived by the board if the district documents the lack of available materials, personnel, and training programs. The department shall maintain a list of available curriculum materials and teacher training programs in all appropriate languages, to verify the waiver requests. The waiver is renewable yearly. *Each waiver request shall be signed by the chairperson of the district bilingual committee. The waiver does not eliminate the requirement for primary oral language development.*

52164 Each school district shall ascertain not later than the first day of March of each year, under regulations prescribed by the State Board of Education, the total number of pupils of limited English proficiency within the district, and shall classify them according to their primary language, age, and grade level. This count shall be known as the "census of pupils of limited English proficiency" and shall consist of a determination of the primary language of each pupil enrolled in the school district and an assessment of the language skills of all pupils whose primary language is other than English.

The census shall be taken by individual, actual count, and not by estimates or samplings. All pupils of limited English proficiency, including migrant and special education pupils, shall be counted. Special language assessment instruments, designated by the superintendent and in compliance with the requirements of subdivision (j) of Section 56001, may be used for special education pupils. The results of this census shall be reported to the Department of Education not later than the 30th day of April of each year. The previous census shall be updated to include new enrollees and to eliminate pupils who are no longer pupils of limited English proficiency and pupils who no longer attend school in the district, and shall be reported pursuant to Section 52164.1. *Census data gathered in one school year shall be used to plan the number of bilingual classrooms to be established in the following school year.*

52164.1 The superintendent, with the approval of the State Board of Education, shall prescribe census-taking methods, applicable to all school districts in the state, which shall include, but need not be limited to, the following:

(a) A determination of the primary language of each pupil enrolled in the school district. The primary language of new pupils shall be determined as they enroll. Once determined, the primary language need not be redetermined unless the parent or guardian claims there is an error. Home language determinations are required only once, unless the results are disputed by a parent or guardian.

(b) An assessment of the language skills of all pupils whose primary language is other than English. All the skills listed in subdivision (m) of Section 52163 shall be assessed, except that reading and writing skills need not be assessed for pupils in kindergarten and grades 1 and 2. For those pupils who, on the basis of oral language proficiency alone, are clearly limited English proficient, assessment of reading and writing skills shall be necessary only to the extent required by subdivision (c). This assessment, which shall be made as pupils enroll in the district, shall determine whether such pupils are fluent in English or are of limited English proficiency.

(c) For those pupils identified as being of limited English proficiency, a further assessment shall be made to determine the pupil's primary language proficiency, including speaking, comprehension, reading, and writing, to the extent assessment instruments are available. Parallel forms of the instruments used to determine English proficiency shall be used, if available. The results of the parallel assessment shall determine the extent and sequence in which English and the primary language will be used in the instruction of basic skills.

A diagnostic assessment in the language designated for basic skills instruction measuring speaking, comprehension, reading, and writing, shall be administered for instructional use at the district level. Such diagnostic assessment shall be updated as necessary to provide a curriculum meeting the individual needs of each pupil of limited English proficiency.

If the assessment conducted pursuant to this subdivision indicates that the pupil has no proficiency in the primary language, further assessment of the pupil's primary language skills including consultation with the pupil's parents or guardians, the classroom teacher, the pupil, or others who are familiar with the pupil's language ability in various environments shall be conducted. If this detailed assessment indicates that the pupil has no proficiency in his or her primary language, then the pupil is not entitled to the protection of this article.

The diagnostic assessment process shall be completed within 90 days after the date of the pupil's initial enrollment and shall be performed in accordance with rules and regulations adopted by the board.

The parent or guardian of the pupil shall be notified of the results of the assessment. The Department of Education shall conduct an equivalency study of all language proficiency tests designated for the identification of pupils of limited English proficiency to insure uniformity of language classifications and to insure the reliability and validity of such tests. Tests, materials, and procedures to determine proficiency shall be selected to meet psychometric standards and administered so as not to be racially, culturally, or sexually discriminatory.

The Department of Education shall annually evaluate the adequacy of and designate the instruments to be used by school districts, and such instruments shall be available by March 15 of each year.

The assessments shall be conducted by persons who speak and understand English and the primary language of the pupils assessed, who are adequately trained and prepared to evaluate cultural and ethnic factors, and who shall follow procedures formulated by the superintendent to determine which pupils are pupils of limited English proficiency, as defined in subdivision (m) of Section 52163. A school district may require that the assessment be conducted by persons who hold a valid, regular California teaching credential and who meet the other qualifications specified in this paragraph. The superintendent may waive the requirement that the assessment be conducted by persons who can speak and understand the pupil's primary language where the primary language is spoken by a small number of pupils and the district certifies that it is unable to comply. This certification shall be accompanied by a statement from the district superintendent that the chairperson of the district advisory committee on bilingual education has been consulted and was unable to assist in the effort to locate appropriate individuals to administer the assessment.

Any district may elect to follow federal census requirements provided that the language skills described in subdivision (m) of Section 52163 are assessed, and provided that such procedures are consistent with Section 52164, the district shall be exempt from the state census procedures described in subdivisions (a) and (b).

52164.2. The Department of Education shall review the results of the census each year. Where the information provided by a school district appears to be inaccurate or where parents, teachers, or counselors file a formal written complaint that the census is inaccurate, the department shall audit the district's census. Where the department concludes that the census has been incorrectly taken, or the results appear to be inaccurate, the department shall require another census to be taken and the corrected information to be provided.

52164.3. (a) Each school district shall reassess pupils whose primary language is other than English, whether they are designated as limited English proficient, or fluent English proficient, when a parent or guardian, teacher, or school site administrator claims that there is a reasonable doubt about the accuracy of the pupil's designation.

(b) In all cases of reassessment, the parent or guardian of the pupil shall be notified of the result. This notice shall be given orally when school personnel have reason to think that a written notice will not be understood.

52164.4. If a previously untested pupil enrolling in a school for the first time speaks a language other than English in the home, such pupil shall be enrolled as a pupil of limited English proficiency in a bilingual program pursuant to subdivision (a), (b), (c), (e), or (f) of Section 52163 at least until that child has been assessed pursuant to Section 52164.

52164.5. Pertinent information from the assessment of language skills for each pupil whose primary language is other than English shall be retained by the school district as long as the pupil is enrolled in the district. Each school district shall report annually to the Department of Education, and the department shall report to the State Board of Education, the number of pupils (1) whose primary language is other than English; (2) who are of limited English proficiency; (3) whose primary language is other than English who are enrolled in classes defined in subdivision (a), (b), (c), (d), (e) or (f) of Section 52163; (4) the number of such pupils who have become bilingual and literate in English and in their primary language, as appropriate; and (5) the number of such pupils who have met the language reclassification criteria for exit criteria pursuant to Section 52164.6.

52164.6. Reclassification criteria shall be established by each school district in which pupils of limited English proficiency are enrolled. The criteria shall determine when pupils of limited English proficiency have developed the English language skills necessary to succeed in an English-only classroom. The reclassification process shall, at a minimum, utilize multiple criteria, including, but not limited to, all of the following.

(a) Teacher evaluation, including a review of the pupil's curriculum mastery.

(b) Objective assessment of language proficiency and reading and writing skills

(c) Parental opinion and consultation.

(d) An empirically established range of performance in basic skills, based on nonminority English-proficient pupils of the same grade and age, which demonstrates that the pupil is sufficiently proficient in English to succeed in an English-only classroom.

The board shall adopt regulations setting forth standards for language reclassification criteria to be adopted by school districts.

The board's regulations shall, at a minimum, prescribe a reclassification process that utilizes multiple criteria as required by this section.

Each school district shall, in following the board's regulations establish criteria for determining when pupils of limited English proficiency enrolled in programs defined in Section 52163 have developed the English language skills of comprehension, speaking, reading, and writing necessary to succeed in an English-only instructional setting.

52165. Each pupil of limited English proficiency enrolled in the California public school system in kindergarten through grade 12 shall receive instruction in a language understandable to the pupil which recognizes the pupil's primary language and teaches the pupil English.

(a) In kindergarten through grade 6;

(1) Whenever the language census indicates that any school of a school district has 10 or more pupils of limited English proficiency with the same primary language in the same grade level or 10 or more pupils of limited English proficiency with the same primary language, in the same age group, in a multigrade or ungraded instructional environment, the school district shall offer instruction pursuant to subdivision (a), (b), or (c) of Section 52163 for such pupils at the school. Whenever there are pupils of limited English proficiency with different primary languages who do not otherwise trigger the program requirements of subdivision (a), (b), or (c) of Section 52163 or of this subdivision, a language development specialist defined in subdivision (b) may be used.

(2) Commencing September 1, 1981, and to the extent state or federal categorical funds are available, the following services are required for pupils of limited English proficiency in concentrations of fewer than 10 per grade level. When there are fewer than 10 pupils of limited English proficiency in the same grade, but at least 20 such pupils in the school with the same primary language, the school district shall provide at least one certified bilingual-crosscultural teacher or teachers on waiver as defined in Section 52178 or 52178.5 and an individualized instruction program as defined in subdivision (f) of Section 52163 for such pupils at the school. If the number of pupils of limited English proficiency in the school exceeds 45, the district shall provide two such teachers.

These teachers may be used as resource teachers, team teachers or to provide such other services to pupils of limited English proficiency as the district deems appropriate. These teachers shall be different teachers than those required pursuant to paragraph (1).

(b) The Legislature recognizes that in the past equal educational opportunities have not been fully available to secondary pupils of limited English proficiency. It is the intent of the Legislature to encourage school districts to offer a language learning program pursuant to subdivision (d) of Section 52163. Certified bilingual-crosscultural teachers or, if no such teachers are available, language development specialists assisted by a bilingual aide shall be qualified to provide instruction for such programs.

Language development specialists shall be formally trained and competent in the field of English language learning, including second language acquisition and development, structure of modern English, and basic principles of linguistics, and shall meet the culture and methodology competencies established by subdivisions (b) and (c) of Section 44253.5. The Commission for Teacher Preparation and Licensing shall provide for the assessment of language competencies specified herein and shall modify existing culture and methodology competency for language development specialist to insure that they meet the crosscultural and instructional methodologies for pupils being served by such teachers. A teachers of English to speakers of other languages certificate from a commission approved teacher training institution of higher education which meets the criteria established by the commission pursuant to Section 44253.5 shall be accepted in lieu of the methodology requirement.

(c) In kindergarten and grades 1 through 12 pupils of limited English proficiency who are not enrolled in a program described in subdivision (a), (b), (c), or (d) of Section 52163, shall be individually evaluated and shall receive educational services defined in subdivision (e) or (f), as appropriate, of Section 52163. Such services shall be provided in consultation with the pupil and the parent, parents, or guardian of the pupil.

(d) As a part of its consolidated application for categorical program funds, each district receiving such funds shall include a specific plan indicating the ways in which the individual learning plans will meet the needs of pupils of limited English proficiency.

The plan shall describe all of the following: (1) Procedures used in making the individual evaluation. (2) The pupils' levels of English and primary language proficiency and levels of educational performance. (3) Instructional objectives and scope of educational services to be provided. (4) Periodic evaluation procedures, using objective criteria, to determine whether the instructional objectives are being met.

52166 All teachers and aides providing instruction in programs established pursuant to subdivision (a), (b), or, unless waived by the board, (c) of Section 52163, shall meet the criteria of subdivision (h) or (i) of Section 52163. In the event a school operates an individualized program described in subdivision (e) or (f) of Section 52163, such a district which receives categorical aid funds to meet the needs of pupils of limited English proficiency shall certify to the board that sufficient teachers and aides meeting the criteria of subdivision (h) or (i) of Section 52163, as appropriate, are available to the school to ensure that all pupils of limited English proficiency have instructional opportunities in both English and their primary language to meet the intent of this chapter. Other instructional personnel who are not bilingual-crosscultural as defined in subdivisions (h) and (i) of Section 52163 may provide instructional and educational services to pupils enrolled in programs established pursuant to subdivision (a), (b), or (c) of Section 52163 if the principal teachers and aides providing instruction in such programs meet the criteria established in subdivisions (h), unless waived by the board pursuant to subparagraph (B) of paragraph (1) of subdivision (c) of Section 52163, and (i) of Section 52163.

In the development of teacher evaluation procedures pursuant to Article 11 (commencing with Section 44660) of Chapter 1 of Part 25, the governing board of each school district may ensure that a teacher meeting the criteria of subdivision (h) of Section 52163 is evaluated on the basis of his or her classroom performance by an onsite administrator upon the advice of another person meeting the criteria of subdivision (h) of Section 52163.

52167. Except as provided in subdivision (b), in classes established pursuant to subdivision (a), (b), or (c) of Section

52165, not more than two-thirds nor less than one-third of the pupils shall be pupils of limited English proficiency. The remaining proportion of pupils in such class shall be pupils of fluent English proficiency. However, where there is documented evidence that these proportions cannot be met, the classroom proportions shall, at a minimum, reflect the proportion of the language proficiency classification for the particular grade level in the school and shall not result in segregation. Fluent-English-proficient pupils shall receive basic skills instruction in English and, to the extent possible, be achieving at the district norm.

In no event shall the primary purpose of the program be to teach a foreign language to English-speaking pupils.

The board shall adopt any necessary regulations governing this section within 90 days after January 1, 1981.

(b) The classroom proportion specified in subdivision (a) may be modified for the purpose of providing effective instruction for all pupils in core academic subjects. Pupils of limited English proficiency participating in programs established pursuant to subdivision (a), (b), or (c) of Section 52165 shall receive instruction for at least 20 percent of the schoolday in classes in which the proportions specified in subdivision (a) are met, and shall

receive instruction in classes with pupils of fluent English proficiency for an increased portion of the schoolday, as their English language skills increase.

52168. (a) The superintendent shall ensure that funds appropriated for purposes of this article supplement and do not supplant categorical funds allocated from other local or state sources in meeting the needs of pupils of limited English proficiency.

Categorical aid funds used for the purposes of Section 52165 shall not exceed, on a per pupil basis, the maximum allowance established pursuant to subdivision (b) of Section 54004.5 and regulations implementing that section. Categorical funds used for the purposes of Section 52165 shall include all state and local categorical aid funds which are wholly or partially allocated on the basis of the educational needs of limited-English-proficient pupils.

(b) School districts may claim funds appropriated for purposes of this article for expenditures in, but not limited to, the following categories:

(1) The employment of bilingual-crosscultural teachers and aides; however, funds are available for employment expenditures only to the extent such personnel are employed in providing bilingual services to eligible pupils. School districts applying for these funds shall submit an assurance that personnel hired for this program only supplement and do not supplant district personnel whose positions are funded by the district general fund.

(2) The purchase and development of special bilingual-bicultural teaching materials.

(3) The costs of special in-service training to develop bilingual-crosscultural instructional skills with preference given to teachers and teacher aides employed as part of the bilingual-bicultural program.

(4) Reasonable expenses (which may include transportation, child care, translation services, meals, and training) of parent advisory groups on bilingual-bicultural education, at the school and school district level, in the course of their duties as members of the parent advisory groups. The State Board of Education shall adopt rules and regulations defining reasonable expenses.

(5) Health and auxiliary services to the extent that they meet the direct needs of eligible pupils.

(6) Reasonable district administrative expenses including, but not limited to, costs incurred for the census of pupils of limited English proficiency pursuant to subdivision (a) of Section 52164.1, assessments pursuant to subdivisions (b) and (c) of Section 52164.1, and parent consultation pursuant to subdivision (a) of Section 52173 allowed pursuant to regulations of the board

(c) Nothing contained in this section shall be interpreted to authorize school districts to reduce per pupil expenditures from local, state, or federal sources for the education of pupils of limited English proficiency

52169. (a) The requirements for establishing programs mandated pursuant to subdivision (b) of Section 52165 shall be in effect beginning with the 1977-78 school year

(b) Nothing contained in this section shall be interpreted to authorize school districts to reduce per pupil expenditures from local, state, or federal sources for the education of limited-English-speaking pupils

52170 (a) Each school which has enrolled one or more pupils of limited English proficiency shall prepare a plan to meet the needs of pupils of limited English proficiency in attendance in the school

(1) Only those schools with 10 or more pupils with the same primary language in a grade level or 20 or more such pupils in the school and which receive consolidated application funding shall submit such plans to the superintendent.

(2) Schools with less than 10 pupils of limited English proficiency receiving consolidated application funding as well as schools with 10 or more pupils of limited English proficiency not receiving such funding shall develop and retain their plan to meet such pupils' needs. Such plan shall be available to the superintendent and the public upon request

(b) Schools required to submit plans shall prepare an application on forms provided by the Department of Education. Such application shall meet the applicable criteria of the consolidated application regulations and shall include, in addition, all of the following components:

(1) Teacher and aide preservice training which will identify and improve knowledge levels of each teacher and aide in teaching methodology, bilingual-crosscultural philosophy, and education.

(2) An in-service training program for teachers and aides that is linked with an institution of higher education, to the maximum extent feasible, which shall include the establishment of a liaison with a nearby institution of higher education and the solicitation of help from such institution in order to upgrade continually the bilingual-crosscultural education program

(3) An assurance that all bilingual-crosscultural aides are provided the opportunity to enroll in a career ladder program leading toward a single- or multiple-subject teaching credential and a certificate of competence in bilingual-crosscultural education

(c) The district's application to the Department of Education shall include all of the individual school applications.

52171. Each district shall submit annually to the department an evaluation of pupil progress for every program that has been approved pursuant to this article in a form and manner prescribed by the superintendent

52171.6. (a) The superintendent shall report annually to the Legislature on bilingual education programs as part of the multiple-funded program evaluation required pursuant to Section

33403 The superintendent shall coordinate the design of school district and state evaluations to minimize the data collection and reporting requirements at the school and district levels. Pupil performance data for bilingual programs may be collected and analyzed on a sample basis with appropriate controls for pupil and instructional program characteristics

The multiple-funded program evaluation shall include all of the following.

(1) A summary of district reports submitted pursuant to subdivision (a) of Section 52170 on the number of identified pupils of limited-English proficiency, funds from all sources available for programs to meet the needs of those identified pupils, and the numbers of identified pupils who are not being provided with services pursuant to subdivision (a), (b), (c), (d), (e), or (f) of Section 52163.

(2) Information on bilingual programs conducted pursuant to Section 52165, on all of the following

(A) The number of limited-English proficiency and fluent-English-speaking pupils served in the program

(B) The number of teachers holding bilingual credentials or certificates of competency, bilingual aides, teachers who have waivers, and language development specialists.

(C) Expenditures made from bilingual education funds by category of expenditure.

(D) The number of pupils reclassified and district level procedures for reclassification pursuant to Section 52164.6

(E) A summary report of programs conducted pursuant to subparagraph (B) of paragraph (1) of subdivision (c) of Section 52163.

(3) An assessment of the educational needs of pupils of limited-English proficiency and the extent to which such needs are being met from federal, state and local efforts, pursuant to subdivision (e) of Section 52177

(4) For pupils learning a substantive amount of the curriculum through their primary language, basic skills assessment shall be conducted in the primary language only; assessment of language proficiency shall be conducted in English.

For pupils learning through both English and the primary language, basic skills assessment shall be in English; assessment of language proficiency shall be conducted in English. Pupils participating in the individual learning plan shall be assessed as appropriate pursuant to regulations, instruction, and guidelines to be issued by the superintendent. Assessment of pupils in the primary language shall be required only to the extent that appropriate instruments are available.

(5) It is the intent of the Legislature that the evaluation of programs conducted pursuant to this article shall be designed to provide the Legislature, the board, the superintendent, and program administrators at district and school levels with information necessary to assist in all of the following:

- (A) Refining and improving policies, regulations, guidelines, and procedures on a continuing basis.
- (B) Assessing the overall merits of local programs.

52172. Teachers and teacher aides who are not bilingual-crosscultural teachers and aides, as defined by subdivisions (h) and (i) of Section 52163, shall not be permitted to teach in programs authorized pursuant to subdivision (a), (b), or, unless waived by the board, (c) of Section 52163, except as provided in Sections 52166 and 52178, or except as staffing requirements are waived by the board pursuant to subparagraph (B) of paragraph (1) of subdivision (c) of Section 52163. It is the intent of the Legislature that the provisions of Section 44955 shall apply to this section. However, in no case shall a school district dismiss a fully certificated teacher, who previously taught in the bilingual-bicultural program pursuant to a waiver granted under Section 52178, solely on the basis that such waiver has expired. Even if such person is unable to qualify for a bilingual credential or a bilingual-crosscultural certificate of competence, he or she shall retain his or her status, seniority, and rights as a probationary or permanent employee, as the case may be, for the purpose of serving as a monolingual teacher in other programs offered by the school district.

52173. (a) Prior to the enrollment of any pupils in any program authorized pursuant to subdivision (a), (b), (c), or (d) of Section 52163, parents or guardians of pupils of all potential participants shall be provided the opportunity for consultation about the placement of their child or ward in such a program. To achieve this purpose, the governing board of the school district in which the pupil resides shall notify by mail or in person the parent, parents, or guardian of the pupil of the fact that their child or ward will be enrolled in a program of bilingual education. The notice shall: (1) contain a simple, nontechnical description of the purposes, method, and content of the program in which their child or ward will be enrolled; (2) inform the parent, parents, or guardian that the parent, parents, or guardian have the right and are encouraged to visit such classes in which their child or ward will be enrolled and to come to the school for a conference to explain the nature and objectives of such education; (3) further inform the parent, parents, or guardian that they have the right, if they so wish, not to have their child or ward enrolled in such an education program; (4) inform the parent, parents, or guardian that they have the opportunity to participate in the school or school district advisory committee, or both. The written notice shall be in English and in the primary language of the pupil.

(b) Any parent or guardian whose child or ward has been or will be enrolled in programs authorized pursuant to subdivision (a), (b), (c), or (d) of Section 52163 shall have the right, either at the time of the original notification of enrollment or at the close of any semester thereafter, to withdraw his or her child or ward from the program, by written notice to the principal of the school in which his or her child or ward is enrolled.

52174. Nothing in this article shall preclude the participation by an individual school district in a consortium or a cooperative in order to provide support and contract services to school districts that receive funds for the purposes of this article.

52175. A school district governing board may allow a nonresident pupil of limited English proficiency to enroll in or attend its program authorized pursuant to subdivision (a), (b), (c), or (d) of Section 52163 subject to Chapter 5 (commencing with Section 46600) of Part 26, if the tuition of the child is paid by the school district in which the pupil resides.

52176. (a) Each school district with more than 50 pupils of limited English proficiency shall establish a districtwide advisory committee on bilingual education. Parents or guardians, or both, of pupils of limited English proficiency who are not employed by the district shall constitute a majority of the committee, unless the district designates for this purpose an existing districtwide advisory committee on which parents or guardians, or both, of pupils of limited English proficiency have membership in at least the same percentage as their children and wards represent of the total number of pupils in the district, provided that a subcommittee on bilingual-bicultural education on which parents or guardians, or both, of pupils of limited English proficiency constitute a majority is established. The district advisory committee and subcommittee, if applicable, shall be responsible for at least six specific tasks. These tasks shall be to advise the district governing board regarding all of the following:

- (1) Establishment of a timetable for development of a district master plan for bilingual education.
- (2) Districtwide needs assessment on a school-by-school basis.
- (3) Establishment of district program goals and objectives in bilingual education.

(4) A plan to ensure district compliance with the provisions of Section 52178

(5) Administration of the annual language census.

(b) Each school with more than 20 pupils of limited English proficiency shall establish a school level advisory committee on which parents or guardians, or both, of such pupils constitute membership in at least the same percentage as their children and wards represent of the total number of pupils in the school. The school may designate for this purpose an existing school level advisory committee, or subcommittee of such an advisory committee, if the advisory committee, or subcommittee where appropriate, meets the criteria stated above.

(c) Each school advisory committee maintained pursuant to this section shall be responsible for advising the principal and staff in the development of a detailed master plan for bilingual education for the individual school and submitting the plan to the governing board for consideration for inclusion in the district master plan. It shall also be responsible for assisting in the development of the school needs assessment, language census, and ways to make parents aware of the importance of regular school attendance.

The Department of Education shall develop guidelines for the selection of advisory committees established or maintained pursuant to this section by May 1, 1981

52177 Out of funds appropriated for these purposes, the superintendent shall administer this article. The responsibilities of the superintendent in administering this article shall include, but are not limited to, ensuring all of the following.

(a) Sufficient bilingual personnel are available within the department with familiarity, competency, and proficiency in bilingual-crosscultural instruction to meet the needs of this article and to administer, review, monitor, and evaluate the use of state or federal categorical aid funds allocated to local districts which have been wholly or partially allocated on the basis of the educational needs of pupils of limited-English proficiency.

(b) Department personnel responsible for the administration, review, monitoring, or evaluation of programs operating pursuant to this article have been sufficiently trained to carry out the intent of this article to meet the needs of the pupil of limited-English proficiency

(c) There is within the department an administrative unit responsible for bilingual-bicultural educational programs and policies through which the superintendent shall carry out his functions pursuant to this article

(d) Districts are providing each pupil of limited-English proficiency with an educational opportunity equal to that available to English-speaking pupils; they are making appropriate use of local and state general funds to provide bilingual-crosscultural teachers and other required services; and an annual report is made to the Legislature regarding the extent to which this article has been implemented by school districts throughout the state. All districts in which pupils of limited-English proficiency are enrolled shall be reviewed through an onsite technical assistance, monitoring, and enforcement process at least once every three years.

(e) An annual evaluation of bilingual needs and programs within the state is developed for submission to the Legislature and to the Governor. The annual evaluation shall include a state assessment of the educational needs of pupils and other persons who are limited-English speaking, and of the extent to which these needs are being met from federal, state and local efforts.

52178 All principal teachers providing instruction in programs defined by subdivision (a), (b), or, unless waived by the board, (c), and insofar as teachers are available, (d) of Section 52163 shall be bilingual-crosscultural teachers as defined pursuant to subdivision

(h) of Section 52163, or shall be bilingual in English and the primary language of the pupils of limited-English proficiency in the bilingual class and hold an internship credential or an emergency bilingual-crosscultural credential.

In recognition of the shortage of qualified bilingual-crosscultural teachers, a school district may request a renewable two-year waiver from the board for each teacher who is not bilingual-crosscultural but who is enrolled and participating in a program leading to a bilingual specialist credential or a certificate of competence for bilingual-crosscultural instruction pursuant to Section 44253.5. Such a teacher, with the assistance of a bilingual-crosscultural aide, may teach in a program of bilingual instruction mandated by Section 52165 for not more than four school years, except as otherwise provided by this section, commencing with the first year that the teacher was under waiver, so long as continuing progress toward the certificate of competence is indicated in accordance with this section.

Each school district which requests waivers shall file its application for such a waiver with the State Board of Education on or before October 1 of the appropriate year, and shall give assurance that all teachers receiving such a waiver are, or will be, participating in, and fulfilling the requirements of, an appropriate

program, as specified in this section, leading to a bilingual specialist credential or a certificate of competence for bilingual-crosscultural instruction pursuant to Section 44253.5 during each of the school years for which the waiver is granted, and shall state who is in charge of the program and which institution or district is conducting it. Existing state and federal staff development funds may be used for training and assessment leading to a bilingual specialist credential or a bilingual-crosscultural certificate of competence. The district shall further assure that all teachers receiving such a waiver have been notified in writing by the school board as to their obligations while under waiver. The waiver application shall list the names of the teachers who are to receive the waiver, the school to which they are assigned, and the date by which the teacher is expected to obtain a bilingual specialist credential or the certificate of competence. Each district, whether or not it requests a waiver, shall report the number of classrooms for which a bilingual teacher is required pursuant to Section 52165, the total number of certificated bilingual-crosscultural teachers employed by the district in classroom positions, and, in the event the district requests a waiver, the total number of teachers for whom a waiver is being requested. If a district hires new teachers, no waiver shall be granted unless the board finds that the district made a good faith effort to contact, recruit, and hire bilingual-crosscultural teachers.

It is not the intent of the Legislature, by amending this section in the 1979-80 Regular Legislative Session, to expand the requirements for the certificate of bilingual-crosscultural competence.

For purposes of this section, programs for the study of language, culture, and methodology offered by accredited postsecondary institutions shall be approved and regulated by the Commission on Teacher Credentialing. Courses for the study of language, culture, and methodology established by the State Department of Education pursuant to Article 4 (commencing with Section 52180) of Chapter 7 of Part 28 shall be approved by the State Department of Education and shall be deemed appropriate. All other courses for the study of language, culture, or methodology offered for bilingual teachers on waiver shall meet the standards and criteria published by the State Department of Education. The department shall adopt standards and criteria for training programs in language, culture, and methodology for teachers on waiver lacking competencies in those areas. District applications for initial waivers to commence on or after July 1, 1984, and applications for two-year renewals, shall include certification by the district that the applicant is enrolled in or will be enrolled in an approved language, culture, or methodology course or a course for the study of language, culture, or methodology that meets the standards and criteria adopted by the State Department of Education, and certification by the employing school district or education agency that the applicant teacher is making the following progress toward meeting the requirements for the bilingual-crosscultural certificate of competence:

(a) For the teacher who is just entering the bilingual program:
no requirement.

(b) For the teacher beginning his or her second year on waiver:
(1) competence in language, culture, or methodology, as required by subdivision (a), (b), or (c) of Section 44253.5, and (2), for the teacher who is not competent in language, enrollment in a program for the study of language which is approved by the Commission on Teacher Credentialing or enrollment in a course for the study of language which is established or approved by the State Department of Education, or a program which meets the standards and criteria prescribed by the department under this section.

(c) For the teacher beginning his or her third year on waiver: (1) competence in language as required by subdivision (a) of Section 44253.5, or (2) continued enrollment in a program for the study of language which is approved by the Commission on Teacher Credentialing or continued enrollment in a course for the study of language which is established and approved by the State Department of Education, or a program which meets the standards and criteria prescribed by the department under this section.

(d) For the teacher beginning his or her fourth year on waiver:
(1) competence in two of the three areas required by Section 44253.5 and (2), for the teacher who is not competent in language, continued enrollment in a program for the study of language which is approved by the Commission on Teacher Credentialing or continued enrollment in a course for the study of language which is established and approved by the State Department of Education, or a program which meets the standards and criteria prescribed by the department under this section.

ANEXO 5

CALIFORNIA STATE CONSTITUTION, ARTICLE III, SECTION 6 (Proposition 63, 1986)

Section 1

(a) Purpose

English is the common language of the people of the United States of America and the State of California. This section is intended to preserve, protect and strengthen the English language, and not to supersede any of the rights guaranteed to the people of this Constitution.

(b) English as the Official Language of California

English is the official language of California

(c) Enforcement

The Legislature shall enforce this section by appropriate legislation. The Legislature and officials of the State of California shall take all steps necessary to insure that the role of English as the common language of the State of California is preserved and enhanced. The Legislature shall make no law which diminishes or ignores the role of English as the common language of the State of California.

(d) Personal Right of Action and Jurisdiction of Courts.

Any person who is a resident of or doing business in the State of California shall have standing to sue the State of California to enforce this action, and the Courts of record of the State of California shall have jurisdiction to hear cases brought to enforce this section. The Legislature may provide reasonable and appropriate limitations on the time and manner of suits brought under this section.

Section 2 Severability.

If any provision of this section, or the application of any such provision to any person or circumstance, shall be held invalid, the remainder of this section to the extent it can be given effect shall not be affected thereby, and to this end, the provisions of this section are severable.

ANEXO 6

National Language Act of 1999 (Introduced in the House) HR 1005 IH

106th CONGRESS
1st Session
H. R. 1005

To amend title 4, United States Code, to declare English as the official language of the Government of the United States, and for other purposes.

IN THE HOUSE OF REPRESENTATIVES, March 4, 1999

Mr. KING of New York (for himself, Mr. PAUL, Mr. ROYCE, Mr. HILLEARY, Mrs. KELLY, Mr. TAYLOR of North Carolina, Mr. WELDON of Florida, Mr. LAHOOD, and Mrs. ROUKEMA) introduced the following bill, which was referred to the Committee on Education and the Workforce, and in addition to the Committee on the Judiciary, for a period to be subsequently determined by the Speaker, in each case for consideration of such provisions as fall within the jurisdiction of the committee concerned

A BILL

To amend title 4, United States Code, to declare English as the official language of the Government of the United States, and for other purposes.

Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled,

SECTION 1. SHORT TITLE

This Act may be cited as the `National Language Act of 1999'.

SEC 2 ENGLISH AS OFFICIAL LANGUAGE

(a) IN GENERAL- Title 4, United States Code, is amended by adding at the end the following new chapter:

` CHAPTER 6--LANGUAGE OF THE GOVERNMENT

` Sec

- ` 161. Declaration of official language.
- ` 162. Official Government activities in English.
- ` 163. Exceptions

` Sec. 161 Declaration of official language

` English shall be the official language of the Government of the United States.

` Sec 162 Official Government activities in English

` The Government of the United States shall conduct its official business in English, including publications, income tax forms, and informational materials.

` Sec. 163 Exceptions

` This chapter does not apply to the use of a language other than English--

` (1) for religious purposes;

` (2) for training in foreign languages for international communication,

` (3) to programs in schools designed to encourage students to learn foreign languages, or

` (4) by persons over 62 years of age.

` This chapter does not prevent the Government of the United States from providing interpreters for persons over 62 years of age.'.

(b) CONFORMING AMENDMENT- The table of chapters for title 4, United States Code, is amended by adding at the end the following new item

161'.

SEC. 3. TERMINATION OF BILINGUAL EDUCATION PROGRAMS.

(a) REPEAL OF BILINGUAL EDUCATION ACT- The Bilingual Education Act (20 U.S.C. 3281 et seq.) is repealed

(b) TERMINATION OF OFFICE OF BILINGUAL EDUCATION AND MINORITY LANGUAGES AFFAIRS- The Office of Bilingual Education and Minority Languages Affairs in the Department of Education, established by part D of the Bilingual Education Act (20 U.S.C. 3331 et seq.), is terminated.

(c) RECAPTURE OF UNEXPENDED FUNDS- Any funds that have been provided as grants under the *Bilingual Education Act* (20 U.S.C. 3281 et seq.), and that have not been expended before the date of the enactment of this Act, shall be recaptured by the Secretary of Education and deposited in the general fund of the Treasury.

(d) TRANSITIONAL PROVISIONS-

(1) COMPLETION OF PROGRAMS DURING CURRENT SCHOOL YEAR- Subsections (a) and (c) shall not apply to any program under part A of the *Bilingual Education Act* (20 U.S.C. 3291 et seq.) until completion of the most recent school year of the program that commences after the date of the enactment of this Act.

(2) ASSISTANCE FOR TRANSITION TO SPECIAL ALTERNATIVE INSTRUCTIONAL PROGRAMS- During the 1-year period beginning on the date of the enactment of this Act, the Secretary of Education may assist local educational agencies in the transition of children enrolled in programs assisted under the Bilingual Education Act (20 U.S.C. 3281 et seq.) to Special Alternative Instructional Programs that do not make use of the native language of the student.

SEC. 4. REPEAL OF BILINGUAL VOTING REQUIREMENTS.

(a) IN GENERAL-

(1) BILINGUAL ELECTION REQUIREMENTS- Section 203 of the Voting Rights Act of 1965 (42 U.S.C. 1973aa-1a) is repealed.

(2) VOTING RIGHTS- Section 4 of the Voting Rights Act of 1965 (42 U.S.C. 1973b) is amended by striking subsection (f).

(b) CONFORMING AMENDMENTS-

(1) REFERENCES TO SECTION 203- The Voting Rights Act of 1965 (42 U.S.C. 1973 et seq.) is amended--

(A) in section 204, by striking 'or 203,'; and

(B) in the first sentence of section 205, by striking ', 202, or 203' and inserting 'or 202'

(2) REFERENCES TO SECTION 4- The Voting Rights Act of 1965 (42 U.S.C. 1973 et seq.) is amended--

(A) in sections 2(a), 3(a), 3(b), 3(c), 4(d), 5, 6, and 13, by striking ', or in contravention of the guarantees set forth in section 4(f)(2)';

(B) in paragraphs (1)(A) and (3) of section 4(a), by striking 'or (in the case of a State or subdivision seeking a declaratory judgment under the second sentence of this subsection) in contravention of the guarantees of subsection (f)(2)'; and

(C) in paragraphs (1)(B) and (5) of section 4(a), by striking 'or (in the case of a State or subdivision which sought a declaratory judgment under the second sentence of this subsection) that denials or abridgments of the right to vote in contravention of the guarantees of subsection (f)(2) have occurred anywhere in the territory of such State or subdivision'.

SEC. 5. ENGLISH LANGUAGE REQUIREMENT FOR CEREMONIES FOR ADMISSION OF NEW CITIZENS.

Section 337(d) of the Immigration and Nationality Act (8 U.S.C. 1448(d)) is amended by adding at the end the following new sentence: 'All public ceremonies in which the oath of allegiance is administered pursuant to this section shall be conducted solely in the English language.'

SEC. 6. NONPREEMPTION.

This Act (and the amendments made by this Act) shall not preempt any law of any State.

ANEXO 7

Declaration of Official Language Act of 1999 (Introduced in the House)

HR 50 IH
106th CONGRESS
1st Session
H. R. 50

To amend title 4, United States Code, to declare English as the official language of the Government of the United States.

IN THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
January 6, 1999

Mr. STUMP (for himself and Mr. TANCREDO) introduced the following bill, which was referred to the Committee on Education and the Workforce, and in addition to the Committee on the Judiciary, for a period to be subsequently determined by the Speaker, in each case for consideration of such provisions as fall within the jurisdiction of the committee concerned

A BILL

To amend title 4, United States Code, to declare English as the official language of the Government of the United States

Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled,

SECTION 1. SHORT TITLE.

This Act may be cited as the 'Declaration of Official Language Act of 1999'.

SEC. 2. ENGLISH AS OFFICIAL LANGUAGE.

(a) IN GENERAL- Title 4, United States Code, is amended by adding at the end the following new chapter:

' CHAPTER 6--LANGUAGE OF THE GOVERNMENT

' Sec

- ' 161. Declaration of official language.
- ' 162. Preferred language of communication
- ' 163. Preserving and enhancing the role of the official language
- ' 164. Duties of citizenship.
- ' 165. Reform of naturalization requirement
- ' 166. Exceptions
- ' 167. Preemption
- ' 168. Construction.
- ' 169. Enforcement.

' Sec. 161. Declaration of official language

' English is the official language of the Government of the United States.

' Sec. 162. Preferred language of communication

' English is the preferred language of communication among citizens of the United States.

' Sec. 163. Preserving and enhancing the role of the official language

' The Government of the United States shall promote and support the use of English for communications among United States citizens. Communications by officers and employees of the Government of the United States with United States citizens shall be in English

' Sec. 164. Duties of citizenship

' All United States citizens should be encouraged to read, write, and speak English to the extent of their physical and mental abilities

' Sec. 165. Reform of naturalization requirements

“(a) It has been the long-standing national belief that full citizenship in the United States requires fluency in English. English is the language of opportunity for all immigrants to take their rightful place in American society.

“(b) The Immigration and Naturalization Service shall--

“(1) enforce the established English language proficiency standard for all applicants for United States citizenship, and

“(2) conduct all naturalization ceremonies entirely in English.

Sec. 166. Exceptions

“This chapter does not apply to the use of a language other than English for--

(1) religious purposes,

“(2) training in foreign languages for international communication, or

“(3) use of non-English terms of art in government documents

Sec. 167. Preemption

“This chapter preempts any State or Federal law which is inconsistent with this chapter.

Sec 168 Construction

“This Act is not intended to affect programs in schools designed to encourage students to learn foreign languages.

Sec 169 Enforcement

“(a) CAUSE OF ACTION- Whoever is injured by a violation of this chapter may, in a civil action, obtain appropriate relief.

“(b) ATTORNEY'S FEES- In any action under this chapter, the court may allow a prevailing party, other than the United States, a reasonable attorney's fee as part of costs.”

(b) CLERICAL AMENDMENT- The table of chapters for title 4, United States Code, is amended by adding at the end the following new item:

161’.

(c) REPEALS- Title VII of the Elementary and Secondary Education Act of 1965 (other than sections 7201 through 7309) is repealed.

SEC 3. REPEAL OF BILINGUAL VOTING REQUIREMENTS.

(a) IN GENERAL-

(1) BILINGUAL ELECTION REQUIREMENTS- Section 203 of the Voting Rights Act of 1965 (42 U.S.C. 1973aa-1a) is repealed.

(2) VOTING RIGHTS- Section 4 of the Voting Rights Act of 1965 (42 U.S.C. 1973b) is amended by striking subsection (f).

(b) CONFORMING AMENDMENTS-

(1) REFERENCES TO SECTION 203- The Voting Rights Act of 1965 (42 U.S.C. 1973 et seq.) is amended--

(A) in section 204, by striking ‘or 203,’; and

(B) in the first sentence of section 205, by striking ‘, 202, or 203’ and inserting ‘or 202’.

(2) REFERENCES TO SECTION 4- The Voting Rights Act of 1965 (42 U.S.C. 1973 et seq.) is amended--

(A) in sections 2(a), 3(a), 3(b), 3(c), 4(d), 5, 6, and 13, by striking ‘, or in contravention of the guarantees set forth in section 4(f)(2)’;

(B) in paragraphs (1)(A) and (3) of section 4(a), by striking `or (in the case of a State or subdivision seeking a declaratory judgment under the second sentence of this subsection) in contravention of the guarantees of subsection (f)(2)'; and

(C) in paragraphs (1)(B) and (5) of section 4(a), by striking `or (in the case of a State or subdivision which sought a declaratory judgment under the second sentence of this subsection) that denials or abridgments of the right to vote in contravention of the guarantees of subsection (f)(2) have occurred anywhere in the territory of such State or subdivision'

ANEXO 8

La Iniciativa de Unz

(En Español)

texto por
Ron K. Unz y Gloria Matta Tuchman;

LA SECCION 1. El Capítulo 3 (comenzando con la Sección 300) es añadido a la Parte 1 del Código Educativo, para leer:

EL CAPITULO 3 LA EDUCACION DEL IDIOMA INGLES PARA NIÑOS INMIGRANTES

EL ARTICULO 1 Los Hallazgos y las Declaraciones

300 Ea pueblo de California concluye y declara lo siguiente:

(a) MIENTRAS QUE el idioma inglés es el idioma público nacional de los Estados Unidos de America y del estado de California, y es hablado por la mayoría de residentes de California, y es tambien idioma del mundo para la ciencia, para la tecnología, y para el negocio internacional, con lo cual es el idioma de la oportunidad económica; y

(b) MIENTRAS QUE padres inmigrantes están ansiosos que sus niños adquieran un conocimiento bueno de inglés, con lo cual permitirlos tomar parte en el Sueño Americano de adelantamiento económico y social; y

(c) MIENTRAS QUE el gobierno y las escuelas públicas de California tienen una obligación moral y un deber constitucional para proporcionar a todos niños de California, a pesar de su orígenes nacionales, con las habilidades necesarias para llegar a ser miembros productivos de nuestra sociedad, y de estas habilidades, la capacidad de leer y escribir en el idioma inglés; y

(d) MIENTRAS QUE las escuelas públicas de California hacen actualmente un trabajo pobre de educar niños de inmigrantes, malgastar los recursos financieros en los programas experimentales caros del idioma cuyo fracaso sobre las pasadas dos décadas es demostrado por las tasas altas de abandono de la escuela y niveles bajos de capacidad de leer y escribir en inglés de muchos niños de inmigrantes; y

(E) MIENTRAS QUE niños jóvenes de inmigrantes pueden adquirir fácilmente la fluidez repleta en un idioma nuevo, tal como inglés, si ellos son expuestos pesadamente a ese idioma en una edad joven.

(F) POR LO TANTO se resuelve esto: todos los niños en las escuelas públicas en California se enseñarán solamente en inglés tan rápidamente y efectivamente como es posible.

EL ARTICULO 2. La Educación en la Idioma Ingles

305 Con sujeción a las excepciones proporcionadas en el Artículo 3 (comenzando con la Sección 310), todos los niños en las escuelas públicas de California se enseñarán solamente en inglés. En el particular, esto requerirá que todo los niños sean colocados en clases donde solamente el inglés se hablara.. Los niños que no hablen el inglés serán educados por la inmersión en el inglés refugiada durante un período de no más un año

Las escuelas locales se permitirán colocar en la misma clase estudiantes de inglés de edades diferentes pero con el mismo nivel del conocimiento del idioma inglesa

Las escuelas locales se permitirán mezclar en la misma clase estudiantes de diferentes idiomas pero con el mismo grado de la fluidez inglesa. Cuando los estudiantes han adquirido un conocimiento bueno del inglés, ellos serán transferidos a clases normales. La financiación suplementaria, para estudiantes de la idioma ingles se mantendrá, con la modificación posible abajo en el Artículo 8 (comenzando con la Sección 335).

306 Las definiciones de los términos usados en este artículo y en el Artículo 3 (comenzando con la Sección 310) son los siguientes:

(A) el "estudiante de inglés" significa a un niño que no habla inglés cuyo idioma nativo no es inglés y que no es actualmente capaz de realizar el trabajo ordinario de clases en el inglés, también conocido como LEP o con conocimiento de la Idioma Inglesa Limitada

(B) "Clase en la idioma inglesa" significa un clase en que el idioma de la instrucción usada por el personal de la enseñanza es el idioma inglés, y en cuál tal personal de la enseñanza posee un conocimiento bueno del idioma inglés.

(C) "Clase de 'mainstream' de la idioma inglesa" significa una clase en donde los estudiantes son nativos de la idioma ingles o han adquirido ya la fluidez razonable en el inglés.

(D) "La inmersión refugiada en el ingles" o "la inmersión en el ingles estructurada" significa un proceso para la adquisición del idioma inglesa para niños jóvenes en que casi toda instrucción es en inglés pero con un plan diseñado para niños que aprenden el idioma ingles.

(E) "La Educación Bilingüe" significa un proceso para la adquisición del idioma ingles y al mismo tiempo para la adquisición de conocimientos normales de las materias escolares en el idioma natal de los estudiantes.

EL ARTICULO 3. Excepciones de los requisitos para Padres

310. Los requisitos de la Sección 305 pueden ser renunciados por los padres con un consentimiento escrito proporcionado anualmente, solamente si existen las circunstancias especificadas debajo y en la Sección 311. Tal consentimiento requerirá que los padres o guardián legal visiten personalmente la escuela para solicitar la renuncia y que ellos allí sean proporcionados una descripción repleta de las materias educativas que pueden ser usada en las elecciones educativas diferentes del programa y todas las oportunidades educativas disponibles al niño. Bajo tales condiciones de la renuncia de los padres, los niños pueden ser transferidos a clases donde ellos son enseñados inglés y otras materias por técnicas de la educación bilingües u otras metodología educativas generalmente reconocidas y permitidas por la ley. Las escuelas individuales en cuál 20 estudiantes o más de un nivel dado del grado reciben una renuncia se requerirá a ofrecer tal clase; de otro modo, ellos deben permitir que los estudiantes se transfieran a una escuela pública en cuál tal clase se ofrece.

311. Las circunstancias en que una renuncia de la excepción de padres se puede otorgar bajo la Sección 310 son las siguientes:

(a) Los Niños que ya saben inglés: el niño posee ya las habilidades inglesas buenas del idioma, cuando medido por pruebas estandarizadas de la comprensión inglesa del vocabulario, de leer, y de escribir, en que las cuentas de niño en o encima del promedio del estado para su nivel del grado o en o encima del promedio 50 del grado, el que es más bajo; o

(b) Los niños de edad más alta: el niño es de 10 años de edad o más, y es la creencia informada del director de escuela y personal educativo que un curso alterno del estudio educativo sería mejor para la adquisición rápida de habilidades básicas en el idioma ingles; o

(c) Los niños con necesidades especiales: el niño ha sido colocado ya por un período de no menos de treinta días durante ese año de escuela en un clase del idioma ingles y es subsiguientemente la creencia informada del director de escuela y personal educativo que el niño tiene las necesidades tan especiales, físicas, emocionales, psicológicas o educativas que un curso alterno educativo sería mejor para el desarrollo educativo completo. Una descripción escrita de estas necesidades especiales se debe proporcionar y cualquiera decisión deberá ser hecha con sujeción al examen y la aprobación del supervisor local de escuela, bajo regulaciones establecidas por el Consejo de Educación local y últimamente el Consejo de Educación de Estado. La existencia de tales necesidades especiales no obligará emisión de una renuncia, y los padres serán informados completamente de su derecho de rehusar para concordar a una renuncia.

EL ARTICULO 4. Clases privadas de inglés por la comunidad

315. En el adelantamiento de su requisito constitucional y legal de tener que ofrecer ayuda especial de idioma a niños que vienen de grupos con conocimientos limitados de inglés, el estado alentará a miembros de familia y otros a dar clases privadas de inglés a tales niños, y sostener estos esfuerzos levantando el nivel general del conocimiento del idioma inglés en la comunidad. Comenzar con el ejercicio económico en que esta iniciativa se decreta y para cada uno del nueve ejercicio económico que

sigue después, una suma de cincuenta millones de dólares (\$50,000,000) por año por la presente es apropiado de los Fondos Generales para el propósito de proporcionar la financiación adicional para los programas subvencionados del adulto la instrucción del idioma inglesa a padres u otros miembros de la comunidad que promete para proporcionar clases privadas de inglés a niños de escuela de California con inglés limitado.

316. Los programas financiados según esta sección se proporcionará por organizaciones de escuelas o comunidad. La financiación para estos programas será administrada por la Oficina del Supervisor de la Instrucción Pública, y será desembolsada en la discreción de las mesas directivas locales de escuela, bajo regulaciones razonables establecidas por Consejo de Educación del Estado.

EL ARTICULO 5. La aplicación legal para padres.

320. Como detallado en el Artículo 2 (comenzando con la Sección 305) y el Artículo 3 (comenzando con la Sección 310), todos los niños en las escuelas públicas de California tienen el derecho de ser enseñados con la idioma inglés. Si un niño de escuela de California ha sido negado la opción de un plan de educativo en la idioma inglés en una escuela pública, los padres o guardián legal tendrán la posición legal para demandar la aplicación de las provisiones de este estatuto, y si es exitoso será concedido los gastos normales y de costumbre de abogados y daños verdaderos no punitivos o consecuentes. Cualquier miembro de la mesa directiva de la escuela u otro oficial elegido o maestro público de escuela o administrador que intencionadamente y repetidas veces niega aplicar los términos de este estatuto va ser personalmente responsable para pagar daños verdaderos a los padres o guardián legal.

EL ARTICULO 6 Partes de este estatuto que son contra la Constitución

325. Si cualquier parte de este estatuto se encuentra en conflicto con la ley federal o en conflicto con la Constitución del Estado de California, el estatuto será aplicado a la extensión máxima que no este en conflicto con esa ley federal, o con la Constitución de Estado de California. Cualquier provisión inválida será cortada de las porciones restantes de este estatuto.

EL ARTICULO 7 La fecha operativa

330. Esta iniciativa llegará a ser operativa para todos términos de escuela que comienzan más de sesenta días que siguen la fecha en que entra en vigencia.

EL ARTICULO 8. Enmienda

335. Las provisiones de este acto pueden ser enmendadas por un estatuto que entra en vigencia sobre la aprobación por el electorado o por un estatuto a además el propósito de acto pasó un voto de dos terceros de cada cámara de la Legislatura y firmada por el Gobernador.

EL ARTICULO 9. Interpretación

340. Bajo circunstancias que existan interpretaciones opuestas de este estatuto, la Sección 300 será asumida que contiene la intención verdadera del estatuto.

ANEXO 9

Federal Court Decision
Refusing to Delay the Effective Date of Proposition 227
by U.S. District Judge Charles A. Legge

San Francisco,
July 15, 1998

UNITED STATES DISTRICT COURT
NORTHERN DISTRICT OF CALIFORNIA

VALERÍA G., et al.,
Plaintiffs,

v.

) No. C-98-2252-CAL

PETE WILSON, et al.,
Defendants

ORDER DENYING MOTION FOR PRELIMINARY INJUNCTION

I INTRODUCTION

On June 2, 1998 the voters of California approved Proposition 227, an initiative statute entitled "English Language in Public Schools." The statute amends the California Education Code to change the system under which students who are limited in English proficiency are educated in California's public schools. On June 3, 1998 plaintiffs filed this action challenging Proposition 227 under federal statutes and the United States Constitution.

Plaintiffs now move for a preliminary injunction "enjoining defendants from implementing Proposition 227" pending the trial of this case. 1. Plaintiffs are several limited English proficient (called by the parties "LEP") students enrolled in California public schools. Five organizations have filed amicus curie briefs in support of the motion for a preliminary injunction.²

The motion is opposed by defendants' Governor Pete Wilson, the State Board of Education and its members, and the State Superintendent of Public Instruction Delaine Eastin. The motion is also opposed by several parties who have intervened in this lawsuit.³

This court has studied the moving brief, the briefs in opposition to the motion, the reply briefs, and the amicus curie briefs. It has also considered the declarations and exhibits submitted in support of the parties' positions.

For the reasons discussed below, the court will not enjoin the implementation of Proposition 227.

II THE INITIATIVE

The California electorate approved Proposition 227 by a margin of 61% to 39%. The general thrust of the initiative is to reject the bilingual education programs presently in effect in California public schools. Bilingual education programs are those in which LEP students, while they are learning English, receive instruction in academic subjects such as math, science and social studies in their "primary" or "home" language. The initiative replaces the bilingual education programs with an educational system designed to teach LEP students English, and other subjects in English, early in their education.

Proposition 227 is premised upon certain findings and declarations that include:

The public schools of California currently do a poor job of educating immigrant children, wasting financial resources on costly experimental language programs whose failure over the past two decades is

demonstrated by the current high drop-out rates and low English literacy levels of many immigrant children.

Initiative, § 300(d). The findings also declare that English is "the language of economic opportunity" and that "[i]mmigrant parents are eager to have their children acquire a good knowledge of English, thereby allowing them to fully participate in the American Dream of economic and social advancement." *Id.* at §§ 300(a) & (b). The findings further state that "[t]he government and the public schools of California have a moral obligation and a constitutional duty to provide all of California's children, regardless of their ethnicity or national origins, with the skills necessary to become productive members of our society, and of these skills, literacy in the English language is among the most important." *Id.* at § 300(c).

In response to those defined problems and goals, Proposition 227 requires that LEP children receive instruction pursuant to an educational system known as "sheltered English immersion" or "structured English immersion." *Id.* at § 305. Under this system, children "shall be taught English by being taught in English." *Id.* The initiative requires that "Children who are English learners shall be educated through sheltered English immersion during a temporary transition period not normally intended to exceed one year." *Id.* "Once English learners have acquired a good working knowledge of English, they shall be transferred to English language mainstream classrooms." *Id.* The initiative defines the immersion system as "an English language acquisition process for young children in which nearly all classroom instruction is in English but with the curriculum and presentation designed for children who are learning the language." *Id.* at § 306(d). It provides that "[l]ocal schools shall be permitted to place in the same classroom English learners of different ages but whose degree of English proficiency is similar." *Id.* at § 305

Beyond this, the language of the initiative does not set forth a specific program or curriculum. It is not the function of this court to interpret all of the language of the initiative in this motion, but some things are apparent from the face of the statute.⁴ Although the immersion program is "not normally intended to exceed one year," the initiative does not require a student to transition to mainstream classes until he or she has achieved a "good working knowledge of English." Also, the initiative on its face does not preclude the occasional use of an LEP student's primary language in the classroom, or outside of the classroom, such as by tutors, teacher's aids or other academic support programs. Nor does the initiative prohibit additional primary language assistance after an LEP child transitions into a mainstream classroom.

The initiative also sets forth several circumstances under which LEP children may receive waivers from English immersion, and "may be transferred to classes where they are taught English and other subjects through bilingual education techniques or other generally recognized educational methodologies permitted by law." *Id.* at § 310. Waivers may be granted (i) where a student already knows English; (ii) where the student is ten years or older and the school agrees that an alternative course of study would be a better way for the student to learn English; and (iii) where the student has tried the immersion program for at least thirty days and the school agrees that in light of his or her particular needs an alternative course of educational study would be better suited to the student's overall educational development. *Id.* at § 311. In all of these circumstances, a waiver may be granted only with parental consent. *Id.* at § 310.

Moreover, "[i]ndividual schools in which 20 pupils of a given grade level receive a waiver shall be required to offer" a class in which children are taught English and other subjects through bilingual or other alternative educational techniques. *Id.* (emphasis added).

The initiative also appropriates from the state's General Fund fifty million dollars per year for each of the next ten years "for the purpose of providing additional funding for free or subsidized programs of adult language instruction to parents or other members community who pledge to provide personal English language tutoring to California school children with limited English proficiency." *Id.* at § 315.

Anticipating a legal challenge, the initiative provides that

[i]f any part or parts of this statute are found to be in conflict with federal law or the United States or the California State Constitution, the statute shall be implemented to the maximum extent that federal law, and the United States and the California State Constitution permit. Any provision held invalid shall be severed from the remaining portions of this statute.

Id. at § 325.

The initiative becomes operative for school terms which begin sixty days after the date of its passage, June 2, 1998. *Id.* at § 330. Thus, if it survives plaintiffs' request for an injunction, the initiative will take effect in California public schools in the fall term of this year.

Finally, as will be discussed in more detail below, the initiative restricts the circumstances under which it may be amended.

The provisions of this act may be amended by a statute that becomes effective upon approval by the electorate or by a statute to further the act's purpose passed by a two-thirds vote of each house of the Legislature and signed by the Governor.

Id. at § 335.

III. PRELIMINARY INJUNCTION STANDARD

A preliminary injunction may issue "if the movant has shown either a likelihood of success on the merits and the possibility of irreparable injury, or that serious questions are raised and the balance of hardships tips sharply in the movant's favor." *Coalition for Economic Equity v. Wilson*, 122 F.3d 692, 700 (1997) (quoting *Armstrong v. Mazurek*, 94 F.3d 566, 567 (9th Cir. 1996)). See also *U.S. v. Odessa Union Warehouse Co-Op*, 833 F.2d 172, 174 (9th Cir. 1987) ("These two formulations represent two points on a sliding scale in which the required degree of irreparable harm increases as the probability of success decreases"). In cases involving matters of significant public interest, such as the one now before this court, the court must also consider whether the public interest weighs in favor of the preliminary injunction.

Thus, under the "traditional test" typically used in cases involving the public interest, the district court should consider (1) the likelihood that the moving party will prevail on the merits, (2) whether the balance of irreparable harm favors the plaintiff, and (3) whether the public interest favors the moving party.

Caribbean Marine Services Co., Inc. v. Baldrige, 844 F.2d 668, 674 (9th Cir. 1988). See also *Regents of University of California v. ABC, Inc.*, 747 F.2d 511, 514 & 521-22 (9th Cir. 1984). The public interest in this case is reflected by the voters' overwhelming approval of Proposition 227.

IV. PRELIMINARY OBSERVATIONS

Before proceeding to the legal issues raised by plaintiffs, the court makes three preliminary observations which concern principles important to the legal analysis:

First, the proponents and the opponents of Proposition 227 all share the same objective: to educate children who have limited English proficiency. Substantial state and local resources will be expended toward that common objective, regardless of which educational system will be used. The parties differ only on how to accomplish that common objective.

The second observation is related to the first. This court cannot discern from the face of Proposition 227 any hidden agenda of racial or national origin discrimination against any group. Because the educational debate and the initiative concern children whose primary language is not English, it necessarily focuses on children who are national origin minorities.⁵ But the debate is a neutral one, about which system will provide LEP children with the best education to enable them to function as American citizens and enjoy the opportunities and privileges of life in the United States.

Third, each side has submitted extensive evidence and arguments, including research studies and sometimes vehement expert opinions, that their education system is the better one. There is a legitimate policy debate among respected educators and scholars on this issue. But, most important, that is not a debate for this court to resolve. This court is not a Supreme Board of Education. It is not the province of this court to impose on the people of California its view of which is the better education policy. The voters of California expressed their policy preference by enacting Proposition 227. The only decision this court can properly make is whether Proposition 227 violates any federal statute or the United States Constitution.

V. LIKELIHOOD OF SUCCESS ON THE MERITS

Plaintiffs contend that they are likely to succeed on the merits of this suit because Proposition 227 violates (1) the Equal Educational Opportunities Act, (2) the Supremacy Clause of the United States Constitution, (3) Title VI of the Civil Rights Act, and (4) the Equal Protection Clause of the United States Constitution.

Plaintiffs' challenge to Proposition 227 is necessarily a facial challenge. Proposition 227 does not set forth a detailed educational plan or curriculum to be used by all school districts. The State Board of Education has not yet construed all of the initiative's various provisions or passed final regulations, guidelines, standards or curricula under it.⁶ No local school district has yet implemented any specific curriculum or program. No child has yet entered a classroom under it. Thus, all this court can decide at this time is whether Proposition 227 --- on its face and in its present and as yet unapplied form --- violates a federal statute or the United States Constitution.

"A facial challenge to a legislative Act is, of course, the most difficult challenge to mount successfully, since the challenger must establish that no set of circumstances exists under which the Act would be valid." *U.S. v. Salerno*, 481 U.S. 739, 745 (1987). The fact that Proposition 227 might in the future operate in violation of a federal law or the constitution under some scenario is insufficient to render it facially invalid.

VI. RIPENESS AND STANDING

Defendants contend that plaintiffs' claims are not yet "ripe" for judicial decision. The injuries of which plaintiffs complain, defendants contend, are speculative in that they have not yet occurred and may never occur. Before addressing each of plaintiffs' legal claims individually, it is appropriate to note the general requirements for ripeness and its related principle of standing.

The judicial power vested in the federal courts by Article III of the United States Constitution extends only to actual "cases" and "controversies." U.S. Const., Art. III, §2. Among the "justiciability doctrines" developed by the courts to give meaning to Article III's case-or-controversy requirement are standing and ripeness. *National Treasury Employees Union v. U.S.*, 101 F.3d 1423 (D.C. Cir. 1996). The standing requirement focuses primarily on whether the parties bringing the lawsuit have a significant stake in the controversy. To have standing under Article III, a plaintiff must first have suffered an "injury in fact -- an invasion of a legally protected interest which is (a) concrete and particularized and (b) actual or imminent, not conjectural or hypothetical." Second, the "injury in fact" must be "fairly traceable" to the challenged act. And third, it must be "likely" to be "redressed by a favorable decision." *Lujan v. Defenders of Wildlife*, 504 U.S. 555, 560-61 (1992).

The ripeness requirement focuses on the timing of the lawsuit. To be "ripe," a lawsuit must be sufficiently well developed and specific to "be appropriate for judicial resolution." *Toilet Goods Ass'n, Inc. v. Gardner*, 387 U.S. 158, 162 (1967). "Ripeness . . . shares the constitutional requirement of standing that an injury in fact be certainly impending." *National Treasury Employees Union*, 101 F.3d at 1427. Courts may not decide cases that "involve uncertain and contingent future events that may not occur as anticipated, or indeed may not occur at all." *Metzenbaum v. Federal Energy Regulatory Commission*, 675 F.2d 1282, 1289 (D.C. Cir. 1982). The basic rationale of the ripeness doctrine is to prevent the courts, through avoidance of premature adjudication, from entangling themselves in abstract disagreements over administrative policies, and also to protect the agencies from judicial interference until an administrative decision has been formalized and its effects felt in a concrete way by the challenging parties.

Abbott Laboratories v. Gardner, 387 U.S. 136, 148-49 (1967).

Moreover, an issue is not ripe for federal court adjudication if a plaintiff has not applied for the benefits sought through available administrative channels. *Hodel v. Virginia Surface Mining & Reclamation Ass'n, Inc.*, 452 U.S. 264, 297 (1981) (facial challenge not ripe where plaintiffs have not "availed themselves of the opportunities provided by the Act to obtain administrative relief by requesting either a variance . . . or a waiver from the . . . restrictions"); *Christenson v. Yojo County Bd. of Sup'rs*, 995 F.2d 161, 164 (9th Cir. 1993) (claim not ripe where plaintiff has made no attempt to obtain benefit sought "through the procedures the State has provided for doing so before turning to the federal courts").

Plaintiffs here have not yet suffered and are not currently suffering any injury. No regulations⁷ or programs have been adopted. And plaintiffs have not yet applied for the available waivers from the

requirements of Proposition 227, which could eliminate their alleged harm. The ripeness and standing issues thus turn on whether plaintiffs' alleged educational injuries under Proposition 227 are so inevitable and imminent that judicial intervention is appropriate now. With these principles in mind, the court addresses individually the legal violations alleged by plaintiffs.

VII EQUAL EDUCATIONAL OPPORTUNITIES ACT

Plaintiffs contend that Proposition 227 violates Section 1703(f) of Title 20 of the United States Code. Section 1703 was added by the Equal Educational Opportunities Act of 1974 ("EEOA"), codified at 20 U.S.C. § 1701, et seq. It provides:

No state shall deny equal educational opportunity to an individual on account of his or her race, color, sex or national origin, by --

(f) the failure by an educational agency to take appropriate action to overcome language barriers that impede equal participation by its students in its instructional programs (emphasis added.)

20 U.S.C. § 1703(f). This section imposes on states and educational agencies an obligation "to take appropriate action to overcome language barriers that impede equal participation by its students in its instructional programs." *Gomez v. Illinois State Board of Education*, 811 F.2d 1030, 1037 (7th Cir. 1987). See also *Idaho Migrant Council v. Board of Education*, 647 F.2d 69, 71 (9th Cir. 1981).

The EEOA does not define what is "appropriate action," or provide criteria to evaluate whether a particular educational system constitutes "appropriate action." Nor does the "declaration of policy" underlying the EEOA, set forth in Section 1701, provide guidance as to whether any particular educational program constitutes "appropriate action."⁸ The act does not even mention, much less mandate, bilingual education programs. Moreover, "Congress has provided us with almost no guidance, in the form of legislative history, to assist us in determining whether a school district's language remediation efforts are 'appropriate.'" *Castaneda v. Pickard*, 648 F.2d 989, 1009 (5th Cir. 1981). Thus, to prove a violation of Section 1703(f) at this time, plaintiffs must establish that the implementation of Proposition 227 could not, in any circumstance, constitute "appropriate action" as required by the EEOA.

Judicial precedent is the only guidance available to this court. And the Ninth Circuit Court of Appeal has never addressed whether a particular educational system constitutes "appropriate action" under Section 1703(f). The leading circuit court decision on Section 1703(f) is *Castaneda v. Pickard*, supra. In *Castaneda*, plaintiffs claimed that bilingual education and language remediation programs that had previously been implemented in the defendant school district were in violation of the EEOA. *Id.* at 1006. Faced with little guidance from the statute, the policies stated in the statute, and the legislative history, the *Castaneda* court was, as this court is now, confronted with a type of task which federal courts are ill equipped to perform and which we are often criticized for undertaking: prescribing substantive standards and policies for institutions whose governance is properly reserved to other levels and branches of our government (i.e., state and local educational agencies) which are better able to assimilate and assess the knowledge of professionals in the field.

Id., at 1009

The *Castaneda* court began its analysis by explaining that while Section 1703(f) requires educational agencies to take "appropriate action," it does not require a program of bilingual education.

We do not believe that Congress, at the time it adopted the EEOA, intended to require local educational authorities to adopt any particular type of language remediation program. At the same time Congress enacted the EEOA, it passed the Bilingual Education Act of 1974, 20 U.S.C. § 880b et seq. (1976). The Bilingual Education Act established a program of federal financial assistance intended to encourage local educational authorities to develop and implement bilingual education programs. . . .

We note that although Congress enacted both the Bilingual Education Act and the EEOA as part of the 1974 amendments to the Elementary and Secondary Education Act, Congress, in describing the remedial obligation it sought to impose on the states in the EEOA, did not specify that a state must provide a

program of "bilingual education" to all limited English speaking students. We think Congress' use of the less specific term, "appropriate action," rather than "bilingual education," indicates that Congress intended to leave state and local educational authorities a substantial amount of latitude in choosing the programs and techniques they would use to meet their obligations under the EEOA.

Id., at 1008-09 (emphasis added). See also *Guadalupe Organization, Inc. v. Tempe Elementary School Dist. No. 3*, 587 F.2d 1022, 1030 (9th Cir. 1978). Because the EEOA does not require school districts to provide bilingual programs, the near elimination of bilingual education programs by Proposition 227 does not in and of itself violate Section 1703 (f).

The *Castaneda* court recognized, however, that by obligating schools to address the problem of language barriers, Congress intended to insure that schools make a genuine and good faith effort to remedy language deficiencies. *Castaneda*, 648 F.2d at 1009. The court devised a three-part test designed "to fulfill the responsibility Congress has assigned to us without unduly substituting our educational values and theories for the educational and political decisions reserved to state or local school authorities or the expert knowledge of educators." *Id.* For a particular language program to constitute "appropriate action" under section 1703(f), a court must ascertain (1) that a school "is pursuing a program informed by an educational theory recognized as sound by some experts in the field or, at least, deemed a legitimate experimental strategy": (2) that the programs and practices actually used by a school are "reasonably calculated to implement effectively the educational theory adopted by the school"; and (3) that the program "produce[s] results indicating that the language barriers confronting students are actually being overcome." *Id.* at 1009-10. Using this framework to guide the analysis, the court now turns to plaintiffs' argument that the language program prescribed by Proposition 227 cannot be "appropriate action" under Section 1703(f).

1. Sound Educational Theory

In the first step of the court's analysis

. the court must examine carefully the evidence the record contains concerning the soundness of the educational theory or principles upon which the challenged program is based. This, of course, is not to be done with any eye toward discerning the relative merits of sound but competing bodies of expert educational opinion, for choosing between sound but competing theories is properly left to the educators and public officials charged with responsibility for directing the educational policy of a school system. The state of the art in the area of language remediation may well be such that respected authorities legitimately differ as to the best type of educational program for limited English speaking students and we do not believe that Congress in enacting § 1703(f) intended to make the resolution of these differences the province of federal courts. The court's responsibility, insofar as educational theory is concerned, is only to ascertain that a school system is pursuing a program informed by an educational theory recognized as sound by some experts in the field or, at least, deemed a legitimate experimental strategy.

Id. at 1009 (emphasis added).

Plaintiffs contend that Proposition 227 is based upon an unsound educational theory which is *unprecedented, untested, and certain to irreparably harm LEP children*. They provide expert opinions that a program of sheltered English immersion followed by mainstream classes in English is not a sound approach to educating LEP students. Plaintiffs' two major concerns are (1) that LEP students will be denied access to the substantive academic curriculum (i.e. math, science, social studies) while in language immersion class, which will lead to irremediable learning deficits; and (2) that most students with no prior knowledge of the English language cannot learn enough English in one year to compete on an equal footing with students in mainstream classes in English. Those are legitimate concerns, apparently supported by many experts in the field.

However, defendants present evidence that the sheltered English immersion program of Proposition 227 is also based upon a sound educational theory, which is not only tested but is the predominant method of teaching immigrant children in many countries in Western Europe, Canada and Israel. Defendants present expert opinions that "[t]he common European model is to put all newcomers into a special reception class for one year or, in rare cases two, and then to integrate them into regular classes, with ongoing extra support as needed." They also present evidence that "the advocates and political parties which are most concerned to do justice to immigrant minorities . . . vigorously oppose assigning immigrant children to separate classes and teaching them in their home languages; seeing this as a well-meaning but ill-advised strategy leading inevitably to marginalization from the social and economic

mainstream " Defendants further present evidence that numerous school districts in this country use structured English immersion methods.

Faced with this conflicting body of evidence, it is apparent that "the state of the art in the area of language remediation [is] such that respected authorities legitimately differ as to the best type of educational program for limited English speaking students." Castaneda, 648 F.2d at 1009. This court's responsibility, however, is only to ascertain whether the theory underlying Proposition 227 is informed by an educational theory recognized as sound by some experts in the field or, at least is deemed a "legitimate experimental strategy." *Id.* In light of the evidence submitted, this court must conclude that the English immersion system is valid educational theory. This court may not go beyond that conclusion and determine whether it is the better theory. It thus appears that Proposition 227 will satisfy the first prong of the Castañeda test.

Plaintiffs' central concern is that any programs implemented under Proposition 227 will sacrifice students' learning in academic subjects in favor of language instruction. Plaintiffs correctly point out that Section 1703(f) imposes the obligation to teach LEP students substantive curriculum as well as the English language. Castaneda, 648 F.2d at 1011 ("We understand § 1703(f) to impose on educational agencies not only an obligation to overcome the direct obstacles to learning that the language barrier itself poses, but also a duty to provide limited English speaking ability students with assistance in other areas of the curriculum where their equal participation may be impaired because of deficits incurred during participation in an agency's language remediation program.").

The court does not yet know how much substantive education will be taught in the immersion classes during the transition period. Although the initiative on its face does not require any particular curriculum, it also does not prohibit schools from implementing a curriculum designed to teach academic subjects to LEP students. This court may not assume, as plaintiffs do, "the outright absence of any program focused on academic achievement." The initiative leaves room for different educational choices, and this court can not conclude that no possible choice could constitute "appropriate action" under Section 1703(f).

Additionally, the court notes that requiring instruction which emphasizes language acquisition before full education in other areas of the curriculum does not per se violate Section 1703(f) This was specifically addressed by the Castaneda court:

[W]e do not think that a school system which provides limited English speaking students with a curriculum, during the early part of their school career, which has, as its primary objective, the development of literacy in English, has failed to fulfill its obligations under § 1703(f), even if the result of such a program is an interim sacrifice of learning in other areas during this period. . . . We believe the statute clearly contemplates that provision of a program placing primary emphasis on the development of English language skills would constitute "appropriate action."

* * *

We also believe, however, that § 1703(f) leaves schools free to determine whether they wish to discharge these obligations simultaneously, by implementing a program designed to keep limited English speaking students at grade level in other areas of the curriculum by providing instruction in their native language at the same time that an English language development effort is pursued, or to address these problems in sequence, by focusing first on the development of English language skills and then later providing students with compensatory and supplemental education to remedy deficiencies in other areas which they may develop during this period. In short, § 1703~f) leaves schools free to determine the sequence and manner in which limited English speaking students tackle this dual challenge so long as the schools design programs which are reasonably calculated to enable these students to attain parity of participation in the standard instructional program within a reasonable length of time after they enter the school system. Therefore, we disagree with plaintiffs' assertion that a school system which chooses to focus first on English language development and later provides students with an intensive remedial program to help them catch up in other areas of the curriculum has failed to fulfill its statutory obligation under § 1703(f).

Castaneda, 648 F.2d at 1011-12 (emphasis added).

(2) Programs Calculated to Implement the Theory

Under *Castaneda*,

[t]he court's second inquiry [is] whether the programs and practices actually used by a school system are reasonably calculated to implement effectively the educational theory adopted by the school. We do not believe that it may fairly be said that a school system is taking appropriate action to remedy language barriers if, despite the adoption of a promising theory, the system fails to follow through with practices, resources and personnel necessary to transform the theory into reality.

Id. at 1010. In *Castaneda*, unlike the present case, the plaintiffs challenged a program which had been in effect for a significant period of time. That court therefore analyzed whether *certain specific programs and practices* were reasonably calculated to implement effectively the educational theory adopted by the school district. Specifically, the court analyzed whether the school district's curriculum, staff qualifications, and testing methods were reasonably calculated to implement effectively the school's bilingual education program. *Id.* at 1010-15.

Because Proposition 227 has not yet been implemented, there are no programs or practices "actually used" in California schools for this court to analyze. Moreover, the thrust of plaintiffs' argument is not that no program could reasonably be calculated to implement the immersion system of Proposition 227. Rather, *plaintiffs argue that no implementation of that system could ever overcome barriers that impede equal participation by LEP students.*

First, plaintiffs argue that programs under Proposition 227 are inevitably doomed to failure because the initiative does not specify any mechanism by which to assess students' individual needs or evaluate students' individual progress. The court agrees that the effective implementation of the Proposition 227 system will require adequate methods to assess students' needs and progress. See, e.g., *Castaneda*, 648 F.2d 1013-14. But nothing in Proposition 227 precludes the State Board of Education from requiring, or local school districts from implementing, adequate methods of individual assessment and evaluation. And the waiver provisions specifically contemplate a system in which the needs of individual students are considered.

Plaintiffs next argue that even if adequate systems for need assessment are implemented, Proposition 227 imposes a "straight jacket" on schools which leaves them no flexibility to respond to deficiencies in their general LEP programs or provide programs specifically tailored to meet individual needs. This characterization of Proposition 227 as a "sink or swim" "one size fits all" "straight jacket" is overstated. The initiative leaves state and local education agencies with significant flexibility in how to design and implement programs which comply with its requirements. For example, Proposition 227 leaves the schools flexibility relating to when and how to grant waivers, how much and what type of academic support to provide LEP children outside of the classroom, how to balance the dual goals of language acquisition and substantive education, how to train teachers, how to define "good working knowledge of English," how to evaluate when LEP students have attained that level of knowledge, how long the English immersion will last, and what additional assistance may be added to the required programs. This court cannot conclude now that no programs could be implemented under Proposition 227 which will allow schools to respond to perceived shortcomings in their programs generally, or meet the needs of a particular student.

Plaintiffs also argue that Proposition 227 can not be adequately implemented under any circumstances, because it does not establish teaching standards or training requirements. Competent and adequately trained teachers are necessary for effective implementation of any educational theory. See, e.g., *Castaneda*, 648 F.2d at 1012. But again, it is premature for this court to make that analysis now. The State Board of Education and local school districts can establish appropriate teaching standards and training requirements. Nothing in the text of Proposition 227 precludes that.

The court finds that it is unlikely that there is no set of circumstances under which California's schools can adopt programs reasonably calculated to implement the educational theory of Proposition 227.

(3) Results

Finally, . . . [i]f a school's program, although premised on a legitimate educational theory and implemented through the use of adequate techniques, fails, after being employed for a period of time sufficient to give the plan a legitimate trial, to produce results indicating that the language barriers

confronting students are actually being overcome, that program may, at that point, no longer constitute appropriate action as far as that school is concerned. We do not believe Congress intended that under § 1703(f) a school would be free to persist in a policy which, although it may have been "appropriate" when adopted, in the sense that there were sound expectations for success and bona fide efforts to make the program work, has, in practice, proved a failure.

Castaneda, 648 F.2d at 1010.

Again, because Proposition 227 has not yet been implemented, there are not yet any "results" to evaluate. And there is nothing on the face of the initiative which compels the conclusion that California cannot later evaluate its results. Plaintiffs' arguments to the contrary are based upon their own assumptions about the end results, and they ignore the contrary body of educational opinion supporting the system adopted by Proposition 227.

(4) Conclusion Regarding EEOA

The court must therefore conclude that plaintiffs have not shown a likelihood that Proposition 227 on its face violates the EEOA. The proposition is based on an educational theory that is supported by some experts and some actual experience. Until the State adopts a regulatory scheme and school districts actually implement programs pursuant to the initiative, it is unlikely that this court will have the facts necessary to resolve plaintiffs' claims under the EEOA -- namely, whether those programs implement effectively the theory and whether those programs will actually work.

VIII. SUPREMACY CLAUSE

Plaintiffs next contend that Proposition 227 violates the Supremacy Clause of the United States Constitution, Art. VI, Cl. 2, in two ways:

First, they argue that the initiative impedes the ability of school districts to comply with their obligations under the EEOA. The initiative, they argue, "bars school districts from utilizing the most obvious and generally accepted options available to meet the needs of LEP students -- bilingual education . . ." As a result, plaintiffs argue, school districts cannot meet their dual obligations under the EEOA of both insuring English language development and preventing academic deficiencies.

Under the Supremacy Clause of the Constitution, "any state law . . . which interferes with or is contrary to federal law, must yield." *Free v. Bland*, 369 U.S. 663, 666 (1962) (citing *Gibbons v. Ogden*, 9 Wheat. 1, 210-211).

The criterion for determining whether state and federal laws are so inconsistent that the state law must give way is firmly established in our decisions. Our task is "to determine whether, under the circumstances of this particular case, [the State's] law stands as an obstacle to the accomplishment and execution of the full purposes and objectives of Congress." [] This inquiry requires us to consider the relationship between state and federal laws as they are interpreted and applied, not merely as they are written.

Jones v. Rath Packing Co., 430 U.S. 519, 526 (1977) (internal citations omitted). In areas of coincident federal and state regulation, such as education, courts may not "seek[] out conflicts between state and federal regulation where none clearly exists." *Exxon Corp. v. Governor of Maryland*, 437 U.S. 117, 130 (1978) (quoting *Huron Cement Co. v. Detroit*, 762 U.S. 440, 446).

As discussed above, the EEOA does not require bilingual education. *Castaneda*, 649 F.2d at 1009. It therefore does not prohibit states from denying bilingual education. And as also discussed above, this court cannot now determine that Proposition 227 violates the EEOA.

Plaintiffs next argue that the initiative violates the Supremacy Clause because it bars the "congressionally-favored option" of primary language instruction. They argue that Congress has expressed a preference for primary language instruction in the Bilingual Education Act of 1974, 20 U.S.C. § 7401, et seq., which provides federal grant money to local school districts to develop bilingual programs. Plaintiffs are correct that the statements of "Findings," "Policy," and "Purpose" of the Bilingual Education Act suggest that Congress encouraged bilingual education programs. See 20 U.S.C. §§ 7402(a)-(c). Congress did so by offering financial assistance. But it did not require bilingual education. And the fact that Congress was aware of bilingual education suggests that Congress made a deliberate

choice not to mandate such programs when it simultaneously enacted the EEOA, which requires only "appropriate action." Congress did not prohibit or otherwise discourage other educational programs for LEP students.

The court sees no conflict between Proposition 227 and the ability of school districts to comply with either the EEOA or the policies expressed in the Bilingual Education Act. Plaintiffs have not established a probability that Proposition 227 violates the Supremacy Clause of the United States Constitution.

IX TITLE VI OF THE CIVIL RIGHTS ACT

Plaintiffs next contend that Proposition 227 violates Title VI of the Civil Rights Act of 1964, 42 U.S.C. § 2000d, and its implementing regulations, 34 C.F.R. § 100.3(b) (2). Section 2000d provides that "[n]o person in the United States shall, on the ground of race, color, or national origin, be excluded from participation in, be denied the benefits of, or be subjected to discrimination under any program or activity receiving Federal financial assistance." 42 U.S.C. § 2000d. The regulations state that recipients of federal funding may not

utilize criteria or methods of administration which have the effect of subjecting individuals to discrimination because of their race, color, or national origin, or have the effect of defeating or substantially impairing accomplishment of the objectives of the program as respect individuals of a particular race, color, or national origin.

34 C.F.R. 100.3(b) (2) .

Plaintiffs argue that Proposition 227 violates Title VI because "it imposes an unjustifiable disparate impact on national origin minorities," "by denying LEP students meaningful access to academic curriculum during its 'sheltered English immersion' program, and then shunting them prematurely into mainstream academic classrooms," without providing "any remedial instruction to recoup the academic deficits incurred by them during that program."

A threshold issue is whether a showing of an adverse disparate impact is sufficient to establish a Title VI violation, or whether a showing of discriminatory intent is required. There appears to be some disagreement among the authorities on this issue.

In *Lau v. Nichols*, 414 U.S. 563 (1974), the Supreme Court stated that "[d]iscrimination is barred which has that effect even though no purposeful design is present." *Id.* at 568. In that case, the Court held that a school district's failure to provide any language assistance to substantial numbers of non-English speaking students violated Title VI, because such failure denied LEP students "a meaningful opportunity to participate in the educational program." *Lau*, 414 U.S. at 568. In declaring such an omission unlawful, the Court did not mandate any particular program of assistance. Indeed, it noted that a school district might undertake any one of several permissible courses of language remediation:

Teaching English to the students of Chinese ancestry who do not speak the language is one choice. Giving instruction to this group in Chinese is another. There may be others.

Id. at 565

Two years later, in *Washington v. Davis*, 426 U.S. 229 (1976), the Supreme Court held that a discriminatory up-urpose, and not simply a disparate impact or effect, must be shown to establish a violation of the Equal Protection Clause. The Court then decided *Regents of University of California v. Bakke*, 438 U.S. 265 (1978), in which the Court interpreted Title VI, to be coextensive, at least for some purposes, with the Equal Protection Clause. A majority of Justices have interpreted these two cases to suggest that Title VI, like the Equal Protection Clause, is violated only by conduct motivated by an intent to discriminate and not by conduct which merely has a discriminatory effect. See *Guardians Ass'n v. Civil Service Com'n of New York*, 463 U.S. 582, 608 n.1 (1983); *Castaneda*, 648 F.2d at 1007.

The Ninth Circuit and a different majority of the supreme Court, however, appear to have taken the position in recent opinions that where a lawsuit is brought to enforce the regulations under Title VI, rather than the statute itself, and where the plaintiffs seek injunctive or declaratory relief as opposed to compensatory relief, plaintiffs can prove a Title VI violation by establishing only a discriminatory effect.

See *Guardians Ass'n*, 463 U.S. at 584, 602-03 & 608 n.1 (1983); *Larry P. v. Riles*, 793 F.2d 969, 981-82 (1984). Because plaintiffs here contend that Proposition 227 also violates Title VI's implementing regulations, and because they seek only injunctive and declaratory relief, it may be appropriate to use a discriminatory effect analysis.

However, regardless of which standard applies, plaintiffs are not presently likely to succeed on the merits of their Title VI claim. Plaintiffs do not argue that Proposition 227 intentionally discriminates against LEP students, and as stated above, this court sees no evidence of discriminatory intent from the face of the initiative. Nor are plaintiffs likely to succeed on the merits even if a showing of adverse effect is sufficient. The initiative has not yet had any impact on anyone, and plaintiffs have not established that an adverse impact is inevitable. Plaintiffs advance their same arguments as in their EEOA claim, namely: most children will not learn enough English in one year to allow them to fully participate in mainstream classes; they will not have meaningful access to the academic curriculum during the immersion program; they will receive no remedial instruction to help recoup any academic deficits incurred during the immersion program; and they will receive no individualized assessment of needs or services. As discussed above, some of these contentions are debated by the experts in the field, and others are based on plaintiffs' assumptions about how Proposition 227 will operate. Proposition 227 on its face requires that all LEP students receive some kind of instruction designed to teach English and eliminate barriers to equal participation in the schools' instructional programs.

Some experts in the field, as well as the California electorate, believe the initiative will have a beneficial rather than a detrimental effect on LEP students. And neither Title VI nor its regulations compel any particular method of education. This court cannot conclude from the face of Proposition 227 that it will inevitably result in an adverse effect, exclusion, denial of benefits, or discrimination.

X. EQUAL PROTECTION CLAUSE

Plaintiffs finally argue that Proposition 227 violates the Equal Protection Clause of the federal constitution. That clause provides that "no state shall deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws." U.S. Constitution, Amend. XIV, § 1.

It is first important to note what plaintiffs do not argue in making their equal protection claim. They do not assert that the education system enacted by Proposition 227 is itself a violation of the equal protection clause. Indeed, there is at least one circuit case holding that there is no constitutional right to bilingual education. *Guadalupe Organization Inc. v. Tempe Elementary School Dist. No. 3*, 587 F.2d 1022, 1027 (9th Cir. 1978).

Instead, plaintiffs argue that Section 335 of Proposition 227 has created a political structure which plaintiffs will be disadvantaged in attempting to modify. Their argument is based upon *Hunter v. Erickson*, 393 U.S. 385 (1969), and *Washington v. Seattle School Dist. No. 1*, 458 U.S. 457 (1982). More specifically, plaintiffs argue that Proposition 227 denies them the equal opportunity to secure future legislation for programs that will be beneficial to them. They argue that Proposition 227 elevates the decision making process to a higher level of government than would otherwise be required; that is, that Proposition 227 places higher burdens upon them in seeking future changes by the state legislature, the state Board of Education, and local school boards. The reason is that Section 335 provides that Proposition 227 can be amended only upon approval by the electorate, or by a statute passed by a two-thirds vote by each house of the legislature and signed by the governor. And plaintiffs argue that because the subject is the education of LEP children, which is of particular concern to minorities, it requires strict scrutiny. Plaintiffs emphasize that they do not raise a "conventional" equal protection claim, but one based upon the political structure which results from Section 335.

It is true that Proposition 227 goes further than most legislation which has reached the courts, in that it requires for its change either approval by the state's electorate or a two-thirds majority of the legislature. However, this court concludes that plaintiffs nevertheless do not show probable success on the merits that this is a violation of equal protection.

It is particularly significant that this same argument has recently been rejected by the Ninth Circuit in *Coalition For Economic Equity v. Wilson*, 122 F.3d 692 (9th Cir. 1997). That court considered the application of the *Hunter - Seattle* principle to the state initiative at issue in that case, and the plaintiffs there made essentially the same argument as plaintiffs here. The Ninth Circuit rejected that argument, despite the dissent of judges who believed that an en banc hearing should be granted. Among other things, the Ninth Circuit said as follows:

The Hunter doctrine "does not mean, of course, that every attempt to address a racial issue gives rise to an impermissible classification." Rather, for the doctrine to apply at all, the state somehow must reallocate political authority in a discriminatory manner.

States have "extraordinarily wide latitude in creating various types of political subdivisions and conferring authority upon them." That a law resolves an issue at a higher level of state government says nothing in and of itself. Every statewide policy has the "procedural" effect of denying someone an inconsistent outcome at the local level. [A] law making procedure that 'disadvantages' a particular group does not always deny equal protection. Under any such holding, presumably a State would not be able to require referendums on any subject unless referendums were required on all, because they would always disadvantage some group.

Coalition For Economic Equity, 122 F.3d at 706 (citations omitted). The Ninth Circuit pointed out that the initiative before it in that case, as in this one, was not "an impediment to protection against unequal treatment but . . . an impediment to receiving preferential treatment." *Id.* at 708. And "[i]mpediments to preferential treatment do not deny equal protection." *Id.*

In this case the impediment is to plaintiffs obtaining a bilingual education system. As stated, there is no constitutional right to bilingual education. And the Ninth Circuit said in *Coalition For Economic Equity v. Wilson* that the equal protection clause was not violated by the repeal of legislation or policies "that were not required by the Federal Constitution in the first place." *Id.* at 706. So stating, the Ninth Circuit was quoting from *Crawford v. Board of Educ. of the City of Los Angeles*, 458 U.S. 527 (1982), decided at the same time as *Seattle*. The Supreme Court there said:

We [reject] the contention that once a state chooses to do "more" than the Fourteenth Amendment requires, it may never recede. We reject an interpretation of the Fourteenth Amendment so destructive of a State's democratic processes and of its ability to experiment.

Crawford, 458 U.S. at 535. The Supreme Court also repeated its holding "that the Equal Protection Clause is not violated by the mere repeal of race-related legislation or policies that were not required by the Federal Constitution in the first place." *Id.* at 538. And, "[i]n short, having gone beyond the requirements of the Federal Constitution, the State was free to return in part to the standard prevailing generally throughout the United States." *Id.* at 542.

The same things may be said of this initiative. Since there is no requirement in the federal constitution for bilingual education, the voters of California were free to reject bilingual education. Were they also free to set higher requirements for a future repeal of English immersion education and a return to bilingual education? Or stated conversely, are plaintiffs' equal protection rights violated because it could be more difficult for them to get something to which they are not constitutionally entitled, bilingual education? While those questions are unanswered by *Crawford*, or indeed directly by *Hunter* and *Seattle*, this court believes that the starting presumption must be in favor of the right of California voters to impose upon themselves requirements that are applicable to all citizens.

Of course, the majority cannot impose a restriction upon the minority if there is intentional discrimination against the minority. But it is plaintiffs' burden to establish that intention. Plaintiffs decline to carry that burden, simply by saying that they are not arguing a "conventional" equal protection claim. However, the requirement of intent is not so easily discarded. The Supreme Court said in *Crawford*, at the same time as its *Seattle* decision: "[T]his court previously has held that even when a neutral law has a disproportionately adverse effect on a racial minority, the Fourteenth Amendment is violated only if a discriminatory purpose can be shown." *Id.* at 537-538. And the Court again addressed the issue of discriminatory purpose in its opinion at 458 U.S. at 543-545. So this court cannot so easily conclude that intentional discrimination is not a necessary element to plaintiffs' claims.

Addressing Proposition 227 more specifically, it does not appear from the face of the initiative that plaintiffs are in fact as burdened as their argument suggests. There are options to a future state-wide initiative campaign. Changes can be made by the legislature, albeit with two-thirds majority. There are also other options to, if not the outright repeal of Proposition 227, its impact on particular school districts or on particular students. Plaintiffs can still petition the local school boards, and indeed the state school board, for regulations dealing with the implementation of Proposition 227 and exceptions thereto. Also a waiver system is built into Proposition 227. And, in the event of an actual deprivation of equal protection to an individual student, both the state and federal courts are available.

Finally, even if Section 335 of Proposition 227 does violate the equal protection clause, that alone would not entitle plaintiffs to an injunction restraining all of Proposition 227 from being put into effect. Section 325 specifically provides that if any part of the initiative is found to be in conflict with federal law, the statute shall be implemented to the maximum extent that federal law permits, and any invalid portion would be severed from the remaining portions. Thus, even if this or a higher court were later to hold that the amendment provisions of Section 335 violate the equal protection clause, it could be severable from the remainder of Proposition 227. Proposition 227 could therefore be implemented without the structural provision for its amendment which plaintiffs challenge.

Plaintiffs' challenge to this portion of Proposition 227 is certainly not frivolous. However, for the reasons stated, the court believes that plaintiffs have not demonstrated a sufficient likelihood of success on the merits of this claim to justify an injunction against implementing all of Proposition 227.

XI. TIME FOR IMPLEMENTATION

Plaintiffs and certain amicus curie contend that Proposition 227 cannot adequately be implemented in the time remaining before the next school semester. They contend that immediate implementation will create administrative chaos and educational harm to LEP children, because more time is needed for the responsible agencies to issue regulations, develop and implement curricula, select text books, train teachers, assess students' language abilities, and coordinate class schedules.

Defendants present a record that the initiative can be adequately implemented in the time remaining. The State Board of Education has already issued emergency regulations, taken steps for funding, and is considering waiver requests by school districts. Defendants also contend that school districts do not have to develop entirely new materials, because they can use text books and curricula that are already in use by some California schools. At least one major school district already has a contingency plan. Moreover, one group of intervenors argues that the students will be harmed more by postponing implementation, because the present bilingual education system is failing to adequately educate California's LEP children.

There is a difference of opinion about the adequacy of the time for implementation. Indeed, plaintiffs raise some substantial problems related to implementation. It might well be good educational policy to postpone the effective date of the initiative for one year, to provide more time for a smooth transition. But this policy question is not within the province of the court to decide. The question of adequate time for implementation does not raise any violation of federal law or the constitution. It is inevitable in any change that there will be some bureaucratic hardship, some loss of continuity, and some temporary hardships. But such harms cannot be said to be irreparable rather than interim.

XII. RIPENESS REVISITED

In bringing a facial challenge to Proposition 227 the day after its enactment, plaintiffs ask this court to bar all implementation of the initiative in an anticipatory manner. At most, plaintiffs have shown that Proposition 227 is Capable of operating in a manner that might violate statutes or the federal constitution. But such a showing is insufficient for a successful facial challenge to an unimplemented statute. See *Metzenbaum v. Federal Energy Regulatory Commission*, 675 F.2d 1282, 1289-90 (D.C. Cir. 1982).

It is axiomatic that a statute is not facially invalid simply because it is possible to contemplate circumstances in which the application of the statute could result in [violation of federal law] where there is no evidence to support the claim that the terms of the statute in themselves produce that result.

Id. at 1289 (internal quotations and citations omitted). Courts regularly deny anticipatory review when further development by state officials may reduce or avoid constitutional problems, or change the nature of the issues presented. See, e.g., *Wheeler v. Barrera*, 417 U.S. 402, 426-27 (1974) (constitutional issue not ripe until a specific plan is before the Court); *Young v. Klutznick*, 652 F.2d 617, 625-26 (6th Cir.

1981) (issue not ripe where anticipated injury would not occur until state officials acted, and might not occur at all). This is particularly so where relevant programs have not yet been adopted or applied.

No one can foresee the varying applications of these separate provisions which conceivably might be made. A law which is constitutional as applied in one manner may still contravene the Constitution as applied in another. Since all contingencies of attempted enforcement cannot be envisioned in advance of those applications, courts have in the main found it wiser to delay passing upon the constitutionality of all the separate phases of a comprehensive statute until faced with cases involving particular provisions as specifically applied to persons who claim to be injured. Passing upon the possible significance of the manifold provision of a broad statute in advance of efforts to apply the separate provisions is analogous to rendering an advisory opinion upon a statute or a declaratory judgment upon a hypothetical case.

Nixon v. Administrator of General Services, 433 U.S. 425, 438 (1977) (quoting Watson v. Buck, 313 U.S. 387, 402 (1941))

Because this challenge is similarly not ripe for adjudication on the merits, plaintiffs cannot now show that they are likely to succeed on their EEOA, Supremacy Clause, Title VI and Equal Protection claims. If the programs actually implemented under Proposition 227 violate federal laws or the constitution, plaintiffs can then initiate an "as-applied" challenge.

XIII. IRREPARABLE INJURY AND PUBLIC INTEREST

"Under any formulation of the test [for preliminary injunctive relief], the moving party must demonstrate a significant threat of irreparable injury." Arcamuzi v. Continental Air Lines, Inc., 819 F.2d 935, 937 (9th Cir. 1987). Some LEP students will not receive their preferred instructional program, bilingual education, under Proposition 227. But all LEP students will receive instruction designed to teach English and reduce barriers to schools' instructional programs. At present the court is presented with the alleged differences between two educational theories, structured English immersion and bilingual education. The experts disagree over whether the implementation of Proposition 227 will benefit or harm LEP students. benefit or harm may well depend on implemented under the initiative. And the extent of any specific programs actually There is insufficient evidence to demonstrate that there will be harm, or that any actual harm would be irreparable.

Consideration of the public interest also favors the implementation of Proposition 227. "[A]ny time a State is enjoined by a court from effectuating statutes enacted by representatives of its people, it suffers a form of irreparable injury." New Motor Vehicle Bd. of California v. Orrin W. Fox Co., 434 U.S. 1345, 1351 (1977) (Opinion in Chambers of Rehnquist, Circuit Justice). This reasoning applies even more strongly here, where the statute was enacted directly by the voters of the state. See Coalition for Economic Equity v. Wilson, 122 F.3d 692, 698, n.4 (9th cir. 1997).

XIV. OTHER ARGUMENTS

The intervenors and amicus curie have made numerous other arguments. The court need not discuss all of them, but will address a few.

The Frias intervenors argue that the present bilingual system in California is itself a violation of the constitution and federal law. The legality of California's bilingual education system, however, is not an issue raised by plaintiffs in their complaint or in this motion for preliminary injunction, and therefore need not be addressed here.

The amicus curie brief filed by the California Rural Legal Assistance Foundation, on behalf of migrant LEP students, argues that Proposition 227 will place special burdens upon them. They argue that because migrant children frequently change schools, their access to the core curriculum under Proposition 227 will become even more impaired, and that it will be difficult for their parents to be involved in their educations or to use the waiver process. However, these arguments really address the educational policy question as to which system of educating LEP children will work better for this group of children. And that question is not within the province of this court. Moreover, under the Proposition 227 system, migratory students still will receive the bilingual services and other benefits of the California Migrant Education Act and of federal funding.

The Meiklejohn Civil Liberties Institute makes several arguments which are not properly within the scope of this action or this motion for a preliminary injunction. There is no issue in this case of a violation of the United Nations Charter, the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, or the International Covenant on Civil and Political Rights. Moreover, the brief of this amicus implies that Proposition 227 was motivated by racial or national origin discrimination. But as this court has already stated, the objective of both sides in this dispute is the same -- to educate all LEP children. The debate is over how best to do that. This amicus also argues that teachers have an absolute First Amendment right to teach whatever they want in the classroom. This court does not believe that the scope of the First Amendment goes that far. Courses and methods of instruction can be and are governed by state and local school district regulations, without violation of the First Amendment rights of teachers.

XV. CONCLUSION

For the reasons discussed above, the court concludes that plaintiffs are unable to sustain their burden for a preliminary injunction. The low probability of success on the merits, the speculative nature of future harm, and the public's interest in passing their state's initiative all preclude a preliminary injunction.

IT IS THEREFORE ORDERED that plaintiffs' motion for a preliminary injunction is denied.

Dated July 15, 1998

CHARLES A. LEGGE
UNITED STATES DISTRICT JUDGE

-
1. Plaintiffs have also moved for class certification, but that motion is not addressed in this order.
 2. These organizations include: (i) Los Angeles Unified School District; (ii) Education Legal Alliance of California School Boards Association; (iii) parents of migratory LEP students, represented by the California Rural Legal Assistance Foundation; (iv) Meiklejohn Civil Liberties Institute, and (v) the San Francisco Bay Area chapter of the National Lawyers Guild.
 3. Intervenors include: (i) One Nation/One California, a corporation formed by Mr. Ron Unz, a co-author of Proposition 227, (ii) Ms. Gloria Matta Tuchman, the other co-author, (iii) Las Familias del Pueblo; (iv) several LEP students enrolled in California public schools; and (v) the Center for Equal Opportunity.
 4. The United States Supreme Court has stated that federal courts must extend a high degree of deference to the states in matters dealing with statutory interpretation of state laws. *Arizona v. Gonsky*, 117 S.Ct. 1055, 1072-75 (1995). The briefing on this motion has suggested potential interpretations and ambiguities for perhaps later resolution. But neither side has suggested abstention, stay, or any other procedure to have the California state courts rule first on the interpretation of this initiative.
 5. The court notes that not all LEP students were born outside of the United States.
 6. The Board has begun that process. On July 9, 1998 the Board adopted Emergency Regulations and a suggested amendment to the policy for the use of funds from the Instructional Materials Fund.
 7. Except the State Board's Emergency Regulations.
 8. The "Congressional declaration of policy" provides
 - (a) Entitlement to equal educational opportunity~ neighborhood as appropriate basis
The Congress declares it to be the policy of the United States that--
 - (1) all children enrolled in public schools are entitled to equal educational opportunity without regard to race, color, sex, or national origin; and (2) the neighborhood is the appropriate basis for determining public school assignments.
 - (b) Purpose

FUENTES CONSULTADAS

BIBLIOGRAFÍA

BUSTAMANTE, Jorge, *Migración Indocumentada de México a Estados Unidos*, El Colegio de la Frontera Norte, 1992.

_____, *Espaldas mojadas: materia prima para la expansión del capital norteamericano*, Centro de estudios sociológicos, Colegio de México, México, 1976.

CRAWFORD James, *Hold your tongue: bilingualism and the politics of "english only"*, Addison-Wesley publishing company, Massachusetts, 1992

FERNANDEZ Ricardo, *"La educación bilingüe: ideología, legislación y litigio"*, *Al norte de la frontera el pueblo chicano*, CONAPO, México, 1988

_____, "La condición educativa de los hispanos en los EE.UU.", *Hispanos en los Estados Unidos*, Ediciones de Cultura Hispánica, Madrid, 1988.

FRED Harris y David Cooper, *Estudios sobre Estados Unidos y su relación bilateral con México*, UMAN., Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, México, 1986.

GARCÍA T. Mario, "Historia mexicana: mitos y realidades", *Mitos en las relaciones México-Estados Unidos*, Secretaría de Relaciones Exteriores-Fondo de Cultura Económica, México, 1994.

GOMEZ-QUIÑONES Juan, *Inmigración y cambio cultural. La participación cívica, la sindicalización y la educación*, *Mitos en las relaciones México-Estados Unidos*. Secretaría de Relaciones Exteriores-Fondo de Cultura económica, México, 1994.

HARO Carlos, *"Tratamiento escolar chicano: la educación bilingüe bicultural como una alternativa"*, *Al norte de la frontera: el pueblo chicano*, CONAPO, México, 1988.

LERNER Natan, *Minorías y grupos en el derecho internacional: derechos y discriminación*. Comisión Nacional de Derechos Humanos, serie folletos 1991/17.

LOVELANCE Marina, *Educación multicultural. Lengua y cultura en la escuela global*, Editorial Escuela Española, Madrid, 1995.

HERR David, *Los mexicanos indocumentados en los Estados Unidos*, Fondo de Cultura Económica, 1993.

MACIEL David, *El México de afuera: políticas mexicanas de protección en Estados Unidos*, revista mexicana de política exterior no.12, 1995.

_____, "Chicanos y mexicanos deben conocerse y entenderse", *Al norte de la frontera: el pueblo chicano*, CONAPO, México, 1988.

MACIEL David y Patricia Bueno, *Aztlán: historia del pueblo chicano*, ediciones SEP., 1975.

MC WILLIAMS Care, *Al norte de México*. Siglo XXI, México.

MEIER Matts, *Los chicanos, una historia de los México americanos*, Editorial Diana, México, 1976.

MEZA ESTRADA Antonio, *La enseñanza en la torre de babel. La educación pública en los Estados Unidos*, Más actual mexicana de ediciones, S.A. de C.V., México, 1995.

MONCADA Alberto, *Norteamérica con acento hispano*, Instituto de Cooperación Iberoamericana, España, 1992.

MONSIVAIS Carlos, "Los chicanos", *Al norte de la frontera: el pueblo chicano*, CONAPO, México, 1988.

MUÑOS SEDANO Antonio, *Educación intercultural, teoría y práctica*, Editorial Escuela Española, Madrid, 1997.

NUÑEZ GARCIA Silvia y Ana Luz Ruelas, *Dilemas estadounidenses en los noventa. impactos sobre México*, Centro de Investigaciones sobre América del Norte, 1996.

PEREZ Javier, *Nuestra diversidad creativa. informe de la comisión mundial de cultura y desarrollo*, ediciones UNESCO, México, 1996.

PESCADOR OSUNA José Angel, *Ensayos sobre la modernidad nacional. modernidad educativa y desafíos tecnológicos*, Edit. Diana, México, 1989.

RODRIGUEZ Richard, *Hunger of the memory*, David R. Godine, publisher Boston, 1982.

SALINAS IÑIGUEZ Gustavo, "La reforma al artículo 3º. constitucional en el contexto de una economía abierta", *México: desarrollo de recursos humanos y tecnología*, Colegio Nacional de Economistas, edit. Porrúa, México, 1993.

SAN MIGUEL Guadalupe, *Let all of them take heed. mexican american and the campaing for education equality in Texas,1910-1981*, University of Texas press, Austin, 1988.

SIGUAN Miguel, "Educación Bilingüe", *Hispanos en los Estados Unidos*, Ediciones de Cultura Hispanica, Madrid, 1988.

SCHUMACHER Ma. Esther, *Mitos en las relaciones México-Estados Unidos*, Fondo de Cultura Económica- Secretaria de Relaciones Exteriores, México, 1994.

STEWAR W. David, *Immigration and education: The crisis and the opportunities*, Lexinton Book, New York, 1993.

VILLAMIL TINAJERO Josefina and Alma Florada, *The power of two languages. literacy and biliteracy for spanish-speaking students*, Macmillan/Mac Graw-Hill, 1993, New York.

VILLAREAL Roberto and Norma G. Hernandez, *Latinos and political coalitions. political empowerment for the 1990s*, Praeger publishers, 1991, New York, N.Y.

WEELLE Gerrganne, *Un nuevo desafío para la planificación lingüística en México y en los estados unidos: la presencia de indígenas mexicanos en zonas fronterizas*, Seminario permanente de estudios chicanos y de fronteras, DEAS/INAH., junio 1995.

LEYES

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Constitución de los Estados Unidos de América.

Constitución del Estado de California.

Código de Educación del Estado de California.

Ley Chacón-Mascone.

Ley de los Derechos Civiles de los Estados Unidos.

Ley de Educación Bilingüe.

Ley de Igualdad de Oportunidades Educativas.

INTERNET

California Association for Bilingual Education, *Legislative report and implementation of Proposition 227.*

www.cabe.education

Congreso de los Estados Unidos de América, legislación.

<http://www.thomas.loc.gov>

Crawford James, Stephen Krashen, Haeyoung Kim, *Iniciativa anti-bilingüe, confusa en cualquier idioma,*

<http://ourword.com/purserve.com/homepages/jwcraford/rights.htm>

Duarte Salvador, *Bilingüismo*

www.rednetnews.com/biling.htm

Ericksen Charlie, *La educación bilingüe: zodiada o querida por los latinos?.*, Hispanic Link New Service, 14 de junio de 1998.

www.latinolink.com/opinion/opinion97/1019HI1S.htm

Espinoza John, *La defensa de la educación bilingüe.*

www.ourword.com.com/purserve.com/homepages/jwcraford/espin-e.htm

Goodman Alan, *La lucha por la educación bilingüe*, Obrero Revolucionario #961, 14 de junio de 1998.

www.mcs.net/~nwor/v20/960-69/961/biling-s.htm

Kerper Mora Jill, *La educación bilingüe.*

<http://cae.sdsu.edu/people/j.mora/EDBilingue/index.htm>

Méndez Lugo, Bernardo. *El migrante mexicano en Estados Unidos, de actor local a actor global*, Consulado de México en Atlanta.

www.enespanol.com/atlanta/mexiconsulate/comunicados

Obrero Revolucionario #955, *Paro de estudiantes de Prepa en defensa de la educación bilingüe*, 3 de mayo 1998, www.mcs.net/~rwor/v19/950-59/955/wolk-s.htm

Obrero Revolucionario #969, *Empiezan las clases "english only" en California*, 16 de agosto de 1998.

www.mcs.net/~rwor/v20/960-69/969/biling-s.htm

Piña Gerardo, *Hispanofobia*

<http://coloquio.com/coloquio1994pnira.txt>

Rodríguez Richard, *Diversidad o reconciliación: el gigante dormido se despierta en California*, 06-05-98.

<http://www.pacificnews.org/jinn/>

Secretaría de Relaciones Exteriores, Boletín #.40, *Intensa labor del gobierno mexicano a favor de la educación bilingüe de jóvenes y niños de origen mexicano en Estados Unidos*, 14 febrero de 1997.

www.quicklink.com/mexico/gob97feb/bol40.htm

Torres Joseph, *El debate de la educación bilingüe recibe poca cobertura de los medios nacionales*, Hispanic Link, News Service, 19 de octubre de 1997.

www.latinolink.com/opinion/opinion971119H/15.htm

U.S. California State Assembly

<http://www.assembly.ca.gov>

U.S. California State

<http://www.se.ca.gov/#legislation>

U.S. Education Department, *General questions on bilingual education*

www.edu.gov

Xasxas Javier, *California vota por la supresión de la educación bilingüe en la escuela y la exclusividad del inglés.*

www.galeon.com/v/viagaged/

OTROS.

Proposición 187.

Proposición 227.

Caso: Lau vs. Nichols, 1974.

Caso: Plyler vs. Doe, 1982.

Caso: Valeria vs. Pete Wilson, 1998.